

**APREMIOS ILEGÍTIMOS**

**C/ MIGUEL ALEJANDRO PUCHI GARCÍA**

**JOSÉ LUIS SANTIBÁÑEZ LUCERO**

**PATRICIO FERNANDO GORMAZ TORRES**

**R. I. T. N° 35-2024**

**R. U. C. N° 1901163870-0**

Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticuatro.

**VISTO:**

**Tribunal e Intervinientes:** Ante este Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, constituido por las juezas, doña Ingrid Droguett Torres, quien presidió la audiencia, doña Colomba Guerrero Rosen como tercera integrante y María José Araya Álvarez en calidad de redactora, se llevó a efecto el juicio oral, correspondiente a la causa rol único N° N° **1901163870-0**, rol interno del tribunal N° **35-2024**, seguido en contra de:

**Miguel Alejandro Puchi García**, chileno, cédula de identidad N° 15.758.770-6, casado, nacido en Valdivia, el 4 de septiembre de 1984, 40 años, Oficial de Ejército, grado de Mayor, domiciliado en Ejército esquina Balmaceda, sin número, Coyhaique;

**José Luis Santibáñez Lucero**, chileno, cédula de identidad N° 15.419.107-0, casado, nacido en Santiago, el 10 de enero de 1982, 42 años, Oficial de Ejército, grado de Sargento Segundo, domiciliado en Las Perdices N° 700, Peñalolén y;

**Patricio Fernando Gormaz Torres**, chileno, cédula de identidad N° 20.235.913-2, soltero, nacido en Osorno, el 30 de mayo de 2000, 23 años, Suboficial de Ejército, grado de Cabo Segundo, domiciliado en Las Perdices N° 700, Peñalolén.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público representado por el Fiscal Adjunto Miguel Ángel Orellana Pérez.

Por la Querellante, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, compareció Paulina Pérez Zapata y Camila Grebe Ramírez.

Por la defensa de Miguel Alejandro Puchi García compareció el Defensor Penal Privado Eduardo Ignacio Silva Muñoz.

En representación de José Luis Santibáñez Lucero comparecieron los Defensores Penales Privados Gustavo Balmaceda Hoyos y Diego Nilo Arce y;

Por la defensa de Patricio Fernando Gormaz Torres compareció el Defensor Penal Privado Nicolás André Oxman Viches.

Todos, los anteriores, con domicilio y forma de notificación, registrados en el Tribunal.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: Acusación y alegatos de apertura y clausura del Ministerio Público.**

Que el Ministerio Público dedujo acusación en contra del encartado, fundándola en los siguientes hechos:

“El día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 23:00 horas, un contingente militar de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, efectuó labores de patrullaje por diversas calles de la comuna de Peñalolén. Dicho contingente estaba conformado por una patrulla comando al mando del Capitán del Ejército el imputado Miguel Alejandro Puchi García, y dos patrullas de camiones del Ejército, la primera de ellas a cargo de la Teniente del Ejército Kamila Alejandra Navarrete Robles, e integrada por 14 personas, entre ellas el Sargento 2º del Ejército José Iván Sepúlveda Alvear, y los imputados Sargento 2º del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres; y la segunda patrulla a cargo del Teniente del Ejército Ernesto Ibarra Pulgar, integrado por 13 personas, entre ellas el Sargento 2º Francisco Javier Santander Nanjari.

En ese contexto el contingente militar se desplazó por Avenida Las Parcelas en dirección al oriente, y al llegar a la intersección con calle Quebrada de Umallani, personal tripulante del vehículo antes indicado advirtió la presencia de la víctima Sergio Antonio González Ocampo, quien al percatarse que el personal militar descendía de uno de los camiones portando fusiles y escopetas, por temor decidió salir corriendo del lugar, huyendo solo, desarmado, sin agredir al personal militar. En dicho momento, el acusado y Sargento 2º del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, quien aún se encontraba arriba del camión ya señalado, en la parte posterior del mismo, se percató de esta situación, y como primera medida ante la huida de la víctima, infringiendo los protocolos establecidos para el uso de armamento no letal, apuntó con su escopeta antidisturbios de manera directa hacia el cuerpo de la víctima, a corta distancia, percutando así un disparo directo hacia ésta, motivo por el cual Sergio Antonio González Ocampo recibió un total de 06 perdigones en distintas partes del cuerpo, particularmente en su pierna derecha, codo izquierdo, pierna izquierda, muslo y rodilla izquierda.

Todo esto ocurrió en presencia del Capitán de Ejército Miguel Puchi García, funcionario de rango más alto y que se encontraba a cargo del contingente militar, quien teniendo la facultad, autoridad y posición para impedir o al menos hacer cesar esta situación, nada hizo, sin arbitrar las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de la víctima.

Acto seguido, la víctima ya herida, siguió corriendo por calle Quebrada de Umallani, momento en el que a la orden de la Teniente Kamila Alejandra Navarrete Robles, tres cabos dragoneantes, entre ellos el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres, iniciaron la persecución de la víctima, quien dadas sus lesiones perdió el equilibrio, cayendo al piso en la intersección de la calle Umallani con Pasaje Zapiga,

para luego levantarse y seguir corriendo con dificultad por el Pasaje Zapiga. Al llegar frente a la numeración de Pasaje Zapiga N° 9125, la víctima volvió a caer, logrando el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres darle alcance, y aún antes de que la víctima lograra ponerse totalmente de pie, el imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres, lo embistió golpeándolo violentamente en sus costillas, derribándolo.

Luego la víctima fue levantada del piso, y colocada en sus manos amarras plásticas, siendo trasladado hasta la intersección de Avenida Las Parcelas con calle Quebrada Umallani, lugar donde se encontraban las patrullas militares, recibiendo en dicho trayecto un fuerte golpe de mano abierta en su cabeza, además de recibir reiterados insultos por parte del imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres.

Posteriormente, ya en la intersección recién citada, la Teniente Kamila Navarrete, hizo entrega de la víctima al imputado y Capitán del Ejército Miguel Puchi García, haciéndole presente la forma en que había ocurrido la detención y la fuerza que se empleó en esta. Sin embargo, el Capitán de Ejército Miguel Puchi García, habiendo tomado conocimiento de esto y estando al mando de dicho contingente militar, obvió las evidentes lesiones de la víctima, tampoco ordenó que fuera revisado y en lugar de trasladarlo a un Centro de Salud para que recibiera la debida atención médica, decidió, a pesar de que la víctima tenía su ropa ensangrentada, se quejaba de dolor y presentaba evidentes lesiones en su rostro, subirlo a la parte posterior de la segunda patrulla militar, con sus manos amarradas atrás de su cuerpo y boca abajo, iniciando el contingente militar desplazamientos por alrededor de algunos minutos, por diversas calles de la comuna de Peñalolén, para finalmente trasladarlo hasta la 43° Comisaría de Peñalolén, ubicada en Avenida Consistorial 2060 de esta comuna, entregándolo en calidad de detenido y sin dar cuenta del grave estado de salud en que se encontraba, lugar donde el personal de salud policial, al advertir tal situación, lo trasladó hacia un centro de salud para recibir atención médica.

Respecto de todo este procedimiento, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García, no dio cuenta a su mando en el Ejército de Chile, no dejó constancia del mismo ni informó del uso de armas de fuego por personal a su cargo. De esta manera, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García no deja constancia, ni registro alguno, de los hechos ocurridos bajo su responsabilidad.

A raíz de estos hechos, la víctima Sergio González resultó con contusión de tórax, fractura del segmento lateral del noveno arco costal izquierdo con desplazamiento y del décimo arco costal izquierdo sin desplazamiento, tabique nasal con desviación levoconvexa y espolón óseo; policontuso; neumotórax ipsilateral de escasa cuantía; enfisema en la pared del hemitórax izquierdo; extremidades inferiores con herida por perdigones en muslo, pierna y rodilla izquierda, heridas múltiples. Lesiones

explicables por la acción de objetos contundentes y proyectiles de armas de fuego, de pronóstico legal grave, que sanan entre 45 y 60 días con igual tiempo de incapacidad, dejando secuelas estéticas notoriamente visibles no deformantes en áreas expuestas habitualmente, en vías de curación, existiendo concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas crónicas y las alegaciones de abuso, según protocolo de Estambul N° 3572-2019, realizado a la víctima, por la perito Patricia Negretti Castro, de fecha 28 de Noviembre de 2019”.

Los hechos antes descritos son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos del delito de apremios ilegítimos, descrito y sancionado en el artículo 150 D) del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndole participación a los acusados Miguel Alejandro Puchi García, José Luis Santibáñez Lucero y Patricio Gormaz Torres, en calidad de autores conforme el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Respecto de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el persecutor reconoció en favor de todos los acusados la atenuante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior.

En cuanto a las penas, solicitó que se condenara a cada uno de los acusados a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como autores del delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 D) del Código Penal, a las accesorias legales establecidas en el artículo 28 del Código Penal, esto es la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa en conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal Penal.

**En su alegato de apertura**, el Señor Fiscal expuso que él investigó este caso. Fue en la época del estallido social el fiscal jefe de Peñalolén y Macul y le correspondió, efectivamente, vivir con intensidad todo ese periodo.

Un elemento que resultaba determinante a la hora de realizar un análisis respecto de la tipicidad de determinadas conductas, era, efectivamente, el concepto de abuso del cargo del artículo 150 letra D. Es verdad que, desde abril del año 2023, la norma del artículo 150 D ha sufrido una modificación que, en cualquier caso, no es una modificación sustantiva desde el punto de vista de que genere una ampliación de la descripción típica, al mencionar el señalamiento acerca de la infracción de reglamentos en términos explícitos pero, quería hacer referencia a esta historia de la modificación legal del artículo 150 D, porque, en definitiva, ya, desde los albores de las investigaciones y enjuiciamientos de casos por abusos del artículo 150 D, el tema de debate era el abuso del cargo y fundamentalmente, cómo dotar de contenido a esa expresión legislativa.

Agregó que, jurisprudencialmente, prácticamente de manera total, dentro de nuestros tribunales orales, la construcción del contenido del abuso del cargo se

estableció sobre la base de la infracción de normas reglamentarias. Principalmente, las normas que tenían a la vista las distintas instituciones, fundamentalmente policiales, en principio, pero también el Ejército, a la época. Con eso, dijo que se está refiriendo a las reglas de uso de la fuerza, en este caso, para fuerzas militares desplegadas en zonas declaradas en estado de excepción constitucional de emergencia, que es exactamente la situación de hecho en la que nos encontrábamos el día de la descripción fáctica, lo que se va a plantear con prueba testimonial, pericial, documental y videos que van a resultar fundamentales en este caso, en que el comportamiento de los acusados excedió, vulneró, no cumplió, en definitiva, con los estándares precisos que señalan estas reglas del uso de la fuerza.

Señaló que, lo que demostrarían sería el comportamiento de un imputado, un importante contingente militar subiendo por avenida Las Parcelas el día de los hechos, premunidos de armas de fuego, evidentemente, y la reacción que tuvieron respecto de la víctima que, el único error que cometió aquella noche fue correr.

Expuso que, ninguno de nosotros vivió, probablemente, en la época del estallido, en un territorio donde tuviéramos que enfrentarnos en la puerta de nuestras casas con dos camiones militares, llenos de militares, con armamento, y no nos enfrentamos a la violencia que se vivía en ese momento en la comuna de Peñalolén, pero la violencia que se vivía en la comuna de Peñalolén, o en la comuna de Macul o en la comuna de La Florida, o en cualquiera. Lo cierto es que, el comportamiento de Sergio, la víctima, es fundamentalmente, y no va a haber otra prueba en este caso, ni siquiera a partir de la prueba rendida por las defensas, lo único que hizo Sergio fue correr a Las Parcelas, luego hacia Quebrada de Umallani y doblar en dirección a Zapiga, en dirección a su casa. Ese es el delito. Había toque de queda, entonces corresponde la discusión acerca del comportamiento de los acusados.

Dijo que, en este caso se darán distintas figuras de participación, el señor Puchi, el Capitán Puchi, que era el Capitán a cargo del procedimiento, que con su hacer y no hacer es imputado por el Ministerio Público, respecto de la responsabilidad en los actos de sus subalternos, el señor Santibáñez y el señor Gormaz. En el evento de la huida, corrida de Sergio, hay una reacción que se puede desprender naturalmente de la descripción de la acusación fiscal, que está en el auto de apertura. En un primer momento, el disparo de Santibáñez desde arriba de uno de los camiones. Luego, Sergio, corriendo a maltraer por las lesiones que ya tenía, corriendo un par de cuadras hasta la calle Zapiga, que es una calle con bajada, dos caídas de Sergio en el tiempo intermedio, apenas caminando una última caída en el lugar donde fue alcanzado por Gormaz, quien embistió a Sergio, quien ya había caído, que no iba a ninguna parte y que simplemente se estaba tratando de poner de pie, se estaba tratando de incorporar, eso no es un tackle, pues este tiene reglas, así como, las tienen los militares en relación al uso de la fuerza. Cuando se escuche el golpe seco del video y el

quejido de la víctima, embestido por un cabo dragoneante con equipamiento y fusil, se entenderá que lo que se realizó en ese caso no es un tackle. La doctora Negrete que entregará toda la información sobre la etiología de estas lesiones, los resultados y las consecuencias que tuvo.

Añadió que el devenir del juicio versaría sobre el uso de la fuerza. Aquí no hay una legítima defensa, por más que busquen, no hay un acto hostil, ni siquiera avisos de una amenaza del inminente uso de la fuerza que podría derivar en un acto hostil. No concurre ninguna de las hipótesis del reglamento que rige, la *lex artis*, en definitiva, de los funcionarios del ejército, permiten reaccionar con fuerza, inclusive la no letal. Estamos hablando de un caso de utilización de fuerza no letal.

Se verá a Puchi con un arma de fuego, apuntando a Sergio, al delincuente, apuntando a Sergio mientras el resto del equipo militar le dispara. La conducta de Puchi es muy importante, porque de esa se desprende naturalmente, “él es el líder”, quien dirige. Nada de lo que está pasando ahí pasa sin la autorización de Puchi, del Capitán.

Respecto de Santibáñez, dirá: “yo disparé al suelo”, se trataba de un lugar amplio, puede que hayan rebotado los perdigones, pero Santibáñez dirá que no tuvo la suficiente capacitación para disparar sin lesionar cuando estaba tratando de hacer un disparo disuasivo.

En cuanto a Gormaz, estuvo golpeando violentamente a una persona que se estaba parando del suelo. Si su Capitán está apuntando con un arma letal a una persona a la que no tiene ninguna justificación para apuntar, según las mismas reglas que rigen su comportamiento, entonces, ¿por qué no? Todo vale. Hay que detener al delincuente, cueste lo que cueste y eso, no corresponde, eso tiene que ver con el comportamiento de Puchi que estaba posando para Megavisión, porque desde Irarrázaval, al frente de la Plaza Ñuñoa, venían haciendo un reality show para un canal de televisión, había que filmar a alguien, había que detener a alguien. Si no, no había mono. Luego, después de todo eso, el señor Puchi presta hasta una entrevista y que tiene que ver con la última etapa de la imputación del Ministerio Público, porque si disparé, me hago cargo, dejar respaldo de eso, preocuparme si le disparé a alguien. A lo menos, tengo que fijarme si lo herí, si lo lesioné y tengo que hacerme cargo de su estado de salud, pero nada de eso pasó.

Expresó que habrá información acerca de otros procedimientos que se adoptaron ese día y los días anteriores por esta misma patrulla, pero de los disparos de Santibáñez, nada. De la utilización de armas de fuego ese día, en ese procedimiento, en Las parcelas, nada. No se preocuparon de la salud del detenido. Carabineros se dio cuenta de inmediato de las lesiones, pero nadie se dio cuenta en la patrulla a cargo de Puchi que tenía lesiones. El punto es que la faz omisiva va a acreditarse sin lugar a



dudas. La faz activa, también. Nadie podrá decir que vio a Sergio tomar un arma, disparar o con piedras.

Se incumplió la orden permanente número uno de la realización de procedimientos para la entrega de detenidos, que es parte de la imputación que se le hace a Puchi, porque, además, de hecho, es puesto Sergio con amarras plásticas con perdigones, con una fractura de costilla, con hemotórax, con las manos en la espalda, boca abajo, en los pies de los militares.

En su **alegato de cierre y réplica**, el señor Fiscal efectuó un análisis pormenorizado de la prueba y del tipo penal por el cual formuló acusación insistiendo en su solicitud de condena.

**SEGUNDO: Querella del Instituto de Derechos Humanos.** Que, la parte Querellante, dedujo acusación en los siguientes términos:

“El día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 23:00 horas, un contingente militar de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, efectuó labores de patrullaje por diversas calles de la comuna de Peñalolén. Dicho contingente estaba conformado por una patrulla comando al mando del Capitán del Ejército el imputado Miguel Alejandro Puchi García, y dos patrullas de camiones del Ejército, la primera de ellas a cargo de la Teniente del Ejército Kamila Alejandra Navarrete Robles, e integrada por 14 personas, entre ellas el Sargento 2º del Ejército José Iván Sepúlveda Alvear, y los imputados Sargento 2º del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres; y la segunda patrulla a cargo del Teniente del Ejército Ernesto Ibarra Pulgar, integrado por 13 personas, entre ellas el Sargento 2º Francisco Javier Santander Nanjari.

En ese contexto el contingente militar se desplazó por Avenida Las Parcelas en dirección al oriente, y al llegar a la intersección con calle Quebrada de Umallani, personal tripulante del vehículo antes indicado advirtió la presencia de la víctima Sergio Antonio González Ocampo, quien al percatarse que el personal militar descendía de uno de los camiones portando fusiles y escopetas, por temor decidió salir corriendo del lugar, huyendo solo, desarmado, sin agredir al personal militar. En dicho momento, el acusado y Sargento 2º del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, quien aún se encontraba arriba del camión ya señalado, en la parte posterior del mismo, se percató de esta situación, y como primera medida ante la huida de la víctima, infringiendo los protocolos establecidos para el uso de armamento no letal, apuntó con su escopeta antidisturbios de manera directa hacia el cuerpo de la víctima, a corta distancia, percutando así un disparo directo hacia ésta, motivo por el cual Sergio Antonio González Ocampo recibió un total de 06 perdigones en distintas partes del cuerpo, particularmente en su pierna derecha, codo izquierdo, pierna izquierda, muslo y rodilla izquierda.

Todo esto ocurrió en presencia del Capitán de Ejército Miguel Puchi García, funcionario de rango más alto y que se encontraba a cargo del contingente militar, quien teniendo la facultad, autoridad y posición para impedir o al menos hacer cesar esta situación, nada hizo, sin arbitrar las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de la víctima.

Acto seguido, la víctima ya herida, siguió corriendo por calle Quebrada de Umallani, momento en el que a la orden de la Teniente Kamila Alejandra Navarrete Robles, tres cabos dragoneantes, entre ellos el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres, iniciaron la persecución de la víctima, quien dadas sus lesiones perdió el equilibrio, cayendo al piso en la intersección de la calle Umallani con Pasaje Zapiga, para luego levantarse y seguir corriendo con dificultad por el Pasaje Zapiga. Al llegar frente a la numeración de Pasaje Zapiga N° 9125, la víctima volvió a caer, logrando el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres darle alcance, y aún antes de que la víctima lograra ponerse totalmente de pie, el imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres, lo embistió golpeándolo violentamente en sus costillas, derribándolo.

Luego la víctima fue levantada del piso, y colocada en sus manos amarras plásticas, siendo trasladado hasta la intersección de Avenida Las Parcelas con calle Quebrada Umallani, lugar donde se encontraban las patrullas militares, recibiendo en dicho trayecto un fuerte golpe de mano abierta en su cabeza, además de recibir reiterados insultos por parte del imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres.

Posteriormente, ya en la intersección recién citada, la Teniente Kamila Navarrete, hizo entrega de la víctima al imputado y Capitán del Ejército Miguel Puchi García, haciéndole presente la forma en que había ocurrido la detención y la fuerza que se empleara en esta. Sin embargo, el Capitán de Ejército Miguel Puchi García, habiendo tomado conocimiento de esto y estando al mando de dicho contingente militar, obvió las evidentes lesiones de la víctima, tampoco ordenó que fuera revisado y en lugar de trasladarlo a un Centro de Salud para que recibiera la debida atención médica, decidió, a pesar de que la víctima tenía su ropa ensangrentada, se quejaba de dolor y presentaba evidentes lesiones en su rostro, subirlo a la parte posterior de la segunda patrulla militar, con sus manos amarradas atrás de su cuerpo y boca abajo, iniciando el contingente militar desplazamientos por alrededor de algunos minutos, por diversas calles de la comuna de Peñalolén, para finalmente trasladarlo hasta la 43° Comisaría de Peñalolén, ubicada en Avenida Consistorial 2060 de esta comuna, entregándolo en calidad de detenido y sin dar cuenta del grave estado de salud en que se encontraba, lugar donde el personal policial, al advertir tal situación, lo trasladó hacia un centro de salud para recibir atención médica.



Respecto de todo este procedimiento, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García, no dio cuenta a su mando en el Ejército de Chile, no dejó constancia del mismo ni informó del uso de armas de fuego por personal a su cargo.

De esta manera, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García no deja constancia, ni registro alguno, de los hechos ocurridos bajo su responsabilidad.

A raíz de estos hechos, la víctima Sergio González resultó con contusión de tórax, fractura del segmento lateral del noveno arco costal izquierdo con desplazamiento y del décimo arco costal izquierdo sin desplazamiento, tabique nasal con desviación levoconvexa y espolón óseo; policontuso; neumotórax ipsilateral de escasa cuantía; enfisema en la pared del hemitórax izquierdo; extremidades inferiores con herida por perdigones en muslo, pierna y rodilla izquierda, heridas múltiples.

Lesiones explicables por la acción de objetos contundentes y proyectiles de armas de fuego, de pronóstico legal grave, que sanan entre 45 y 60 días con igual tiempo de incapacidad, dejando secuelas estéticas notoriamente visibles no deformantes en áreas expuestas habitualmente, en vías de curación, existiendo concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas crónicas y las alegaciones de abuso, según protocolo de Estambul N° 3572-2019, realizado a la víctima, por la perito Patricia Negretti Castro, de fecha 28 de Noviembre de 2019.

Asimismo, la víctima, producto de los hechos ocurridos ha presentado sintomatología propia de estrés postraumático, presentando cuadros de angustia, ansiedad, ánimo cambiante, sintiendo desmotivación, tristeza y preocupación, además de vulnerabilidad, amenaza y desconfianza. Los hechos provocaron un quiebre significativo en su ciclo vital, viéndose afectado en el ejercicio pleno de su autonomía y sobre todo en el ámbito ocupacional”.

El acusador particular estimó que los hechos descritos configuran el delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, en grado de consumado, correspondiéndole a los imputados participación en calidad de autores de acuerdo con el artículo 15 N°1 del Código Penal.

En cuanto a circunstancias modificatorias, el querellante estimó que no concurrirían.

Culminó solicitando la condena del acusado a las siguientes penas: 5 años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias del artículo 29 del Código Penal y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 del Código Procesal Penal, al pago de las costas de la causa.

En su **discurso inicial**, la Querellante, refirió que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, interviene en causas en las cuales es un agente público, en este caso, un contingente militar, que ha infringido, normas reglamentarias, desde luego normas legales, configurando delitos.

La importancia de su intervención tiene que ver con el actuar correcto y ajustado a la norma de los funcionarios que detentan el poder público, las armas, el poder de control y desde luego de represión en ciertos contextos. Hablar de esto justamente no tiene que ver solamente con los casos particulares, no es solo Sergio González, no es solamente una víctima, sino que, también tiene que ver con los pilares de una organización. Un Estado democrático que debe ser regido por el principio de legalidad y que, desde luego, esto debe influir sustancialmente en la forma en que vamos a evaluar las conductas de las personas que la han infringido.

Durante este juicio vamos a tener como columna vertebral el relato de Sergio González, que es un vecino del sector. La agresión se produce a pocos metros y cuerdas de su domicilio, es importante señalar que son metros y cuerdas porque esto fue un continuo de agresión, no es un momento único. Se inicia con un disparo en contra de la víctima, quien corre hacia su domicilio. Un segundo momento de agresión se produce a escasos metros de su domicilio. La relevancia de estos momentos tiene que ver con que la ilegalidad es el germen de toda la actuación. Desde el primer momento, como bien lo ha señalado el Ministerio Público, los funcionarios militares no estaban habilitados para proceder como inicialmente lo hicieron, para exhibir las armas, para disparar y menos aún, para detener a Sergio González en el contexto que fue. Es decir, tenemos un actuar antirreglamentario e ilegal.

Anunció que contaríamos con el relato de la víctima, que es esta columna vertebral, pero también testigos presenciales, que no son cualquier testigo, sino que son gente cercana del sector. Son estas mismas personas quienes graban uno de los videos que vamos a ver durante el transcurso de este juicio, que se va a complementar con el video de Megavisión, que también va a ser exhibido y que también nos va a hacer una idea de lo que está ocurriendo en el lugar.

Añadió que Sergio González estaba cometiendo una falta, estaba en la calle, en horario de toque de queda, pero solo, corriendo entre los camiones, sin hacer referencia a ningún otro incidente. En ningún momento vamos a escuchar que Sergio estuviera formando parte de una turba, que Sergio estuviera junto con más personas en el lugar, o que al momento de que los funcionarios comienzan a agredir a esta víctima, hubiese algún tipo de ataque o agresión en contra de los funcionarios militares.

Dijo que la posición especial de ser un funcionario público no solamente implica que estamos regidos, como todos los funcionarios públicos, por el principio, de legalidad, que también están regidos por las normas reglamentarias, sino que también implica que justamente estos funcionarios públicos, en el contexto en el cual se desarrollan los hechos, estaban obligados a promover y respetar los derechos humanos de las personas, especialmente llamados a ese respeto. Por lo tanto, tenemos una situación bastante paradójica, porque quienes debían proteger, resguardar y

cuidar, y esa era la función por la cual estaban en las calles, son justamente quienes terminan agrediendo gravemente, en este caso, a una persona, la víctima que fue, desde un inicio, sometida a un procedimiento que fue antirreglamentario e ilegal.

Agregó que, respecto a la situación fáctica, es decir, la detención de don Sergio González, en el momento y en el contexto en el cual ocurre, desde luego hablamos de ilegalidad y antirreglamentario porque hay normas que regulan en qué contexto alguien puede ser detenido. Desde luego, normas legales. Nuestra Constitución es una Constitución que no es una Constitución que se puede detener. Nuestro mismo código Procesal Penal, que incluso permite que cualquier persona pueda proceder a una detención, pero desde luego, los funcionarios militares en su especial posición, rango y conocimiento, también pueden detener. Los funcionarios militares están habilitados para detener, registrar, desarmar a individuos que cometan actos hostiles o que intenten cometer actos hostiles, pero, solo si es que, estaban o no habilitados para actuar. Habrá que determinar si es que don Sergio González se encontraba o no, cometiendo un acto hostil o hubiese intentado cometerlo, pero como bien se ha señalado, el único hecho que se le imputa a don Sergio González fue una falta, que era infringir el toque de queda, lo que consta en documentos oficiales, en instrumentos públicos, como el parte policial y el acta de entrega de detenidos, que dan cuenta de manera individual, que esa fue la única causa por la cual se encontraba detenido.

Por otro lado, expresó que, respecto a la especial posición de los agresores, este sujeto activo, que no es cualquier sujeto activo, incumplió el artículo quinto inciso segundo de la Constitución Política, lo que se trata de un incumplimiento legal y normas también de rango reglamentario.

En relación a la víctima, esto desde luego, produjo grave afectación. El delito de apremio, que lo diferencia de otros delitos en los cuales igual puede haber una afectación a la salud de las personas, en este caso tiene distintas aristas. Hablamos de una gravedad desde el punto de vista físico, Sergio terminó con lesiones graves. Desde el punto de vista emocional y lo vamos a ver desde su propio relato, todo lo que esto ha implicado para él y el curso vital de su vida; y también, desde luego, secuelas psicológicas que son tratadas hasta el día de hoy y que ha sido un largo camino para que Sergio González se mantenga adherido a esta causa.

Respecto a los elementos a probar, el elemento del abuso del cargo de las funciones, para lo cual necesariamente debemos hablar de las funciones a la luz de ciertos principios generales que regulan el actuar. Esto está relacionado con las R.U.F., pero también está relacionado con el Corpus Iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se ha ido construyendo jurisprudencialmente de manera bastante contundente y sostenida los principios que deben regular el actuar de los funcionarios públicos. El principio de legalidad, el principio de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Estos principios están referidos de manera explícita en las reglas de

uso de la fuerza, también influyen de manera bastante contundente en otros fallos que se han dictado a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se ha ido desarrollando justamente, por ejemplo, el fallo hermanos Landeta-Mejías versus Venezuela, es uno de los primeros fallos del año 2014 que desarrolla de manera bastante extensiva que se debe entender por cada uno de estos principios. ¿Y por qué es importante hacer referencia a normas del derecho internacional de los derechos humanos? Porque cuando leemos la introducción de las reglas de uso de la fuerza, justamente el contenido que ahí se dota guarda relación con lo que se ha venido desarrollando en estos documentos internacionales. Por lo tanto, estos principios que parecieran ser bastante genéricos, nos van a llevar durante el transcurso de este juicio a cuestionarnos si es que se cumplían o no en este caso.

Manifestó que en este contexto habrá que determinar si el señor Santibáñez estaba o no autorizado para utilizar el armamento antidisturbios, situándolo en un primer momento, vinculando esto, además, con la actitud del señor Puchi de sacar su arma letal en ese momento, quien no solamente tenía el mayor grado jerárquico, no era sólo el capitán que estaba a cargo de todo el contingente, sino que, además, fácticamente estaba posicionado a escasos metros en que todo esto ocurría. Entonces, bastaba un grito tal vez, una orden, para una institución que actúa de manera disciplinaria, jerárquica, para que el curso causal de los hechos se hubiese detenido por completo, y aquello no ocurrió. Nos vamos a preguntar si, efectivamente, era necesario en ese contexto, en que sólo estaba Sergio González en la calle y nadie más, utilizar munición antidisturbios. En relación a la proporcionalidad, había alguna forma alternativa de haber logrado el mismo objetivo, que era detener a una persona por infracción de toque de queda.

Volviendo sobre las reglas de uso de la fuerza dijo que, las mismas habilitan al uso de la fuerza y también, habilitan al uso de armas letales o menos letales, como son denominadas, pero como medida de última necesidad. Primero, debe hacerse una advertencia. Segundo, tiene que haber un intento de negociación verbal. Es decir, tienen que haber manifestaciones verbales para no utilizarlo y estar solos frente a un acto hostil o un intento hostil para que pudiéramos llegar a esta última instancia que es el uso de las armas. Nada de esto ocurrió. Pero incluso en el evento que se está habilitado para proceder con un disparo, hay dos conductas posteriores que son necesarias. Primera, asistencia médica, o sea, debo verificar si he herido o no a alguien. La misma persona que ejecuta la acción tiene que conseguir la asistencia médica. Y además tiene que realizar un informe que dé cuenta formalmente del incidente. Incluso las normas del uso de la fuerza señalan expresamente con letras A, B, C, qué debe indicar este reporte. Es decir, está bastante regulado.

En cuanto a un segundo momento señaló que la víctima se encontraba herida y que como bien se ha indicado, iba trastabillando, su andar ya era lento, por lo tanto,

entendemos que ni siquiera habilitaba para que el contingente se acercara a él, menos aún para golpearlo de la manera que lo golpeó.

Luego de su análisis, insistió en su solicitud de condena.

**En su alegato de clausura y réplica**, reiteró su propuesta inicial, formuló un análisis de la prueba considerando acreditados los hechos tal como figuran en su acusación y se mantuvo en su postura inicial.

**TERCERO: Teoría de la Defensa de los acusados.** Que, en su **alegato de apertura, la defensa de Miguel Alejandro Puchi García** anunció que se trataría de un juicio bastante particular, de un juicio bien sui generis, porque va a ser un juicio del Estado contra el Estado. El Ministerio Público, quien ejerce la acción penal, obviamente, acusa a diversos funcionarios militares, quienes se desempeñaron en la Región Metropolitana a propósito del Estado de excepción constitucional, ejerciendo labores de orden público. Labores que, como bien sabemos, no son propias de los funcionarios militares, más bien, dicen relación con una cuestión de carácter policial. Esta misión que a ellos se les ordena, obviamente, es a propósito del Decreto Supremo evacuado por el Ejecutivo y, obviamente, mandatado todo esto a través de la Constitución Política de la República y la Ley de Estado de Excepción Constitucional. Por lo tanto, si vamos a hablar de legalidad o de juridicidad, aquí tenemos los pilares para aquello. Precisamente, la labor de los acusados, su patrulla, y obviamente las restantes patrullas de las Fuerzas Armadas que se emplearon en la calle en aquella jornada, responden a aquello. Los hechos, han sido relatados de manera lata por los acusadores, pero se olvidan de cuestiones que son básicas para poder entender el contexto de cómo ocurrieron los mismos.

Detalló que su representado y los otros acusados, patrullaron las calles en función del Decreto Supremo 472 del 18 de octubre del año 2019, para velar por el orden público que estaba gravemente alterado. Había barricadas en la vía pública, había saqueos considerables en locales comerciales, el metro de Santiago estaba cerrado. Por lo tanto, se impedía el normal funcionamiento de la ciudad. Todo esto, se lee literal del decreto de Estado de excepción constitucional, y los que estamos aquí presentes vivimos aquella época y podemos dar cuenta efectivamente de lo que ocurrió para la época del estallido social. Por lo tanto, la invitación, desde ya, es que nos situemos en aquella época porque, tal como lo refieren los acusadores, los hechos están totalmente descontextualizados.

Dijo que una patrulla a comando significa, simplemente, que quedan a cargo de un comandante, de un jefe. Hoy, el Mayor Puchi. Los acusadores, prácticamente dan a entender que, los militares salieron como unos terroristas del Estado. Su representado, en aquel tiempo, era profesor de la Escuela de Telecomunicaciones, ni siquiera profesor de infantería.

Añadió que los hechos que serán acreditados por estas defensas serán los siguientes: que efectivamente, el día 21 de octubre del año 2019, se realizó un control en la vía pública. Este control en la vía pública se desarrolló primero por la violación del toque de queda. Aquel día, 21 de octubre, el toque de queda era a las 20:00 horas y estos hechos dan cuenta, aproximadamente, de las 23:00 horas. o sea, no es que el señor Sergio González iba de vuelta a su casa del trabajo, o venía caminando, sino que, llevaba a lo menos tres horas violando el toque de queda. Se procede a este procedimiento no por una cuestión meramente azarosa. Se controla porque cuando la patrulla militar iba circulando, a baja velocidad, además, porque en toda la comuna de Peñalolén, había cables cruzados entre los postes. Los camiones militares tenían que avanzar a una velocidad, no tan rápida para no ser víctima de aquello. Cuando iban avanzando, ven a lo lejos disparos de armas de fuego. Ven y escuchan. En particular, su representado ve y escucha los fogonazos de las armas de fuego, propio de un proceso de deflagración de un arma de fuego y el estruendo que produce un arma de fuego. Esa es la motivación. Ese es el antecedente y ese es el por qué, se procede a hacer este control. Cuando las patrullas militares hacen ingreso a un pasaje, encuentran precisamente al señor Sergio González, a la víctima del caso que arranca del control. Los funcionarios militares no expertos en orden público, ven que si arranca es porque probablemente él haya sido quien haya estado disparando. El señor Sergio González corre hacia la patrulla militar, en dirección a la patrulla militar, de manera directa. Se le dan distintas órdenes de alto, de detención, haciendo caso omiso a las mismas. Se intentó el diálogo, sin embargo, el señor Sergio González no obedeció las órdenes. Continúa la carrera hacia la patrulla militar. ¿Qué se hace? Se utiliza un medio no letal para proceder a su detención. ¿Y cuál es este? Se procede al disparo de munición de fogeo. Munición que sólo se usa para disparar, solo suena, no proyecta un proyectil balístico susceptible de causar alguna herida ni lesionar. ¿Qué hace el señor González?, continúa corriendo, no se detiene y posteriormente, cuando el señor González ya va a enfrentar a la patrulla, y corre en dirección de una funcionaria, mujer obviamente, Kamila Navarrete, el señor Santibáñez, efectúa un disparo de munición antidisturbios a una zona segura para evitar que éste sea lesionado. ¿Qué ocurrió? El señor González tampoco se detiene. Y continúa corriendo. En ese momento, la oficial a cargo de ese camión, porque hay que decir que este este convoy militar estaba compuesto por dos camiones militares y una camioneta y la camioneta del canal Megavisión. Su representado, el comandante de toda la patrulla, de todo el convoy, y por cada camión había un oficial a cargo. En el primer camión, el Teniente Ibarra. En el segundo camión, la Teniente Navarrete. La Teniente Navarrete, en aquel momento, corrió despavoridamente, ordena el desembarque de aquel vehículo militar para que salgan en persecución de este individuo. ¿Qué es lo que hizo su representado en aquel momento?, consciente de que él y solamente los otros dos oficiales, el Teniente Ibarra



y la Teniente Navarrete, eran los únicos funcionarios que portaban armamento con munición real, se bajan todos, obviamente, de sus respectivos vehículos y hacen un perímetro al convoy, velando por la integridad de todos los ocupantes de la patrulla y particularmente de los civiles de la prensa. Eso es lo que hace su representado, por eso también desenfunda su arma de fuego, porque esto ocurrió en segundos, su representado, obviamente, ante la presencia de disparos, los ve, los escucha, él desenfunda legítimamente su arma de fuego, no realiza tiros. ¿Qué ocurre al siguiente momento? Efectivamente salen en la persecución de don Sergio y finalmente don Sergio es traído a la presencia de su representado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es tener presente desde ya, que la persecución no fue a escasos metros sino a un par de cuadras y no cuadras que uno pueda observar de manera directa, sino que hay varias curvas entre medio, su representado estaba en imposibilidad física de ver el proceso de la detención.

Agregó que su defensa es absolutoria porque se llevó a efecto una detención haciendo un uso gradual, proporcional y escalonado de la fuerza. Acá se ha hablado de las reglas del uso de la fuerza. ¿Cuáles son los principios de aquello? Uso gradual de la fuerza, la proporcionalidad y que la fuerza sea dispuesta de manera escalonada. Órdenes verbales, se hicieron. Tiros a fogueo, se hicieron. Tiros antidisturbios, se hicieron, pero el señor Sergio González no se detuvo. ¿Qué procedía? En este caso, la detención de la forma en la que se hizo. Por lo tanto, aquí no se advierte en ningún caso abuso de autoridad ni menos infracción a reglamento alguno.

Refirió que los hechos, porque los hechos son atípicos. No pueden ser subsumidos dentro del tipo penal objetivo porque no hay abuso de cargo, no hay infracción de reglamento, por otro lado, tampoco puede ser subsumido dentro del tipo penal subjetivo. Este es un delito doloso. Hay autores que van más allá ya hablan de que este delito es un delito de tendencia interna intensificada. Según el Ministerio Público su representado no efectuó hipótesis comisivas, sino que más bien omisivas, en el sentido de no hacer cesar los apremios, estando en posición de hacerlo, no dar cuenta a la autoridad, o no dar cuenta a su superior. Su representado, si bien era el jefe de aquel convoy militar, no estaba en una posición que permitiera advertir el tema de la detención. Nadie puede ser juzgado, ni condenado por hechos que no conoce.

Dijo que, además, se señaló en la acusación que su representado no dio cuenta de aquel suceso, lo que no fue efectivo, pues el testigo Orellana Burrows, referirá expresamente cuando su representado le dio noticia de todos los hechos que nos convocan. No solamente a nivel verbal, sino que a través de conversaciones de la red social WhatsApp y por audios de la misma.

Señaló que su representado, don Miguel Puchi, de actuales 40 años de edad, Mayor de Ejército, en aquel tiempo, Capitán de Ejército, es casado, tiene una hija, es profesor de la Escuela de Telecomunicaciones, recibió incluso felicitaciones en la

institución por su desempeño durante el estallido social. Su representado no se salió a hacer un espectáculo como un reality show, como se dijo, aquí solamente se cumplió con un deber.

**Durante la clausura y réplica**, efectuó un análisis de la prueba y del tipo penal, insistiendo en la necesidad de haber acreditado cuales fueron las reglas de uso de la fuerza, lo que estimó que no ocurrió.  
insistió en la absolución del enjuiciado.

**En su alocución inicial, el abogado defensor de José Luis Santibáñez Lucero**, señaló que expondría su alegato dividiéndolo en seis partes. Primero, una referencia breve al contexto. En segundo lugar, se concentrará en la persona de José Luis. En tercer lugar, el antecedente previo a la detención. En cuarto lugar, una referencia a la detención misma. En quinto lugar, una breve referencia al tipo penal que dice estrecha relación con la última parte del alegato, que es la petición de absolución.

Partiendo del contexto, en Chile, a partir del día 18 de octubre, estuvimos frente a un estallido social, donde sabemos que los acontecimientos derivaron en disturbios, en afectación de la propiedad pública y privada, alteración del orden público, diferentes quemas, incendios, etcétera, lo que produce una reacción por parte del Estado chileno. El decreto 472, que se refiere al estado de excepción de emergencia, que se publica el día 19 de octubre del año 2019. Aquí nace, nace en José Luis y en sus compañeros de armas un deber por parte del Estado, que es la restauración del orden público. Esto es súper importante, porque acá nos concentramos frente a un hecho público y notorio. En la persona de José Luis, en el profesional, mejor dicho, nace el deber de cumplir con funciones policiales. Estamos hablando de un profesional militar, que no está entrenado para eso. Se trata de profesionales con formación militar, todos diciendo que estos profesionales no tienen formación para cumplir con deberes policiales. Están formados para proteger nuestra seguridad, están entrenados para protegernos a propósito de calamidades naturales. Pero no están entrenados para cumplir con funciones policiales y el Estado, normativamente, les impuso el deber de cumplir con funciones policiales.

En cuanto a la persona de José Luis Santibáñez, dijo que es un padre de familia, tiene una niña de nueve años de edad, es un reconocido y querido de la Escuela de Telecomunicaciones. Tiene 23 años de servicio en el Ejército de Chile. tiene una intachable hoja de vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

En cuanto al contexto previo a la detención, señaló que el 21 de octubre, José Luis se encontraba en una patrulla con personal de la Escuela de Telecomunicaciones, en su patrulla, con varios alumnos, el profesor sin formación policial, con alumnos en formación dentro de la escuela, que tampoco tenían la capacitación y formación para

cumplir con esos deberes policiales, pero que siempre respetaron los derechos humanos.

En lo que dice relación a la detención de Sergio González Ocampo, señaló que demostrarían en el juicio oral que fue escalonada y también, que fue proporcional. Antes de entrar en ese punto, si lo llevamos al tema policial, se trataba de un simple control para que don Sergio dé una explicación. Don Sergio tenía que explicar simplemente por qué estaba infringiendo el toque de queda, en una zona donde había disturbios y donde había incidencias y disparos. Su representado vio que hay disparos, que hay barricadas. Entran a un lugar que es Avenida Las Parcelas con la Quebrada de Umallani, y aquí viene el tema de la gradualidad en las reglas del uso de la fuerza. Primero, se le hace a don Sergio una primera advertencia, que consiste en que se le ordena a viva voz que se detenga, todo esto, en un contexto de tiempo muy rápido, después viene una segunda advertencia. En esa segunda advertencia, se hace uso de munición, que se llama no letal, de ruido, específicamente arma de fogeo. Pese a la primera advertencia que se le dice a viva voz que se detenga. Pese a la segunda advertencia, que se hace uso de esta arma de ruido, don Sergio no se detiene, huye, se escapa. Entonces, ahí recién viene la tercera advertencia, que es el momento en que José Luis dispara al suelo, esto es súper importante, un solo tiro con munición antidisturbios. Es recién ahí, explicada esta gradualidad, donde José Luis hace uso de esta arma. Avanza el tiempo, don Sergio es detenido, se sube a otro vehículo donde no estaba José Luis Santibáñez y se lo entrega inmediatamente a la comisaría número 43. Hecho relevante de todo esto es que, en el momento en que todo este proceso estaba siendo documentado por un canal de televisión, Mega.

En lo que respecta al tipo penal, planteó tres problemas. El primero, que no se acreditará una relación de causalidad, no van a poder acreditar que fue un perdigón que sale del único disparo que efectúa al suelo José Luis Santibáñez Lucero. No tienen cómo demostrar que fue precisamente ese perdigón, el que causa lesiones a don Sergio Gómez. El segundo problema que nos encontramos frente al tipo penal es el bien jurídico protegido en el delito de apremio ilegítimo. Sabemos que la integridad personal en una íntegra, completa protección de la dignidad que tenemos todos los seres humanos. Como dice el Tribunal Constitucional, somos individuos porque tenemos una carga genética única e irrepetible. Por lo tanto, esto tiene una conexión directa con qué es lo que conocía y quería el sujeto activo, en este caso José Luis. José Luis Santibáñez conocía y quería cumplir con un deber policial. José Luis no conocía y quería que estaba tratando a otro ser humano como una cosa, como un tarro, como una pelota. No estaba cosificando a ninguna persona. Lo que conocía y quería era cumplir con un deber en los términos que nos corresponden. En tercer lugar, es sumamente relevante la modificación que surge a través de la ley Naín Retamal, a través del concepto de infracción de reglamento, porque eso es precisamente lo que

define la antijuridicidad material de los delitos, que antes de la modificación lo trataba de hacer la doctrina, pero después una ley, y esta es una ley que, aunque es ex post a los hechos, favorece a José Luis y, por lo tanto, por eso le tiene que ser aplicable. La exigencia del conocimiento, o sea, de que, abusando del oficio con infracción de reglamento, el concepto de infracción de reglamento es fundamental para explicar, como bien se dijo recientemente, la infracción a una Lex Artis, o sea, el conjunto de procedimientos y protocolos aceptados por algún sector de la actividad. En este caso, y aquí viene lo que va a ser imposible de demostrar, el incumplimiento de funciones policiales por parte de funcionarios públicos que están entrenados por mandato de la Constitución y las leyes para cumplir con otro tipo de deberes, que es proteger nuestra seguridad y nuestra soberanía, no cumplir con funciones policiales, el Estado chileno le exige cumplir con un deber, deber para el cual no estaba preparado, porque no tiene formación policial y es el mismo Estado el que está ahora reprochando el cumplimiento de ese deber, es un reproche ex post, por no actuar conforme a instrucciones y conocimientos que tenía ex ante. El hombre medio ¿Cómo se habría comportado un profesional en el mismo lugar y en las mismas condiciones, con la misma formación que José Luis Santibáñez Lucero?

En definitiva, pidió la absolución de su representado porque no se cumple el tipo de deber y porque él se encontró en todo momento cumpliendo con un deber.

**Durante su alegación final** efectuó las mismas alegaciones que en la apertura haciendo hincapiés en el vínculo de causalidad, atipicidad de la conducta y que se configuraba en favor de su representado la eximente del artículo 10 N° 10 del Código Penal.

Por último, **en su alegación inicial la defensa de Patricio Fernando Gormaz Torres** solicitó la absolución, esencialmente porque respecto de la participación de su representado en los hechos, no puede acreditarse su culpabilidad.

Dijo que, en un Estado democrático de Derecho, todos sabemos que existe el principio de culpabilidad y ese principio exige que toda persona sea condenada en un proceso, toda vez, que existen pruebas que permitan destruir su presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. En su caso, hay una relación de causalidad mínima, pero que, respecto de su representado, no es atribuible a dolo. No hay dolo ni imprudencia en su actuar.

Aclaró que, un Estado de Derecho, se rige por el principio de culpabilidad y eso exige, necesariamente, proscribir la responsabilidad objetiva. Aquí hay un hecho dañino, una persona terminó lesionada, con sus costillas rotas y con diversos tipos de lesiones graves y además con un daño psicológico. Nadie en un Estado de Derecho quiere salir a la calle y volver a su casa en esas condiciones o terminar en un hospital. Sin duda, ese hecho es reprochable o al menos moralmente reprochable que ocurra en una sociedad como la nuestra. Sin embargo, en el caso de su representado, no existe

una atribución plausible de responsabilidad a título de dolo o de imprudencia en esos resultados lesivos. Necesariamente, atribuirle la responsabilidad por lo que ocurrió implicaría vulnerar el principio de culpabilidad atribuyéndole responsabilidad sólo por el resultado lesivo proscrito, por cierto, por nuestra Constitución y por nuestro Código Procesal Penal en sus principios. No hay responsabilidad vicaria objetiva en un Estado Constitucional y democrático de Derecho.

En cuanto a los hechos, dijo que, estábamos en un estado de excepción constitucional, regulado por un decreto de 18 de octubre, que les atribuía a los militares la obligación de efectuar labores de orden público, don Patricio Gormaz únicamente era dragoneante, era un alumno de la Escuela de Suboficiales del Ejército, llevaba únicamente un año y nueve meses de instrucción y tenía apenas 19 años de edad.

Dijo que, su representado ingresó al Ejército de Chile porque para él es una institución que surge en el albor de la República. Es ideal. Es idéntica a la formación de nuestra República, más allá de todos los problemas que haya tenido durante su desarrollo y todos los problemas históricos en los cuales ha sufrido y en los cuales ha participado y en los cuales se les atribuye o se les puede atribuir responsabilidad institucional. La motivación por la cual su representado ingresó al Ejército fue sencillamente servir a la República, motivado por las imágenes que durante niño vio de la catástrofe del terremoto y la participación que habían tenido los militares. El restablecimiento de distintas ciudades como consecuencia de lo que ocurrió en el año 2010. Ese es el Ejército que él vio, el Ejército que colaboraba en Haití, el Ejército respetuoso de los Derechos Humanos.

Volviendo a los hechos, dijo que su representado se encontraba en uno de los dos camiones que estaban en ese lugar, él se encontraba a cargo de la Teniente Navarrete en un vehículo militar donde iban 14 personas en total, a cargo, además, de dos sargentos, don José Sepúlveda y don José Luis. En este contexto a su representado se lo ordenó por la Teniente a cargo del convoy, detener a la persona que es víctima de estos hechos, don Sergio. Gormaz junto a otros cabos dragoneantes, al menos otros dos, los señores Molina y Burgos, procede a detener a la víctima en el contexto en el cual ocurrió esta situación y con los elementos que él portaba. No es posible atribuirle dolo a su representado en la representación del resultado lesivo, pues su representado pesaba 80 kilos a la fecha de los hechos, portaba una placa balística que al menos pesaba otros 20 y a eso hay que sumarle todo el equipo militar, compuesto por un fusil SIG 542 que portaba. ¿Qué podría haber hecho en ese contexto para efectos de determinar si su actuar fue proporcional? Haber efectuado lo que un tackle. Sencillamente abrazarlo para detenerlo. Se lanzó sobre la víctima y como consecuencia, de haberse lanzado sobre él, lo botó al suelo, después lo detuvo, le puso las esposas y lo subió al otro camión. Ahí, su representado se desentiende por

completo de lo que pasa dentro de ese camión y las condiciones en las cuales fue trasladado esa persona. Eso es todo su actuar. ¿qué podría haber hecho? ¿Qué conducta alternativa podría haber resultado proporcional? ¿O podríamos exigirle racionalmente haber realizado? Bueno, ¿qué podría ser aquella conducta ajustada de derecho? En términos de gradualidad, de lo que se ha referido aquí, de las reglas de uso de la fuerza. Pues bien, portaba un fusil SIG 542, podría haberle pegado un culatazo en la cabeza. No lo hizo. Eso habría sido manifiestamente desproporcional. Podría haberle pegado con el fusil en la espalda. Podría haberle pegado con la punta del fusil en la espalda o en cualquier parte del cuerpo. Podría haberle pegado un culatazo en las rodillas. Hemos visto otros casos de violencia institucional donde esa ha sido la fuerza que se ha utilizado para detener a personas. Frente a las circunstancias de que este sujeto se encontraba, según se dice, lanzando piedras, podría haber disparado su fusil SIG. No lo hizo.

Reiteró que su representado utilizó la fuerza gradual que de acuerdo a las circunstancias del caso concreto le eran exigibles a él, con los conocimientos que él tenía, él nunca escuchó de reglas de uso de la fuerza. No sabía siquiera que existían, sin embargo, con la instrucción que él tenía, un año y nueve meses de estudiante en la escuela de suboficiales, sin grado militar alguno, efectuó la conducta menos agresiva que podía.

Añadió que su representado declaró esto mismo, en la fiscalía, se reconoció en el lugar de los hechos, reconoció que él fue el que efectuó el tackle al momento de la detención. Se lanzó sobre la víctima abrazándola cuando esta persona estaba de pie, después numerosas órdenes de advertencia, que le efectuó un disparo, que no se detuvo, que se había caído, que no se había vuelto a parar. En ese contexto, el acusado se reconoció en el video que le exhibió el fiscal.

Agregó que el acusado quería detener, no simplemente degradar a la víctima, afectando su dignidad, su integridad moral, que no pueden imputarle apremios ilegítimos en el grave y triste resultado que se causó, donde hubo una relación de causalidad sin duda mínima, pero que respecto de su representado no es atribuible en ningún caso a dolo.

Por otra parte, dijo que, si la conducta de su representado sería atribuible a culpa, se debería atender a si la conducta que era exigible en la situación concreta. ¿Podía su representado haber hecho otro comportamiento, realizado otra conducta, o le era exigible otra conducta, o realizó aquella que resultó? ¿O le resultó ser más adecuada o más proporcional? Parece ser esa última la respuesta.

En cuanto al aspecto objetivo del tipo penal dijo que, no se le puede imputar objetivamente el resultado. Que realizó una conducta que significaba en el caso concreto una disminución del riesgo y además actuó, de acuerdo al ámbito del riesgo permitido. En el aspecto subjetivo, no hay dolo y no hay imprudencia y en cuanto a la



antijuridicidad su conducta se encuentra ajustada al cumplimiento de un deber, dentro de los márgenes del artículo 10 número 10, de acuerdo a las reglas de proporcionalidad, gradualidad en la detención y con los conocimientos que tenía. La orden era lícita, no había posibilidad de representarla.

**En su alegato de clausura** luego de un examen de la prueba, reiteró su solicitud de absolución por falta de participación.

**CUARTO: Declaración de los acusados:** Que consultados en la oportunidad prevista en el artículo 326 inciso 3º del Código Procesal Penal, **Miguel Alejandro Puchi García, José Luis Santibáñez Lucero y Patricio Fernando Gormaz Torres**, renunciaron a su derecho a guardar silencio.

Así, **en su relato espontáneo Miguel Alejandro Puchi García**, declaró que tiene el grado de Mayor de Ejército, que hace 20 años ingresó a la institución. Que el 1 de febrero de 2004 comenzó en Arica, luego estuvo en Antofagasta y después en Santiago. Nació en Valdivia y hoy se desempeña como Comandante en Coyhaique. Tiene una hija de 11 años y en octubre de 2019, se desempeñaba como profesor de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército.

Refirió que el 18 de octubre de 2019, alrededor de las 23:00 o 23:30 horas, les informaron, el director del Instituto, por WhatsApp del grupo, que todos los oficiales se debían recoger en la Escuela y formar en el patio principal, información que se debía replicar a personal de planta y alumnos por el contexto país. Llegó a la escuela a las 00:30 horas, se formó en el patio principal y ahí, el Director, Coronel Claudio Orellana Burrows, les dijo que, por orden del alto mando, debían permanecer acuartelados esperando indicaciones del poder político. Fue a dormir en la unidad, alrededor de las 02:00 horas y como a las 06:00 o 07:00 horas, se levantó, se formó. El Comandante Orellana, les indicó que se debía formar unidad fundamental para el control de Orden de Público. La unidad estaba compuesta por 4 cuadrillas, patrullas o secciones, de 15 hombres cada una. Cada patrulla tenía un Oficial, Sargentos y Cabos alumnos de la Escuela de Telecomunicaciones. Eran comandadas por un Teniente y él estaba como cabeza de las 4 patrullas. En esa reunión se informó que se armaría un puesto de mando con distintos oficiales que estarían encargados de recibir y evacuar información de la Escuela al escalafón superior. Él debía informar a su Coronel y al puesto de mando, pero de ahí hacia afuera no le correspondía informar a él.

Precisó que el puesto de mando se componía de un Jefe, Francisco Chavarría y distintos capitanes, alumnos, oficiales y suboficiales que formaban parte de la unidad de inteligencia de la Escuela.

A las 10:00 horas del 19 de octubre, terminaron de confeccionar la patrulla e iniciaron un recorrido por las comunas de Peñalolén y La Florida. Se reportó lo ocurrido en la jornada al puesto de mando en la Escuela.

Estaba alterado el Orden Público, había tacos, negocios saqueados, micros y vehículos quemados. El Coronel le ordenó salir a las 12:00 horas para hacer un sondeo e informarle lo que ocurría. Fueron a Peñalolén, en la rotonda Grecia había un supermercado que había sido saqueado durante la noche, estaban quemando micros, era imposible avanzar por Vespucio, volvió a la Escuela y luego salieron a hacer patrullajes preventivos como a las 18:00 horas, tuvieron que salir porque había que restaurar el Orden Público. Así siguieron los días posteriores, 19, 20 y 21 de octubre. No llegaban a pernoctar a la Escuela, sino que llegaban a descansar un rato en el Jumbo de Peñalolén que era el único supermercado de la comuna que no estaba quemado o saqueado.

El 21 de octubre, lo mandaron a buscar a las 18:00 horas desde la Escuela para tener una reunión personal con el Coronel Claudio Orellana Burrows, quien le ordenó que realizara un patrullaje en Ñuñoa y Peñalolén con 2 patrullas completas. Salieron a las 20:00 horas y llegaron hasta el mall Plaza Egaña. Allí, desembarcaron. En el lugar había barricadas, autos de las automotoras en la calle, basureros ardiendo. No había actos hostiles hacia ellos, pero se estaba impidiendo el libre acceso del tránsito por lo que, ordenó desembarcar al personal militar y despejar las calles, es decir, sacar basureros, despejar los vehículos. Ahí, se les unió un canal de televisión. La periodista le preguntó si los podían acompañar en el patrullaje de esa noche transmitiendo vía Streaming. Él accedió, pero le dijo a la periodista que no se haría cargo de su integridad física porque los atacaban con bombas de fuego, Molotov, etc. Desde Plaza Egaña se dirigieron después a Peñalolén. Por Grecia, había barricadas, personas protestando en las esquinas con armas de fuego que disparaban al aire a unos 300 o 400 metros. Ordenó desembarcar al personal porque días anteriores les había pasado que lanzaban bombas al interior del camión. Conversó con los periodistas para saber si querían continuar o se retirarían. Los periodistas decidieron continuar con ellos, entonces, les dijo que fueran atrás del vehículo militar para prestarles cobertura. En cuanto a la patrulla militar, para resguardar su integridad, ordenó que avanzaran pegados a las rejas de las casas porque por el medio de la calle serían blanco fácil. Había 2 patrullas en ese momento. La otra patrulla estaba a cargo de la Teniente Kamila Navarrete Robles. Él instruyó a todos que avanzaran caminando al costado de la calle. Los manifestantes aparecían y desaparecían o se escondían en los pasajes donde ellos no entraban porque era muy arriesgado. Siguieron avanzando y llegaron hasta Las Parcelas. Se escuchaban disparos por todas partes, había manifestantes a unos 300 o 400 metros. Los manifestantes salían a la calle, hacían uso de armas de fuego, los veía y los escuchaba. Iban en caravana. En primer lugar, una camioneta donde iba el Teniente Ibarra; en segundo lugar, un camión militar que iba a su cargo; en tercer lugar, iba el vehículo de la prensa Megavisión y; en cuarto lugar, un camión militar a cargo de la Teniente Kamila Navarrete brindando seguridad. La camioneta

que iba en primer lugar aceleró y entró por una calle donde hay un templo. Descendió del camión. Escuchó gritos provenientes del primer vehículo diciendo: “detente”, “alto detente”. Él desenfundó su arma.

Explicó que el día 1, al disponer patrullajes del Ejército, se dispuso que todo el personal debía salir a la calle con armamento con munición de guerra, esto es, fusil de 17 por 5,56 de calibre y munición a fogueo en un solo cargador. Él hizo presente a su comandante Orellana que cumplir esa orden podía poner en riesgo a un civil, por lo que propuso un segundo plan, esto es, sacar los tiros de munición no letal a fogueo y las municiones 17 que se guardaran en el arnés de las personas. Solamente los Tenientes Ibarra y Navarrete, además de él portarían munición letal. El resto andaría con armas a fogueo no letal y otro oficial portaría con antidisturbios. El Comandante Orellana acogió la propuesta, lo planteó a las autoridades y se estableció así para todo el Ejército.

Volviendo al momento de los hechos, dijo que cuando iban por Las Parcelas, aceleraron la camioneta que iba adelante y se metieron en caravana a un pasaje y en cosa de 20 segundos, la camioneta frenó, se escuchó “alto, deténgase”. Se bajó el Teniente Ibarra de la camioneta. Él se bajó del segundo camión y desenfundó su arma porque él era el único que llevaba munición letal en caso que hubiera un ataque a la patrulla o a los periodistas. Se bajó del camión, se giró y vio pasar al señor González. Desde el primer vehículo gritaban “alto”, escucho munición de fogueo, González siguió corriendo hacia el camión a cargo de la Teniente Navarrete, quien ordenó perseguir a González. Él no tenía ya visibilidad hacia atrás del segundo camión porque él estaba situado abajo a la altura de la cabina. Confiaba en la resolución de la Teniente Navarrete. En ese momento él fue al primer camión, ordenó desembarcar para formar una perimétrica de 360 grados para proteger los camiones y a los civiles. Vio que se acercaba la teniente Navarrete con el dragoneante Gormaz junto a 2 personas más que no conocía con el detenido. Vio al detenido que estaba muy cochino, empolvado. No observó que el detenido tuviera lesiones. Vio que subieron al detenido al primer camión y ordenó que se dirigieran al tiro a la 43ª comisaría para entregar al detenido, pues la orden era retener y entregar a carabineros en corto plazo. Tardaron en llegar a la comisaría entre 10 a 15 minutos, pues los camiones militares avanzan a 30 o 50 kilómetros máximo y no tienen atrás cinturones de seguridad. Como todo el día se habían entregado detenidos, se había dispuesto por el puesto de mando a suboficiales con más de 25 años de servicio en la comisaría para recibir a los detenidos y entregarlos en la comisaría. Él ordenó bajar al detenido, lo vio que estaba muy sucio. El Suboficial Selame estaba recibiendo a los detenidos. A Selame le entregaron al detenido. Ahí cuando estaban en la comisaría, se le acercó un periodista y le consultó si lo podía entrevistar unos 40 segundos porque se tenían que ir. Concedió la entrevista y luego los periodistas se fueron y ellos se retiraron en dirección al

supermercado Jumbo. En ese momento le envió audios o WhatsApp al Coronel Orellana informando la situación que habían vivido. Que tenían un detenido, que lo habían entregado en la comisaría. Cuando iban llegando al Jumbo, lo llamó Selame y le dijo que como el detenido estaba lesionado con perdigones en la zona baja, la persona que percutió el arma debía ir a entregarlo. A raíz de eso, le preguntó a Navarrete y ella le respondió que el Teniente Santibáñez había disparado, por lo que fue donde Santibáñez y le dijo que fueran a la comisaría porque había disparado el arma y debían entregar quien disparó al detenido. Fueron a la comisaría y después conversó con el Comandante Orellana respecto de lo ocurrido. Se informó al puesto de mando y al día siguiente enviaron a alguien a la comisaría para preguntar por el detenido. Le informaron que Carabineros adoptó el procedimiento, que el señor González presentó lesiones y no había querido efectuar denuncia en contra del personal militar.

**A las consultas de su abogado defensor** contestó que, por disposición del ejecutivo, se había dispuesto efectuar patrullaje para controlar el orden público. Había manifestaciones, disparos, atentados contra personal civil y militar, saqueos de supermercados, cajeros automáticos abiertos completos.

Dijo que su orden no era disolver las manifestaciones, dejaban a la gente hacer su manifestación tranquila, actuaban solo si había posibles delitos y armas de fuego.

Señaló que él salió a patrullar el 19, 20 y 21. Que llegó el 19 a la 01:00 horas y el primer patrullaje lo había hecho a las 11:00 o 12:00 horas de ese día. Que todos los días el puesto de mando cambiaba a las personas que harían los patrullajes, según las características.

Agregó que en controles del orden público entre el 20, 21 y 22 de octubre controlaban las cocheras donde se guardaban los carros del Metro en el eje Vespucio, pues había información de que los querían quemar. Se dividió la unidad de 4 patrullas y por eso quedaron solamente 2.

Añadió que no recibió capacitación para control de orden público cuando llegó, que no quería estar ahí, pero no tenía acción como Comandante. Lo designaron de los Capitanes que había. No tenían capacitación de Orden Público, pues eso no estaba en la malla curricular, además, el Plan Puelche del Ejército de febrero de 2019 proporcionaba directrices al personal militar para emergencias o catástrofe, no para control del Orden Público.

Dijo que él tenía asignada funciones de comunicaciones y enlaces. que su unidad estaba formada por 25 hombres al mando de un Oficial e intervenían si se cortaba la luz, la telefonía y comunicaciones de autoridades civiles y militares. Era profesor de la Escuela de Telecomunicaciones y él estaba a cargo de las mallas curriculares, de formar gente en temas de comunicación e informática, de hecho, Santibáñez es un experto informático, el más capacitado del Ejército en Defensa y

Ciberseguridad. Todas las unidades de inteligencia del Ejército pasan como alumnos de Santibáñez.

Por otra parte, sostuvo que la cabeza máxima era el Coronel Claudio Orellana Burrows con quien sostuvo permanentemente comunicaciones por teléfono o por WhatsApp.

Reiteró que los miembros de la patrulla eran elegidos por el puesto de mando, que él pidió integrar la patrulla con Ibarra y con Navarrete, pues al primero lo conocía desde la Escuela y a la segunda porque necesitaba una mujer por si se daban situaciones con mujeres. El resto de la patrulla era formada por el puesto de mando según habilidades y grados. Él no pertenecía al puesto de mando.

Señaló que el día de los hechos, se encontraban equipados con uniforme militar de color verde y café, chaleco balístico o con placas, fusil, casco y botas, es decir, cada persona cargaba 20 a 25 kilos. Los 3 oficiales portaban pistola de 9 milímetros, los demás fusiles SG 542 con cargador, solo con munición a fogeo de instrucción, es decir, que solamente emite ruido y había uno o 2 miembros escopeteros en cada patrulla que llevaba munición antidisturbios designado por el puesto de mando.

Volviendo sobre los hechos, dijo que sintió 2 o 3 disparos, que veía primero la luz y luego escuchaba el ruido de munición.

**Al exhibírsele durante la audiencia la fotografía N° 10 del set de 48 fotografías, del acápite otros medios de prueba ofrecidos por la defensa de Gormaz,** describió la ubicación de calle Las Parcelas, el pasaje El Jardín, lugar en que se introdujo la patrulla; observó en la intersección el templo al cual se refirió anteriormente, con techo verde. Dijo que ahí había disparos. Que la patrulla dobló hacia la derecha introduciéndose en el pasaje. González corrió en dirección opuesta a ellos, salió hacia Las Parcelas y se metió por el paso a otro pasaje. La dirección fue en la calle siguiente, mientras que él se encontraba en paralelo al techo verde.

Desde que sintió los disparos hasta que llegaron al lugar pasaron 10 o 20 segundos. Sergio González corrió y pasó por el lado de la patrulla, ahí él lo vio, no tenía lesiones, corrió rápido. Luego, pasaron entre 2 a 5 minutos cuando Navarrete le entregó a González retenido. Lo atrapó el Cabo Gormaz. Vio al detenido, lo chequeó visualmente, vio que estaba cochino con mucha tierra. Ordenó embarcar al detenido e ir a entregarlo. Necesitaban salir rápido de ahí, estaba oscuro con luz sepia y el foco de la esquina estaba apagado. estaba muy oscuro.

Trasladaron al detenido en la parte trasera del primer camión militar en que iba él. Ibarra iba de punta de lanza porque era de Santiago y conocía Peñalolén.

No recordó quién subió al detenido al camión. Él estaba preocupado de deshacer la perimétrica y que el personal subiera de uno a uno al camión. Como a los 10 o 15 minutos llegaron a la comisaría. Ahí González estaba cochino, lo vio eufórico, gritaba, pero no tenía sangre, ni lesiones. Gritaba que eran todos uno.

Añadió que al día siguiente supo que González había sido trasladado al recinto de salud.

**Al exhibírsele de los otros medios de prueba ofrecidos por su defensa audios de WhatsApp y capturas de pantalla de conversación de WhatsApp**, dio cuenta como se comunicaba con el Coronel Orellana explicando que había prensa porque eso se debía informar al puesto de mando, hablaban del general Martínez porque se decía que llegaría hasta la zona, luego describió que tenía un detenido y la situación de Grecia con Tobaraba y dio cuenta de haber sido entrevistado.

Agregó que para él este proceso ha sido bien complicado, que siempre ha tratado de actuar bien, de llegar a los subordinados, que ha sido fuerte, que su padre tuvo un accidente cardiovascular en 2021, 2 semanas después de haber sido formalizados por lo que, su no pudo viajar para ver a su padre, pues al otro día tenía que firmar. En 2023, su mujer tuvo un cáncer uterino que implicó un gasto fuerte. Como profesional le vetaron su carrera militar; sus compañeros están en el magister para seguir avanzando y él no puede.

Dijo que él no quería salir a la calle y el Estado le ordenó salir y que actuaron de la mejor forma posible. Que se metió al ejército porque le gustaba jugar a los soldados, que si le gustara hacer controles en la calle se habría metido a Carabineros o Investigaciones.

Con todo, dijo que él entregó el video de Megavisión a Investigaciones cuando declaró en 2019 ante el Subprefecto Villalobos y una señorita.

**Al ser consultado por el Sr. Fiscal** agregó que lo que ocurría con las personas de su patrulla era su responsabilidad.

Explicó que existen 2 tipos de mando de comportamiento: mando detallado que es aquel en que el Comandante efectúa el mando completo y el mando misión, que es aquel en que el Comandante tiene facultad para delegar en subordinados, para actuar descentralizadamente ante algún hecho, que era lo que ocurría en este caso, él debía confiar en sus subordinados.

Reiteró que había 2 camiones. Uno a cargo de la entonces Teniente Navarrete y otro del Teniente Ernesto Ibarra.

Todos lo patrulleros tenían un fusil SIG 542 con cargador de fogeo y un cargador con munición normal guardados en el arnés de cada patrullero. Solo la Teniente Navarrete, el Teniente Ibarra y él andaban con arma corta con munición letal y hasta donde recordó solamente Santibáñez utilizaba armamento antidisturbios.

Ese día se encontraron en Irarrázaval con el dispositivo de Mega, fue fortuito. La decisión de que Megavisión los acompañara fue suya, pero existía orientación del Ejército, en cuanto a que cada vez que estuviera la televisión o el Instituto de Derechos Humanos y quisieran andar con ellos, lo aceptarían para demostrar el trabajo que hacían, de forma correcta, no violando derechos humanos. Le dijo a la periodista que



los podía acompañar, pero bajo responsabilidad de ellos, pero igual le brindarían resguardo a ese personal civil.

Cuando llegaron a Las Parcelas el vehículo de Mega iba al final de la Caravana. Al entrar a Peñalolén decidió en el eje Grecia señalarle al vehículo de Mega que transitara entre los 2 camiones para resguardarlos, por lo que la caravana quedó compuesta primero por la camioneta, luego por el camión de Ibarra con quien cambió, después Megavisión sin resguardos ni chalecos antibalas y luego el otro camión.

Volviendo sobre los hechos dijo que escuchó disparos a unos 200 metros, no vio personas disparando, pero si observó fogonazos y a los 2 o 3 segundos, sintió los ruidos de armas de fuego, porque cuando se dispara un arma de fuego, primero sale la luz y luego el ruido. Los disparos venían del eje donde estaba el Sr. González no venían de una barricada. Había neumáticos quemados, cartones, basura incendiándose. El lugar donde estaba González es una esquina donde hay un templo religioso.

En cuanto a la decisión de doblar por calle Los Jardines dijo que fue del Teniente Ibarra.

En cuanto a las imágenes de barricadas que envió a su Coronel dijo que no envió fotografías del lugar en que estaban disparando porque fue una cuestión de no más de 30 segundos desde que escucharon los disparos y accionaron, no tenía tiempo para sacar la fotografías, porque en la barricada anterior que fotografió, no había gente disparando, ni personas que tuviera que proteger. Era importante dejar registro, pero no tenía tiempo para estar grabando si había gente que podía tener una lesión o podía llegar un disparo.

Dijo que el Sr. Sergio González salió corriendo desde unos arbustos, que lo vio correr no más de 8 o 10 segundos, no pudo apreciar si llevaba algo en las manos, ni si tiró piedras, estaba oscuro, no escuchó que le gritara al personal. No vio disparos, escuchó los gritos de advertencia que provenían del primer vehículo, cuando dijeron “deténgase, alto”, luego, escuchó ruidos de armas de fogeo, se giró, pasó González y él perdió visión completa hacia atrás del camión. Luego supo por Kamila Navarrete, que Santibáñez hizo uso del arma antidisturbios y se informó un solo disparo cuando terminó el procedimiento y que fue el que percutió Santibáñez.

Dijo que, si González no hubiera corrido, no habría pasado nada de esto, pues había una infracción al toque de queda y él no tenía experiencia o conocimientos y de haberlos tenido, habrían hecho un barrido, buscado armas de fuego, habrían dicho a Carabineros que tomara muestras en las manos del detenido, habrían fotografiado el vehículo al cual le rompieron el parabrisas, etc.

Añadió que la Teniente Navarrete dijo que para detener a González lo habían tackleado, esto es, que cuando iba corriendo, el dragoneante Gormaz corrió y se tiró encima de González con todo su cuerpo, atrapándolo en el aire y cayeron juntos.

Reiteró que al volver a la Escuela los tenientes daban cuenta al puesto de mando, mientras que, él volvía a planificar nuevas salidas e informaba en persona o WhatsApp a su superior.

Esta misión tenía que ver con uso de la fuerza en contexto de estado de excepción, conocía la existencia de esas reglas, pero no las había estudiado porque como el Ejército es jerarquizado, si saca un plan u orden, tiene que decir para quienes van dirigidos. Las reglas de uso de la fuerza no llegaron, no llegaban a su sección, pues él estaba a cargo de telecomunicaciones, de enlaces radiales no estaba destinado a cuidar el orden público, pues para ello están las fuerzas de caballería e infantería.

Agregó que no sabe lo que se entiende por acto hostil, ni que hubiera que dejar registro sino solo verbal, después del 23 o 24 de octubre comenzaron a llegar instrucciones, por la situación que se estaba viviendo minuto a minuto.

Enfatizó en que González evitó el control, se le hicieron gritos de advertencia, se percutaron armas a fogueo o de ruido y, además, se dirigió González hacia donde estaba Navarrete que era la única mujer en ese lugar, lo que justificó el uso del arma antidisturbios por parte de Santibáñez y sacar su arma de puño, pues él debía brindar protección al personal y habría ocupado el arma si González hubiere atacado o disparado o tirado una Molotov a la unidad militar.

**Al exhibírsele la prueba ofrecida con el N° 5 del acápite otros medios de prueba del Ministerio Público, esto es, un CD N.U.E. 256766** reconoció que se trataba de un video de una entrevista que dio a Megavisión luego que, entregaron al detenido, Sr. González, en la comisaría.

**A las preguntas de la Querellante** respondió, en resumen, que, habló de intentos hostiles, que no había, sino que había barricadas, basureros dados vuelta y la gente de los departamentos empezó a tirarles cosas hacia abajo, pero señaló que desconoce lo que es un acto hostil.

**Al abogado defensor del acusado Santibáñez,** respondió que él no vio ni escuchó a Santibáñez usar su escopeta.

Explicó que el uso de municiones quedaba consignado en el puesto de mando, había oficiales de distintos grados encargados de la fiscalización. Que llegaba a la unidad el Teniente con su patrulla y hacía pasar a los patrulleros de a uno y entregar los cargadores.

Señaló que para realizar disparos el Teniente Santibáñez no requería autorización de algún superior.

**Al ser interrogado por la Defensa de Gormaz,** añadió que éste no recibió instrucción sobre la forma en que debe efectuarse una detención, ni sobre control de identidad.

Dijo que la orden de efectuar la detención la dio la Teniente Navarrete y no supo si el detenido fue subido al camión en que iba Gormaz.

**Para aclarar sus dichos respondió al Tribunal** que doblaron por el pasaje siguiendo a la camioneta, que González salió desde atrás de un árbol y las fogatas estaba en Las Parcelas. Que González estaba a 50 o 60 metros de la intersección donde estaban disparando.

Dijo que no conocía el término hostil jurídicamente pero sí militarmente.

Complementó sus dichos en cuanto explicó que en el mando detallado el comandante ordena todo lo que se debe hacer y dispone todo, no hay libertad de acción o de decisión de los subordinados, pero en este caso, el 19 de octubre se les dijo que confiaran en sus subordinados y desde el puesto de mando les dijeron que patrullarían bajo las reglas del mando misión.

Por su parte, el acusado **José Luis Santibáñez Lucero**, refirió **en su relato espontáneo**, en resumen, que es Instructor del Ejército de Chile, que tiene el grado de Sargento Segundo y 23 años de servicio. Fue designado como el mejor profesor de la Escuela de Telecomunicaciones.

El 18 de octubre de 2019 fue un día tranquilo. Durante la noche recibió un llamado para concurrir a la Escuela debido al estado de excepción. Se formaron en el patio y se les dieron directrices incluyéndose en el patrullaje a partir del 19 de octubre.

El 21 de octubre salió con la patrulla al mando de la Teniente Kamila Navarrete a una ronda nocturna a eso de las 21:00 horas junto al Capitán Puchi. Se dirigieron a Plaza Egaña donde desembarcaron y avanzaron caminando desde Ossa hacia el poniente por Irrazaval. Había contenedores de reciclaje que iban retirando. Avanzaron por Diagonal Oriente, luego por Macul con Grecia y subieron por Grecia al oriente hasta llegar a Vespucio. En ese lugar desembarcaron de los vehículos e iniciaron un trayecto caminando para evitar incidentes porque había muchos alumnos en las patrullas. Llegaron hasta un supermercado en Tobalaba con Grecia, donde realizaron rondas para verificar que no hubiera personas porque había gente que estaba sacando cosas. Luego avanzaron por Molineros hasta Orientales y cuando estaban subiendo por Orientales había varios tiros por lo que nuevamente se les ordenó desembarcar. Los acompañaba un vehículo de la prensa que se dispuso entre los 2 camiones del Ejército. Avanzaban en caravana. Primero una camioneta, luego, el primer camión que iba al mando del Teniente Ibarra, luego, estaba el vehículo de la prensa y después el camión que estaba al mando de la Teniente Navarrete. En la zona la gente salía desde sus casas y les disparaban, era una zona poblada y había gente alrededor, por lo que, no se podía hacer nada frente a eso, solo protegerse. Continuaron la marcha hacia el oriente. Pasaron Tobalaba y desde allí la calle se llama Las Parcelas. En Las Parcelas fiscalizaron un supermercado Unimarc que días anteriores había sido saqueado y quemado. Personal más joven bajaba de la patrulla a quitar las barricadas. Al iniciar la marcha sintió disparos, 2 o 3. Los vehículos de la

patrulla aceleraron por Las Parcelas hacia el oriente y doblaron por el Pasaje Del Jardín hacia la derecha y se quedaron ahí. Escuchó que alguien dijo “alto” a una persona que corrió de sur a norte, es decir en contra del sentido en que ellos habían avanzado (de norte a sur). La voz que dijo “alto” era del Teniente Ibarra. La persona que corría no se detuvo, se usaron tiros de fogueo para disuadir a la persona y cuando ésta estaba a unos 20 o 25 metros del segundo camión donde estaba él, al costado izquierdo, parte posterior y, como estaba también la Teniente Navarrete, como la persona no hizo caso de la orden, ni se detuvo con el armamento a fogueo, él hizo uso de la escopeta antidisturbios disparando al piso, pero la persona no se detuvo, sino que, siguió corriendo hacia Las Parcelas, cruzó Las Parcelas y ahí lo perdió de vista. Luego, vio a la persona que se trataba del Sr. González llegar con la Teniente Navarrete y el Cabo Gormaz. Éstos entregaron a González al Capitán Puchi como detenido y lo trasladaron a la 43° Comisaría de Peñalolén. Tardaron en llegar a la comisaría como 20 o 25 minutos porque no podían avanzar con mayor velocidad, además les habían informado sobre la existencia de cables acero. Al llegar a la comisaría, vio que bajaron al Sr. González, lo observó medio enterrado, pero no tenía signos de lesiones o dolor. Lo entregaron y los camiones se fueron al supermercado Jumbo. Al llegar al supermercado, el capitán Puchi le dijo que tenía que ir a la comisaría a firmar un acta de entrega, pues había que declarar porque había disparado. Estuvo en la comisaría una hora y media o 2 horas y luego, lo pasaron a buscar para irse a la Escuela de Telecomunicaciones donde se informó lo que pasó al puesto de mando.

Complementando su exposición **respondió a su abogado defensor** que antes de salir a patrullar solo le indicaron que debían mantener el control del orden público porque Carabineros estaba sobrepasado, tenían que controlar el cumplimiento del toque de queda, sacar las barricadas, pero no lo capacitaron en esa materia. Se habían desplegado en estados de excepción por catástrofe en 2008 y 2010, pero allí proveyeron servicios de telecomunicaciones a distintos puestos de mando.

Añadió que no conocía las reglas de uso de la fuerza hasta esa fecha. Sabía que existían, pero nunca tuvo que emplearlas ni conocerlas. No sabía lo que era intento hostil según las R.U.F.

El día de los hechos a él lo designaron como escopetero desde el puesto de mando.

Volviendo sobre los hechos dijo que mientras avanzaban hacia el oriente, escuchó 2 o 3 disparos que no provenían del personal militar. No vio a nadie más que a González a los 30 segundos de haber oído los disparos. No se fijó si la víctima llevaba algo en sus manos. Cuando se encontraron con el Sr. González, lo escuchó corriendo, escuchó que el Teniente Ibarra le ordenó que se detuviera porque corría contra las patrullas de los militares. González hizo caso omiso. Después escuchó los disparos de

arma a fogueo. Fueron 2 o 3 disparos de fogueo que no sabe quién percutió. Bajo el camión en la esquina estaba la Teniente Navarrete y el Sargento Sepúlveda y él desde arriba del camión vio a González que se aproximaba a unos 25 o 30 metros y a unos 20 o 25 metros, de frente a González, hacia abajo, usó el arma antidisturbios, Luego descendió del camión para prestar la defensa perimétrica que ordenó el Capitán Puchi.

Añadió que había un escopetero por camión, pero que desconocía si otra persona utilizó la escopeta.

Expresó que el Capitán Puchi ordenó que subieran al detenido al primer camión para que no corriera riesgo. No supo que ocurrió en el primer camión con el detenido.

Dijo que, posteriormente, supo que cuando González corrió, lo siguieron la Teniente Navarrete y Sepúlveda, pero no le dieron alcance. González lanzó una piedra que cayó en un vehículo a metros. Que luego se tropezó con un lomo de toro, se levantó, siguió corriendo y fue alcanzado por el Cabo Gormaz y otra persona.

Relató que cuando fue a la comisaría y entregaron a González lo vio en las mismas condiciones que lo habían visto al ser detenido. Luego, cuando regresó a la comisaría entró al patio de la comisaría, efectuó la declaración y la firmó. Ahí se enteró que González estaba en el SAPU.

Señaló que en su experiencia los balines pueden rebotar.

Con todo, agregó que para él este proceso ha sido muy angustiante porque la sociedad piensa que son máquinas, que no piensan, pero en su familia son todos civiles, él es el único uniformado. Todo esto lo ha afectado en lo profesional, no ha podido ascender, en el tema familiar está con tratamiento psiquiátrico por lo vivido, no tiene intención de causar daño, no ha podido surgir como persona porque no sabe que pasará, no ha podido terminar su carrera.

**Al Fiscal respondió**, en síntesis, que supo que en la patrulla de adelante utilizaron armas de fogueo porque en esa patrulla no tenían armas de guerra y porque el sonido es distinto, por lo tanto, él tenía un arma, una escopeta.

En el momento de los hechos, la víctima salió desde donde estaba la camioneta de adelante, él no podía verla porque en el camión tienen toldo con pick up grande, con bancas, cerrados con lonas que se enrollan para ver,

Dijo que la escopeta que traía era antidisturbios con balines de goma. Es una escopeta que puede ser letal dependiendo a que altura y distancia se dispare, pero se usa en manifestaciones para evitar amenazas, es antidisturbios porque no genera impacto mayor, sino un golpe para evitar cualquier tipo de disturbio sea por una o más personas, se dispara al suelo.

Añadió que, él quería disuadir, que no tuvo intención de causar daño directo a la persona, pero rebotó la munición y el rebote podía provocar daño.

No vio a González disparar, no tenía como vincularlo con los disparos que había escuchado.

En cuanto a las lesiones que sufrió González no lo mencionó en el puesto de mando, pues esa información la entregaba el Comandante de la patrulla que, en este caso, era su Teniente Kamila Navarrete, no su Mayor Puchi porque éste no era su mando directo.

**A las consultas de la parte Querellante**, contestó que no sabía en qué consistían las reglas de uso de la fuerza, pero había recibido instrucción que no podía disparar salvo amenazas y él consideró que esta persona podía afectar al personal.

Al exhibírsele la prueba documental N° 8 reconoció que estaba firmado por él y aseveró que el motivo de detención que figuraba en el documento era violación del toque de queda.

**La Defensa del acusado Puchi no formuló preguntas.**

**Mientras que, al defensor de Gormaz** respondió que no recibió instrucción sobre control de identidad, tampoco de parte de Navarrete, tampoco de Puchi. Que él era el Sargento menos antiguo de esa patrulla, que había 2 Cabos Segundos y después alumnos de segundo año de la Escuela.

**Aclaró al Tribunal** que la camioneta no hizo disparos a fogueo, fue el primer camión y un tiro del segundo camión.

No está seguro, pero no sabe si cuando se utiliza elementos fogueo en instrucción se debe dar cuenta de la utilización, pero en este caso no sabe si se dio cuenta porque no era él responsable de ese tipo de munición.

Por último, el acusado **Patricio Alejandro Gormaz Torres** declaró que ingresó en 2018, con 17 años al Ejército. En 2019, era alumno en la Escuela de Telecomunicaciones. Llevaba un año y medio en la Escuela.

El 18 de octubre, iba saliendo de franco, pero sabían lo que estaba pasando y sabían que al día siguiente se iban a acuartelar. En efecto, al otro día le llegó un mensaje para que se acuartelara. Se recogió como a las 13:00 o 14:00 horas y comenzó a efectuar patrullajes ese mismo día en la tarde.

Que los patrullajes los hacía uniformado y, además, vestía botas, chaleco con placas y casco de Kevlar y portaba un fusil con munición a fogueo.

Comenzaron los patrullajes sin mayores incidentes. No dormían bien, comían una vez al día. Llegaban a la unidad como a las 19:00 horas y volvían a salir, pues siempre estuvo dispuesto a ayudar a la ciudadanía.

El 21 de octubre empezaron los patrullajes, no recordó bien a qué hora, pero salieron más o menos tarde. Patrullaron por las calles, llegaron a Plaza Egaña, no se ubica en Santiago, siguieron por Irarrázaval, ahí sacaron barricadas y basureros, desde los edificios les tiraban objetos contundentes, vasos, tazones y huevos y, además, les gritaban improperios contra el Ejército. Continuaron los patrullajes. Al



subirse al camión se sentaba, agachaba la cabeza y dormía, luego cuando le ordenaban desembarcar, desembarcaba. Llegaron a un lugar donde había una mujer que había sido abandonada por su pareja y el camión la llevó a un lugar seguro, luego, por Las Parcelas se veían fogonazos de personas que disparaban, no en dirección a ellos, sino para hacerse ver, estaban muy lejos. Desembarcaron de los camiones y caminaban a un costado de éstos que avanzaban a poca velocidad. Al llegar a Las Parcelas escuchó disparos, iba durmiendo en el camión, despertó con los ruidos de disparos, le dieron orden de desembarcar y en eso, escuchó una orden de “agárrenlo” porque a una persona se le había dado la orden que se detuviera y había hecho caso omiso. Él salió persiguiendo a esa persona, mientras que, los camiones estaban en Las Parcelas con Los Jardines. La persona lanzó 2 objetos contundentes, eran piedras o pedazos de cemento, él esquivó una piedra que la persona le lanzó al rostro y la piedra pegó en un vehículo que estaba estacionado en esa calle. La persona se trataba del Sr. González, quien, al huir, dobló a mano izquierda en un pasaje que estaba en bajada donde había 2 lomos de toros. González se cayó y se levantó, cuando se encontraban a unos 7 u 8 metros y eso le permitió acortar la distancia y en un segundo lomo de toro, González se volvió a tropezar y se paró. En ese momento él intentó agarrar a González con la mano, pero no pudo, por lo que le hizo un tackle y lo detuvo. Fue ahí que González se quejó de sus costillas. Él le preguntó a González como se encontraba, pero González solo le dijo improperios. Después que tomó a González, llegaron los dragoneantes Burgos y Molina, quienes lo ayudaron con el procedimiento. Le colocaron a González amarras plásticas. González estaba empolvado, pero no tenía manchas de sangre. Llevaron a González ante la Teniente Navarrete quien efectuó una inspección visual y luego, llevaron al detenido al camión a cargo del Teniente Ibarra. El capitán Puchi también efectuó una inspección visual del detenido y posteriormente, él volvió al segundo camión. Después, se dirigieron a la comisaría y él no supo más de González, no tuvo injerencia en la entrega de González en la comisaría.

**A su abogado defensor** le respondió que él no recibió ningún tipo de instrucción relacionada al control de orden público, ni sobre control de identidad, ni sobre detención.

Dijo que se les explicó la hora de inicio y término del toque de queda, pero no se le dio instrucción respecto de la forma de detener personas, tampoco se le dio instrucción sobre las R.U.F., no obstante, ahora tiene noción y sabe lo que son, pero no las ha estudiado.

Volviendo a los hechos, reiteró que él iba en el segundo camión que estaba a cargo de la Teniente Navarrete, iba con el sargento Santibáñez y varios alumnos más de la Escuela de Telecomunicaciones.

Asimismo, reiteró que entre su indumentaria usaba casco de Kevlar que es un material resistente a las balas, chaleco de Kevlar con 4 placas, una adelante, otra atrás

y las otras, en los costados para proteger las costillas, era un chaleco que pesaba 15 kilos. Tenía un fusil con municiones a fogueo que pesa 3kilos y medio, coderas y rodilleras, todo eso, sumado a que él pesaba en ese entonces, 80 kilos, hacía que superara los 100 kilos.

Detalló que, para detener a González, luego que trató de tomarlo con el brazo, se abalanzó contra él, usó a los brazos y se tiró y cayó al suelo con el detenido. Eso sonó fuerte porque el fusil que portaba también cayó al suelo.

González les decía “milicos culiaos, me los voy a cagar”, pero camino al camión comenzó a cambiar el discurso diciendo “yo estoy con ustedes”, pero no se quejaba. Él entregó a González a su superior.

**Al Fiscal** le contestó que estaba en el segundo camión, el cual tiene los asientos pegados al costado, que uno mira al centro del camión, tiene toldo, él no tenía visibilidad al exterior, no recordó si el toldo estaba solo por encima o también por los lados.

Despertó con los sonidos de disparos. En ese momento, la Teniente Navarrete ordenó desembarcar cuando doblaron a la derecha. Vio a la víctima cuando iba corriendo en dirección contraria a los camiones, eufórico. La Teniente Navarrete ordenó seguir a la víctima.

En cuanto a su indumentaria dijo que para la persona que está acostumbrada a ese equipamiento le es sencillo correr. Llevaba el arma (fusil) en una mano.

Corrió detrás de González que se cayó, por lo que él logró cortar la distancia, luego volvió a correr González y se cayó nuevamente, entonces, mientras González hacía el ademán de que iba a correr, es decir, se estaba levantando con la intención de correr, ahí él lo detuvo haciéndole un tackle.

Explicó que, para tacklear con una mano, se abalanzó sobre González haciendo “una especie de tackle”, dio como ejemplo el tackle, pero realmente lo que hizo es que se abalanzó sobre la persona, pero él no ha practicado fútbol americano o rugby para saber el gesto técnico de un tackle. Se abalanzó con el fusil, estaba como a un metro y medio o 2 metros de González cuando se le abalanzó.

Por último, señaló que le dijo a la Teniente Navarrete que González se había quejado de las costillas, pero ignora si ella se lo comunicó al Capitán Puchi.

La parte querellante no hizo consultas.

**Al defensor del acusado Puchi**, le respondió que la detención se produjo a 2 cuadradas hacia arriba desde donde estaban los camiones, luego a la izquierda y a la izquierda nuevamente, por lo que desde el lugar en que detuvo a González no había visión a los camiones, por lo tanto, Puchi tampoco podía ver la detención.

**Al defensor del acusado Santibáñez** le contestó que no vio hacer uso a Santibáñez de su escopeta antidisturbios.

**El Tribunal no efectuó consultas.**

**QUINTO: Convenciones probatorias.** Que, no se celebraron convenciones probatorias entre los intervinientes.

**SEXTO: Prueba.** Que, a fin de acreditar los hechos materia de la acusación y la participación de los encartados, los persecutores incorporaron como **prueba testimonial**, la declaración de la víctima **Sergio Antonio González Ocampo**, del Oficial de Caso, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile **Christian Villalobos Jiménez**, de los testigos presenciales **Joshua Omar René Martínez Santibáñez** y **Camila Fernanda Ramírez Pino**, del hermano del afectado **Daniel Ignacio González Ocampo**, del funcionario de Carabineros de Chile **Diego Andrés Zamorano Valenzuela**, de los funcionarios del Ejército de Chile **Sebastián Ignacio Muñoz Aravena**, **Felipe Eduardo Millar Figueroa**, **Rodrigo Esteban Espinoza Reyes**, **Manuel Jeremías Biernay Meza**, **Ernesto Felipe Ibarra Pulgar**, **Francisco Santander Nanjari**, **Víctor Hugo Olguín Navarrete** y **Cristian Pablo Concha Vidal**; **prueba documental**, esto es, Dato de atención de urgencia N° 633245 de 22 de octubre de 2019, en el Hospital Luis Tisné Broseau, sobre las lesiones sufridas por Sergio Antonio González Ocampo, Dato de atención de urgencia N° 644031 de 25 de noviembre de 2019, en el Hospital Luis Tisne Broseau, el cual certifica las lesiones sufridas por la víctima Sergio Antonio González Ocampo y Epicrisis de enfermería Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse, de 23 de octubre de 2019; prueba pericial que consistió en los dichos de la Forense del Servicio Médico Legal **Patricia Negretti Castro**, quien depuso al tenor del Informe Médico Legal N° 3572-2019 de Sergio Antonio González Ocampo y Protocolo de Estambul N° 136-2019; **Como otros medios de prueba:** Set de 16 fotografías confeccionadas por la unidad de Imagenología del Servicio Médico Legal, las cuales ilustran las lesiones sufridas por la víctima; Set de 15 fotografías, las cuales ilustran las lesiones sufridas por la víctima y las vestimentas que portaba el día de su detención. Set de 09 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N° 1390/2022, de 27 de septiembre de 2022, del Laboratorio Criminalística Central de la Policial de Investigaciones de Chile, las cuales ilustran la vista que habría tenido el testigo Joshua Martínez Santibáñez desde la ventana del segundo piso hacia la calle; Set de 34 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N° 951/022, de 23 de junio de 2022, del Laboratorio Criminalística Central de la Policial de Investigaciones de Chile, que corresponden a la pericia fotográfica realizada el 31 de mayo de 2022 entre las 22:50 y 01:10 horas, evacuada el 1 de junio de 2022, en las intersecciones de calle Del Jardín con Avenida Las Parcelas y Quebradas de Umallani con pasaje Zapiga, comuna de Peñalolén; Imágenes contenidas en 01 CD NUE 256766 e Imágenes contenidas en 01 CD NUE 4308182.

La parte Querellante, ofreció y se valió, de los mismos medios de prueba incorporados por el Ministerio Público e incorporó, además, **prueba documental** consistente en: 403013 TC de tórax de 22 de octubre de 2019, respecto del paciente

Sergio Antonio González Ocampo, Hospital Santiago Oriente, Oficio del Jefe del Estado Mayor del Ejército N° 1595/10472 de 07/09/2022, el que adjunta los siguientes documentos: a. Certificado de búsqueda suscrito por el Jefe del Departamento II “Inteligencia”, de la CGGERM; b. Fotocopia autenticada del OF. CGERM II (S) N° 9030/98 de 06.11.2019, con el empleo de efectivos el día 21 de octubre de 2019; c. Fotocopia autenticada del Of. ESCTEL puesto de mando III (R) N° 3550/4479 de 21 de octubre de 2019, Opord de empleo de equipamiento de combate de la ESCTEL en la emergencia; d. Fotocopia autenticada del “Acta de entrega de detenidos”, del Sr. Sergio Antonio González Ocampo; Copia parte detenido N° 3587 de 22-10-2019, de la 43° Comisaría de Peñalolén de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros de Chile; Acta de entrega de detenidos por civiles de fecha 21 de octubre de 2019, anexo del parte N° 3587; Como otros medios de prueba, ofreció e incorporaron: Un plano de planta, correspondiente a Avenida Las Parcelas, calle del Jardín, Quebrada de Umallani y Pasaje Zapiga, comuna de Peñalolén.

La Defensa de Miguel Alejandro Puchi García incorporó, además de los dichos del **testigo Oficial de Ejército, Reinaldo Antonio Toro Navarro, prueba pericial**, que consistió en el análisis formulado por el experto criminalístico **Raúl Eduardo Muñoz Calitzto**, contenido en el informe pericial, criminalístico N° 1708-2023 de 17 de agosto de 2023; **Otros medios de prueba: Videos:** VID-20191113-WA0045 (7).mp4, obtenido de la página web de Meganoticias y VID-20210825-WA0000 (3).mp4, obtenido de la página web de Meganoticias y Video correspondiente a la detención de Sergio Gonzalez.mp4; **Audios:** 5 audios de WhatsApp de conversación sostenida el 21.10.19 y madrugada del 22.10.19 entre el capitán Miguel Puchi García y el coronel Claudio Orellana Burrows acerca de los hechos motivos del juicio y detención del señor Sergio González Ocampo **Imágenes:** 4 capturas de pantalla de conversación sostenida por aplicación WhatsApp el 21.10.19 y madrugada del 22.10.19 entre el capitán Miguel Puchi García y el coronel Claudio Orellana Burrows donde se informa sobre las circunstancias de la detención del señor Sergio González Ocampo.

La Defensa de José Luis Santibáñez Lucero, incorporó la **prueba testimonial** ofrecida por el Ministerio Público, que consistió en la declaración de la Oficial de Ejército **Kamila Alejandra Navarrete Robles**.

La Defensa de Patricio Fernando Gormaz Torres no incorporó la prueba ofrecida, sin embargo, facilitó, **de los otros medios de prueba** que había ofrecido un set de fotografías contempladas en el informe Gilberto Loch para ser exhibidos y reconocidos por el acusado Puchi en su declaración.

**SÉPTIMO: Controversia.** Que, del tenor de los alegatos efectuados por los intervinientes, es posible colegir, en síntesis, que las defensas cuestionaron la

ocurrencia de los hechos en la forma planteada por los persecutores y, en consecuencia, la existencia del delito de apremios ilegítimos.

**OCTAVO: Marco legal y análisis del tipo penal:** Que el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consigna que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles establece en su artículo 16 N°1 “Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no llegue a ser tortura, tal como se define en el artículo 10. , cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales., o por investigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12, y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Dicha normativa se ha introducido en nuestra legislación en virtud del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República y nuestro Código Penal se ha modificado adaptándose a la normativa internacional.

Así, se introdujo a la legislación nacional la tipificación de las conductas mencionadas.

La Ley 20.968 de 22 de noviembre de 2016, modificó el texto legal y estableció el delito torturas propiamente tal en el artículo 150 A, separadamente de los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, estableciendo en el artículo 150 D del Código Penal, vigente a la data de los hechos, el delito de apremios ilegítimos que, en la parte que nos concierne, reza:

“El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.”

El 10 de abril de 2023 entró en vigencia la ley 21.560 que describe el delito de apremios ilegítimos bajo el siguiente tenor: “El empleado público que, **en**

**incumplimiento de los reglamentos respectivos** actúe abusando de su cargo **o que en el ejercicio de sus funciones, aplique, ordene o consienta** en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen **por su gravedad** a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, **no impida o no haga** cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello **y** estando en posición para hacerlo”.

Esta modificación limita el tipo penal en cuanto establece mayores exigencias típicas para configurar el delito de apremios ilegítimos, así, deberá acreditarse en juicio el incumplimiento de los reglamentos respectivos sobre el uso de la fuerza e importa la observancia de requisitos ya no disyuntivos sino copulativos en la vertiente omisiva del tipo. Tales deducciones implican que el artículo 150 D conforme su nueva redacción constituye un caso de ley posterior más favorable que opera con efecto retroactivo según prescribe el artículo 18 inciso segundo del Código Penal: “Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento”, pues ya es casi indiscutido que una ley es más favorable no solo cuando suprime o disminuye la punibilidad, sino precisamente cuando se añaden exigencias al tipo penal.

Conforme el criterio anterior, consideraremos para la configuración del tipo penal, el texto actual del artículo 150 D incorporado por la Ley 21.560, alegado por las defensas y no controvertido por los persecutores, quienes por lo demás, sustentaron sus acusaciones en el incumplimiento de protocolos o reglas, aludiendo a la modificación legal desde la apertura del juicio.

La ley no contempla una definición expresa de apremios ilegítimos -y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes- pues el texto los describe como lo que no son, esto es, aquellos que “por su gravedad” no alcancen a constituir tortura y, por otro lado, descarta que sean apremios ilegítimos aquellas molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Esta falta de descripción de lo que constituye el delito en análisis y su construcción a partir de lo que no constituye tortura, es similar a lo que ocurre con lo establecido por la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, que en su artículo 16 señala que “Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un



funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.”

Por lo anterior, para definir el contenido del tipo penal, finalmente figura residual, debemos distinguir el delito de apremios ilegítimos de la figura del artículo 150 A del Código Penal, sobre el delito de Tortura y esa distinción radica en un criterio de gravedad, lo que evidencia la relación de gradualidad entre ambas figuras, planteándose la tortura como el tipo que sanciona los atentados más significativos, atroces o violentos y que lesionan de modo más significativo al bien jurídico, ya sea en razón de su extensión, intensidad o multiplicidad, dejando atrás, los criterios diferenciadores de la jurisprudencia y doctrina que atendían a que en el caso de la tortura los dolores y sufrimientos se apliquen con finalidades específicas, señaladas en el inciso 3º y 4º.

Asentado lo anterior, y ya incorporándonos al análisis del tipo penal consideraremos necesario establecer como criterio interpretativo que artículo 150 D inciso 3º dispone que: “No se considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad” y que el inciso 4º también separa este tipo penal de otros más graves: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, si los hechos constituyeren algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a la pena señalada para ellos.”

Entonces, otros males que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, serán sancionados como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la medida que tampoco se traten únicamente de molestias o penalidades consecuencia de sanciones legales, o sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Clarificada la diferencia y asentado un criterio de interpretación, tanto la tortura como los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes comparten descripciones, modalidades y un mismo bien jurídico, que, de acuerdo a la doctrina, es denominado como **integridad moral**. Como ha sostenido el profesor Mario Durán (Nociones para la interpretación y delimitación del nuevo delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en Rev. derecho (Coquimbo, En línea) 2020, 27: e4567, página 4 y 5): “...la doctrina española delimitó y argumentó que el Bien Jurídico Protegido en esta clase de delitos era la integridad moral (Tesis originalmente presentada, y seguida mayoritariamente hasta hoy, por Díaz Pita, 1997). Valor de carácter autónomo e independiente de los antiguos y tradicionales bienes jurídicos (En este sentido véase, García Arán, 2002, p.1242; Muñoz Sánchez, 2004. p. 45), que puede ser definido como: ...el conjunto de

sentimientos, ideas y vivencias cuyo equilibrio, al facilitar al individuo la opción de unas posibilidades frente a otras, permite la unicidad de cada uno de los seres humanos y su libre desarrollo de acuerdo a su condición de persona. El respeto al contenido de este derecho exige pues, la no alteración o intromisión en la esfera interna del individuo, esto es, la inviolabilidad de su conciencia, y un trato acorde a su condición de persona, lo que impide que pueda ser rebajado o degradado a una condición inferior. (Arroyo Zapatero, et al, 1997, p.419) Esto es: ... el derecho de la persona a ser tratada conforme a su dignidad, sin ser humillada o vejada, cualquiera que sea la circunstancia en las que se encuentre y la relación que tenga con otras personas. Razón por la cual, este bien jurídico autónomo puede ser también un factor de agravación de otros delitos, que ya lo tienen en cuenta entre sus tipos cualificados; pero cuando no es así, los actos que lo lesionan pueden entrar en concurso con otros delitos. (Muñoz Conde, 2004, p. 185)".

Entonces como un segundo criterio de interpretación y sustancialmente ha de considerarse el bien jurídico protegido.

Extraídos los elementos comunes con el delito de torturas y constatada la diferencia no ocuparemos de las exigencias del tipo penal de apremios ilegítimos. En este orden de ideas, "habrá apremios ilegítimos cuando a la víctima se le inflijan dolores o sufrimientos graves, físicos sexuales o psíquicos, pero que no alcancen a constituir tortura (Profesor Cristóbal Izquierdo Sánchez, Informe en Derecho "El delito de apremios ilegítimos en Chile y su realización omisiva) y/o "los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a su vez, implicarían infligir un nivel considerable de apremios a la víctima, relevantes pero menos que graves, sin que lleguen a constituir el delito de torturas" ( Durán p 6).

Habiendo registrado algunos criterios interpretativos, que tendremos que tener presente constantemente en la secuela del análisis de la prueba, nos detendremos en las exigencias del tipo penal.

El delito de apremios ilegítimos, en la figura que nos concierne exige, en su variante activa que: un sujeto activo determinado - el empleado público- en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que, en el ejercicio de sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura.

Mientras que la variante omisiva sanciona al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo.

Tanto la variante activa como omisiva, requieren dolo directo.

En los siguientes razonamientos analizaremos la prueba y proporcionaremos las razones por las cuales este tribunal, por mayoría, estimó que no se acreditaron los hechos que encasillarían las conductas de los acusados Santibáñez y Gormaz en el tipo comisivo y en el tipo omisivo en relación a Puchi.

**NOVENO: Decisión del Tribunal** Que, los elementos probatorios consignados en la motivación sexta, incorporados en juicio, antecedentes apreciados libremente de conformidad a lo estatuido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin contradecir con ello, los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, han sido considerados insuficientes, según la mayoría del Tribunal para estimar acreditados los hechos conforme se propusieron en las acusaciones.

Es menester señalar que el actual sistema de enjuiciamiento penal se erige sobre dos tópicos relevantes, a saber, el principio acusatorio y el deber de congruencia, separando y delimitando las funciones de investigación y juzgamiento, otorgando al Ministerio Público -de forma exclusiva- la investigación y en su caso, el ejercicio de la acción penal pública, quedando los tribunales, en particular, los tribunales orales en lo penal, dedicados únicamente a resolver o juzgar las controversias, todo ello, con el fin de que el proceso se desarrolle ante un juez imparcial, quien en su decisión no puede exceder el contenido de la acusación por expresa exigencia del artículo 341 del Código Procesal Penal.

Dicho eso, los actos sometidos a conocimiento de este estrado fueron: disparo del acusado Santibáñez en contra del afectado, como primera medida ante la huida e infringiendo protocolos, embestida de acusado Gormaz en contra del afectado y la omisión del acusado Puchi en cuanto impedir o hacer cesar tales conductas, todas constitutivas del delito de apremios ilegítimos del artículo 150 letra d) del Código Penal, las dos primeras en su vertiente activa y la última omisiva.

Respecto de la acción de José Santibáñez, los acusadores hicieron consistir el abuso en haber disparado como primera medida ante la huida y en infracción de protocolos para el uso de armamento no letal: La mayoría de este estrado estimó que no se alcanzó el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, pues su prueba resultó insuficiente en primer lugar por la falta de determinación precisa de las reglas de uso de la fuerza, que en la fecha descrita, solo estaban contenidas en un anexo de un documento emanado del Ministerio de Defensa, denominado Plan De Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Defensa Nacional 2019, instrumento que no cuenta con la presunción de publicidad, pues se trata de un acto administrativo dictado por el Jefe de Servicio a sus subalternos entregando instrucciones en virtud de la potestad de mando o jerárquica de la que están investidos. (Rol 36650-2017 CS 05 marzo 2018 comentada en Sentencia sobre la naturaleza de las circulares y los reglamentos administrativos). En segundo lugar, porque aun cuando las pruebas de

los acusadores y de las defensas, proporcionaron elementos que permiten distinguir algunos de los principios inspiradores de tales reglas, como legalidad, necesidad y proporcionalidad, las condiciones en la que se producen los hechos, de noche, con restricción de circulación, bajo un patrullaje no exento de eventos disruptivos del orden público, como se detallara, a continuación, y analizado uno de los videos que fue aportado al proceso por uno de los imputados, no fue posible adquirir convicción de que las acciones de la patrulla comandada por el acusado Puchi, hayan estado desprovistas de la gradualidad que las regla del uso de la fuerza exigían y expuso el perito Muñoz, máxime cuando en el caso se trata de un arma de carácter no letal. En abono de ello, tampoco fue posible concluir con el nivel de convicción a que se hizo referencia, que el disparo con el arma no letal, antidisturbios se haya efectuado directo al cuerpo del afectado, entre otras, porque no existe una prueba de trayectoria como porque en el caso, el afectado se encontraba en movimiento, lo que aumenta la posibilidad de que el proyectil haya efectivamente rebotado en su persona, tesis que fue sostenida por la defensa, toda vez que no fue discutido que corría huyendo del lugar.

En lo que dice relación a Patricio Gormaz Torres: En lo medular, la acusación señala que este embistió a la víctima golpeándolo violentamente en sus costillas, derribándolo: Aun cuando la acepción “embestir” puede estimarse como comprensiva de cualquier golpe de alta intensidad, lo cierto es que, en el caso de marras, se atribuye al acusado el haber dado un golpe de patada en la zona de sus costillas, lo que no resultó probado pues de los dichos del afectado, en relación con el video de su detención, así como los asertos de la perito Negretti y las conclusiones policiales del oficial de caso, Villalobos, demuestran inconsistencias en la sindicación del autor, en tanto, ante la profesional que debía evaluar su testimonio bajo las reglas del Protocolo de Estambul, la víctima indicó que luego de habérsele comprimido el hombro por un primer militar, fue pateado por un segundo, lo que no fue posible esclarecer con el registro audiovisual en tanto en aquel, si bien, se observó la persecución, esta se ejecutó por al menos dos militares, uno delante de otro y una vez, que estos salieron del plano de observación de la cámara, se escuchó un quejido consistente con la agresión que dijo sufrir el afectado y que resultó constatada a nivel médico, pero que en el escenario probatorio referido, impiden atribuirle participación de autor de conformidad al artículo 15 N°1 en los términos que aludieron los persecutores.

En lo que atañe a Miguel Puchi García, bajo los principios arriba descritos, debe señalarse que: a.- Que, al no haberse acreditado las imputaciones a Santibáñez y Gormaz, se desmoronó aquella que, como responsable por el mando, pudo haber recaído sobre Puchi, precisamente, porque no había acción que impedir o hacer cesar, ante la falta de prueba que acredite el tipo respecto de la conducta de Santibáñez y la falta de vinculo causal respecto de la acción de Gormaz.; b.- Que, en todo caso, si

extendiéramos la hipótesis de apremio al momento en que el detenido fue llevado a la presencia de Puchi García y hubiese constatado la existencia de lesiones, la conducta omisiva, según los persecutores estaría dada por no dar cuenta al personal de salud o no trasladarlo al centro asistencial, empero no fue acreditado primero el conocimiento sobre las lesiones y luego, la obligación de informar o trasladar al afectado a un centro de salud, pues como hemos señalado no se probaron con el nivel de certeza requerido por el estándar de convicción legal, los protocolos o reglas que el encartado debió seguir frente a la figura de un detenido lesionado. En efecto el detenido fue trasladado a la unidad policial conforme las instrucciones que mantenían los uniformados, sin que se probara dilaciones más allá del tiempo necesario entre el lugar de la detención y la unidad policial, dadas las condiciones del transporte. d.- Que el afectado fuese subido acostado boca abajo en el camión militar no importa por sí solo necesariamente la intención de cosificar, vejar y, en definitiva, afectar la integridad moral del retenido, ante las condiciones del vehículo en el que realizaban las labores; e) Bajo el mismo principio de congruencia, aun cuando el afectado señaló que, en el trayecto sobre el vehículo militar fue insultado y golpeado, no solo tales acciones no figuran en la acusación sino que, al haber descrito que aquellas le produjeron lesiones en su tabique, quedó demostrado por los dichos de la perito Negretti que esa lesión de tabique nasal con desviación levo convexa y espolón óseo, la mantenía desde hacía meses o años antes del acaecimiento de los hechos y; f) en todo caso, no se puede obviar que el tipo penal de apremios ilegítimos requiere de dolo directo, por lo que independientes de los cuestionamientos por el procedimiento llevado a cabo bajo el mando de Puchi, este no se probó.

Estos son, a grandes rasgos los supuestos que motivaron la decisión, mayoritaria, de absolución y que se desarrollarán a continuación.

#### **DÉCIMO: Valoración de la prueba:**

**Hechos públicos y notorios:** Que previo al análisis de la prueba, hay ciertos hechos que fueron públicos y notorios. El estallido social se inició en Santiago a partir del 18 de octubre de 2020 extendiéndose a todo el territorio del país. Independiente de sus causas y demandas, este movimiento se materializó a través de masivas manifestaciones pasivas como cacerolazos, reuniones culturales en parques y plazas, organización de cabildos de reflexión etc, pero también violentas y disturbios que tomaron cuerpo a través de daños, saqueos, incendios a la propiedad pública y privada, como, asimismo, se causaron ataques contra la integridad física y psicológica de las personas. Se decretó estado de emergencia y toque de queda disponiéndose la presencia de efectivos militares en las calles. Este escenario se prestó para la comisión de atentados de civiles a las policías y a miembros de las fuerzas armadas, pero, asimismo, se constataron procedimientos viciados, abusos y delitos, por parte de personal policial y militar hacia civiles.

Fue a propósito del estallido social, que tan pronto se decretó el estado de excepción se acuartelaron las policías y las tropas militares y que luego, se les ordenó salir a las calles para ejecutar labores de patrullaje, controles por el toque de queda y resguardo del Orden Público.

**Ahora, se harán, algunas precisiones respecto de algunos aspectos que no fueron controvertidos:**

1.- Coinciden los dichos de los acusados y los testimonios de cargo y descargo con los hechos singularizados en la acusación, en cuanto a que el 21 de octubre de 2019, un contingente militar de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, efectuó labores de patrullaje por diversas calles, que comprendía deshacer barricadas, controlar el toque de queda e incluso efectuar retenciones de personas.

2.- Conforme señalaron los testigos militares presentados por el Ministerio Público y las Defensas, los patrullajes previos al momento de ocurrencia de los hechos comprendieron calles de las comunas de Ñuñoa y Peñalolén, así, también se observó en el video que de estos patrullajes capturó el equipo de Megavisión y que fue incorporado al juicio por ambas partes.

3.- El día de los hechos, el contingente militar se encontraba al mando del Capitán del Ejército Miguel Alejandro Puchi García y formado por 2 patrullas a bordo de 2 camiones del Ejército. Una a cargo del Teniente del Ejército Ernesto Ibarra Pulgar, integrado, entre otros, por el Sargento 2º Francisco Javier Santander Nanjari y otro camión, a cargo de la Teniente del Ejército Kamila Alejandra Navarrete Robles, e integrada por el Sargento 2º del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, y Cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres.

4.- La columna de patrulla era encabezada por una camioneta del ejército, de color blanca y con el logo de la Institución.

5.- Durante el patrullaje, se unió a la caravana un vehículo formado por un equipo de medios de comunicación masiva de Megavisión.

6.- Los hechos se produjeron, alrededor de las 23: 00 horas, luego que la caravana (que incluía al equipo televisivo), había efectuado patrullajes en Plaza Egaña, Irrarrázaval, Macul, Av. Grecia, para luego continuar al oriente por la Avenida Las Parcelas, en la comuna de Peñalolén.

7.- No fue debatido por los acusadores y así, lo demostró la prueba de cargo y descargo unido a los dichos de los acusados, que durante el trayecto el acusado Puchi determinó que el Teniente Ibarra Pulgar abordara como copiloto la camioneta institucional que hacía de punta de lanza de la columna, mientras que, él se trasladó al camión que le seguía, instruyendo, también, que el vehículo de la prensa se situara, no como un añadido a la caravana militar, sino entre los 2 camiones del Ejército.

8.- No fue controvertido que al avanzar al oriente por Av. Las Parcelas los funcionarios militares observaron a la víctima en o cerca de la intersección de calle



Quebrada de Umallani y que la víctima corrió hacia el norte entrando a calle Del Jardín.

9.- No se discutió que la víctima al huir, lo hizo de sur a norte por Del Jardín y luego, lo hizo de norte a sur contra el sentido de los camiones del ejército.

10.- No hubo discusión en cuanto a que José Luis Santibáñez disparó su escopeta y que dicho armamento mantenía munición antidisturbios – no letal-.

11.- No fue discutido que Sergio González sufrió heridas por perdigones en muslo, pierna y rodilla izquierda.

12.- No fue controvertido que luego de enfrentarse corriendo a los camiones militares y resultar herido en sus piernas por perdigones, Sergio González continuó su carrera huyendo de los militares. Para tal efecto, avanzó al oriente cruzando las parcelas y luego, se introdujo al norte por quebrada de Umallani. En quebrada de Umallani dobló a la izquierda en el pasaje Zapiga, sufriendo una caída en esta intersección. Se puso de pie y continuó corriendo hasta que volvió a caerse cerca del domicilio de Pasaje Zapiga N° 9125.

13.- Tampoco se discutió que mientras huía fue seguido por los militares, por orden de la Teniente Navarrete, entre ellos, el acusado Gormaz.

14.- No se discutió que González fue detenido por efectivos militares tras caerse por segunda vez, cerca del domicilio de Pasaje Zapiga N° 9125.

15.- No se discutió que González sufrió una lesión consistente en contusión de tórax fractura del segmento lateral del noveno arco costal izquierdo con desplazamiento y del décimo arco costal izquierdo sin desplazamiento. Neumotórax epsilateral de escasa cuantía y enfisema en la pared de hemitórax izquierdo.

**Aspectos sometidos a debate y que fundamentaron la decisión de absolver a los encausados:**

Como se señaló al momento de comunicar la decisión del Tribunal, de acuerdo a los hechos sindicados en las acusaciones y las alegaciones de apertura y clausura de los intervinientes los actos sometidos a conocimiento de este estrado fueron: disparo del acusado Santibáñez en contra del afectado, como primera medida ante la huida e infringiendo protocolos, embestida de acusado Gormaz en contra del afectado y la omisión del acusado Puchi en cuanto impedir o hacer cesar tales conductas, todas constitutivas del delito de apremios ilegítimos del artículo 150 letra d) del Código Penal, las dos primeras en su vertiente activa y la última omisiva.

**Imputación al acusado José Luis Santibáñez Lucero:**

Según la acusación ante la huida de la víctima ...“el Sargento 2º del Ejército José Luis Santibáñez Lucero, quien aún se encontraba arriba del camión ya señalado, en la parte posterior del mismo, se percató de esta situación, y como primera medida ante la huida de la víctima, infringiendo los protocolos establecidos para el uso de armamento no letal, apuntó con su escopeta antidisturbios de manera directa hacia el

cuerpo de la víctima, a corta distancia, percutando así un disparo directo hacia ésta, motivo por el cual Sergio Antonio González Ocampo recibió un total de 06 perdigones en distintas partes del cuerpo, particularmente en su pierna derecha, codo izquierdo, pierna izquierda, muslo y rodilla izquierda”.

Como dijimos anteriormente, no se encuentra discutido, que, en el lugar de los hechos, José Luis Santibáñez Lucero disparó su escopeta antidisturbios cargada con balines de goma. Si bien, no se efectuaron pericias al armamento ni respecto de las municiones ello resulta acreditado por los dichos de la **Teniente Navarrete**, que vio un rebote de perdigón producto del disparo de Santibáñez y por los dichos del propio encartado quien, señaló que al ver que la víctima se acercaba corriendo en dirección a la Teniente Navarrete y haciendo caso omiso de las advertencias verbales y de armas de fogeo, reconoció haber disparado a fin de disuadir a la víctima.

Tampoco fue rebatido que la víctima resultara con heridas por perdigón, si bien, de la prueba no consta claramente que se tratara de heridas por 6 perdigones, lo cierto, es que si se estableció que hubo heridas por efecto de los perdigones en las extremidades inferiores, por lo demás, se demostró a merced del **dato de atención de urgencia de 22 de octubre de 2019**, del Hospital Luis Tisné, donde el médico cirujano Pereira Hechavarría constató al examen físico de González Ocampo herida por perdigón en el muslo y pierna. **La epicrisis de 23 de octubre de 2019**, consignó que el motivo de ingreso fue por contusión de tórax, el diagnóstico de egreso heridas múltiples y en la descripción, en extremidades inferiores heridas por perdigones en muslo, pierna y rodilla izquierda. También, **el dato de atención de urgencia de 25 de noviembre de 2019**, del Hospital Luis Tisné, en que la doctora Aravena Elis constató que, al examen externo, el paciente presentó en la cara interna de la pierna lesión por proyectil. Las referidas heridas se confirmaron, **por los dichos de la víctima Sergio González**, quien dio cuenta de las lesiones que sufrió, **por las fotografías ofrecidas en el numeral 1 de otros medios de prueba** en que se observaron las heridas que presentó el afectado en las extremidades inferiores y que fueron reconocidas por éste en el juicio de ser exhibidas, incorporadas y analizadas en profundidad a través de la exposición que sobre ellas hizo la perito **Negretti Castro**, quien dentro de sus conclusiones señaló que el periciado presentaba heridas por proyectil balístico.

Lo que motivó la decisión de absolución radica en que como los acusadores hicieron consistir el apremio en haber disparado como primera medida ante la huida y en infracción de protocolos para el uso de armamento no letal, la mayoría de este estrado estimó que no se alcanzó el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, pues la prueba resultó insuficiente.

En primer lugar hubo una falta de determinación de las reglas de uso de la fuerza, requisito del tipo penal y que no fue precisado en la acusación de 31 de enero

de 2024, pues solo se apuntó al incumplimiento de protocolos, sin singularizarlos, para que “el tribunal pudiera incluir en su examen una concreta inobservancia de los protocolos, lineamientos e instrucciones que norman el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior” ( Cristóbal Izquierdo Sánchez, „Addendum, Informe en Derecho El Delito de apremios ilegítimos en Chile y su realización omisiva, pag. 3).

Aunado a lo anterior, las reglas sobre uso de la fuerza a que aludieron los persecutores en la secuela del juicio, en la fecha descrita, solo estaban contenidas en un anexo de un documento emanado del Ministerio de Defensa, denominado Plan de Gestión del Riesgo de Desastres Del Ministerio De Defensa Nacional 2019, instrumento que no cuenta con la presunción de publicidad, pues se trata de un acto administrativo dictado por el Jefe de Servicio a sus subalternos entregando instrucciones en virtud de la potestad de mando o jerárquica de la que están investidos. (Para estos efectos ver Rol 36650-2017 CS 05 marzo 2018 comentada en Sentencia sobre la naturaleza de las circulares y los reglamentos administrativos).

En segundo lugar, porque aun, cuando las pruebas de los acusadores y de las defensas, proporcionaron elementos que permiten distinguir algunos de los principios inspiradores de tales reglas, como legalidad, necesidad y proporcionalidad, por las circunstancias en la que se produjeron los hechos, de noche, con restricción de circulación, bajo un patrullaje no exento de eventos disruptivos del orden público, no permite adquirir convicción conforme el estándar legal de que las acciones de la patrulla hayan estado desprovistas de la gradualidad que las regla del uso de la fuerza exigían y expuso el perito Muñoz, máxime cuando en el caso se trata de un arma de carácter no letal.

En efecto, del contexto temporoespacial y circunstancial en el que Santibáñez hizo uso de su armamento no letal, dieron cuenta entre otros, **Joshua Martínez Santibáñez**, toda vez que indicó que había barricadas en la avenida y que se sentía olor a humo en el ambiente y el propio afectado.

También, **Daniel Ignacio González Ocampo**, hermano de la víctima declaró que el día en que ocurrieron los hechos su hermano Sergio González, venía llegando de Los Andes. Llamaron a unos amigos de su hermano y amigos de él, entre ellos, Javier, Matías, Ángelo y Álvaro y organizaron un cacerolazo del cual participaron niños y vecinos. Se trataba de algo familiar. Sergio sacó un parlante y un micrófono. Él sabía que en la subcomisaria había habido balaceras, robos, saqueos. En Las Parcelas habían saqueado un supermercado, pero eso había ocurrido cuando su hermano aún no llegaba de Los Andes. A las 20:00 horas comenzó el cacerolazo y se prolongó hasta las 21:00 horas o hasta las 22:00 horas en que llegaron unos “flaites” que pusieron música, llevaron alcohol e hicieron fogatas, por lo que, junto a su hermano prefirieron alejarse de todo eso que ocurría en Quebrada de Umallani con Las Parcelas, por eso,

ellos prefirieron alejarse de ahí con su hermano y amigos hacia una plaza. Luego, los “flaites” salieron corriendo porque por Las Parcelas subieron 2 camionetas de Carabineros de civil. Los “flaites” corrieron por Quebrada de Camarones al sur, mientras que su hermano se acercó hasta Las Parcelas, mientras que él lo siguió. Sergio cruzó Las Parcelas en diagonal hacia el sur, donde está el colegio Juan Bautista, una iglesia mormona y antes, había una paquetería. Fue ahí en que vieron que venían subiendo por las Parcelas los militares en sus vehículos. Los militares arrasaron con las fogatas que había en Quebrada de Suca y en calle 19. Detalló que desde la calle 15 a la 20 estaba lleno de fogatas. Su hermano estaba por el frente, fue el único que cruzó Las Parcelas, él y 2 amigos quedaron al otro lado y cuando su hermano se podía devolver, ya era demasiado tarde, le dijeron a Sergio que corriera. Agregó que él corrió hacia Lago Gris junto a los amigos y mientras corría escuchó los primeros disparos, luego miró y vio a su hermano por pasaje Zapiga, vio que su hermano perdió el equilibrio y se cayó y observó a un militar que iba hacia su hermano. Él siguió corriendo y perdió de vista a Sergio.

En el mismo sentido, el afectado, **Sergio González Ocampo**, dijo que el 21 de octubre de 2019, alrededor de las 16: 00 horas sacó un parlante de la casa e hizo un llamado a la población para hacer un cacerolazo en Las Parcelas con Quebrada de Umallani, que culminó como a las 20:00 horas. Fue a guardar el parlante y volvió hasta el lugar, donde advirtió que había personas juntando cosas para hacer barricadas, por lo que él y unos amigos se fueron a una placita que queda en Quebrada de Umallani. Llegaron unos “flaites”, que luego se fueron porque por Las Parcelas de poniente a oriente subieron 2 camionetas negras, polarizadas que, según decían, se trataba de policías de civil. Él salió a Las Parcelas para ver qué pasaba, cruzó la calle hacia la calle Del Jardín. Sabía que mas abajo por Las Parcelas había un supermercado que había sido saqueado, pero él estaba en Las Parcelas y había cruzado para ver mejor hacia la calle Del Jardín. Vio que venían los militares y se adentró por calle Del Jardín. Hacia el interior de esa calle hay un campamento, donde hay tráfico de drogas por lo que no quiso correr hacia el interior donde estaba esa población. Los militares doblaron por Las Parcelas a calle Del Jardín y ahí él decidió correr hacia su domicilio en Lago Gris N° 9191, es decir, corrió ahora hacia el otro lado de la calle Del Jardín, explicando que hacia el norte de Las Parcelas la calle se llama Del Jardín y hacia el sur, Quebrada de Umallani. No imaginaba la velocidad de los vehículos militares. Se bajaron los militares de los transportes, con armamento en mano y a los 3 segundos le estaban disparando balines de goma, de frente, de costado y por la parte trasera del cuerpo.

Detalló que, cuando vio doblar a los militares Del jardín le dijeron: “párate ahí” y escuchó disparos que provenían de frente, de al lado y de atrás, que no hubo una advertencia para que se detuviera o disparaban, sino que, le dijeron párate ahí y “paa”,

mientras que él corría. Cabe consignar que posteriormente en su declaración dijo que primero le dispararon y luego le ordenaron detenerse.

Por su parte, el chofer de la camioneta que servía de punta de lanza de la caravana militar **Reinaldo Antonio Toro Navarro**, sostuvo que, mientras conducía una camioneta doble cabina manteniendo a como copiloto al Teniente Ibarra, subiendo por Las Parcelas, a lo lejos divisaron fogatas, él vio como a 5 personas en la fogata. Se escucharon disparos y se vieron fogonazos a unos 50 metros de distancia del camión, además, había personas tirando piedras. De los últimos fogonazos una persona arrancó por el lado derecho suyo al sur. Llegaron a intersección de Las Parcelas con la calle donde entró la persona. El teniente Ibarra divisó a una persona escondida detrás de un poste. Él ingresó con la camioneta a la calle y la persona corrió. El Teniente Ibarra le dijo insistentemente a la persona que se detuviera. Al no detenerse el sujeto, él aceleró y atravesó la camioneta bloqueándole el paso. El Teniente Ibarra se bajó de la camioneta.

En el mismo orden de ideas, **Ernesto Ibarra Pulgar**, señaló en lo medular que, mientras avanzaban por Las Parcelas, evidenciaron barricadas de fuego, donde se veían sombras de hombres, se veían también, fogonazos y se escuchaban ruidos de disparos. Al llegar al lugar en que estaban las barricadas de fuego las personas se dispersaron y corrieron en distintas direcciones, siguieron a uno de los sujetos que corrió. Estaban a 2 cuadras de distancia del sujeto, entraron por una cuadra a la derecha y lo sobrepasaron. El sujeto corrió por la calle de la intersección con Las Parcelas donde estaba la barricada, hacia el sur, lo sobrepasaron y ahí, esa persona cambió su rumbo y corrió en dirección a los camiones. La persona no portaba elementos que se apreciaran a simple vista, no supo si llevaba piedras o algo en las manos. Cuando la persona empezó a correr en dirección a los camiones, él se bajó de la camioneta y salió corriendo detrás de él, pero se detuvo porque le llegó un perdigón en la mano. Se sintieron ruidos de disparos que provenían del personal del Ejército – lo que distinguió por los sonidos - eran tiros de advertencia con munición a fogeo.

Detalló que le ordenó al sujeto que se detuviera, al cortarle el paso con la camioneta, el individuo no le obedeció y se dio a la fuga, hubo tiros de advertencia y a él le llegó un perdigón, que lo mas probable es que haya sido un rebote.

En armonía con los atestados anteriores, el **Sargento Primero del Ejército, Víctor Hugo Olguín Navarrete** dijo que mientras iban subiendo por las parcelas se escucharon disparos, avanzaron en los camiones, luego entraron a un pasaje desde donde salió un sujeto, se escucharon voces dándole orden de detención, pero el sujeto hizo caso omiso, se hicieron advertencias y luego, vino un disparo de Santibáñez.

El acusado **Puchi García**, en este aspecto sostuvo que cuando iban por Las Parcelas, aceleraron la camioneta que iba adelante y se metieron en caravana a un pasaje y en cosa de 20 segundos, la camioneta frenó, se escuchó “alto, deténgase”. Se

bajó el Teniente Ibarra de la camioneta. Él se bajó del segundo camión y desenfundó su arma porque él era el único que llevaba munición letal en caso que hubiera un ataque a la patrulla o a los periodistas. Se bajó del camión, se giró y vio pasar al señor González. Desde el primer vehículo gritaban “alto”, escucho munición de fogeo, González siguió corriendo hacia el camión a cargo de la Teniente Navarrete, quien ordenó perseguir a González.

Que el análisis de estos testimonios, por su coherencia y consistencia, permite contextualizar el evento en horas de la noche, a eso de las 23:00 horas, vigente el toque de queda, el contingente militar transitaba por Av. Las Parcelas encontrándose con barricadas a lo largo de la calle. En efecto el propio hermano de la víctima sostuvo que había barricadas en la calle 15 a la 20, en la calle 19 y un poco más abajo en la intersección de Las Parcelas con Quebrada de Suca. También reconocieron que se formó una barricada en la intersección de Quebrada de Umallani. El sector no había estado libre de saqueos y como dijeron los funcionarios militares se oían ruidos de disparos y veían fogonazos. En esas circunstancias, notoriamente adversas, fue que observaron a la víctima salir corriendo, desde Las Parcelas, a metros de donde había barricadas, y sujetos que se estaban dispersando con ocasión de la subida previa de un contingente policial. Luego, la víctima que infringiendo el toque de queda fue seguida por el equipo militar. La víctima corrió hacia el sur por calle Del Jardín y luego se devolvió al norte corriendo en dirección a las patrullas. No se efectuaron peritajes que determinaren la luminosidad del sector, empero era de noche en que sabemos reina la oscuridad, por lo que es esperable y razonable que se observaran solo siluetas de sujetos. En tales condiciones tan poco favorables, ver a un sujeto que surge corriendo desde sectores cercanos a las barricadas, que no obedece las órdenes de detención y que, en segundos e inopinadamente se acerca raudo a una oficial mujer, desatendiendo los efectos disuasivos de las armas de fogeo, pudo naturalmente alertar a Santibáñez para ocupar su arma no letal a fin de disuadir a González para que detuviera la marcha contra Navarrete.

Por lo demás, no obstante, lo fugaz del episodio no resulta claro que no se haya dado cumplimiento a los requisitos de gradualidad para uso de armamento, pues no consta que no haya habido advertencias verbales y con armas de sonido, previo al disparo de armamento no letal. Si bien, Sergio González fue confuso al respecto, pues dijo en la primera parte de su declaración que le ordenaron detenerse y le dispararon, luego dio a entender que recibió la orden simultáneamente a los disparos y luego continuó su declaración diciendo que primero le dispararon y después le dijeron que se detuviera, lo cierto es que, pese a la confusión, el afectado no desconoció que se le instruyó detenerse y no lo hizo. Luego, los funcionarios militares fueron contestes en señalar que constatando que el afectado huía se le efectuaron advertencias verbales para que se detuviera haciendo caso omiso de lo que se le ordenaba. Posteriormente,



se detonó el armamento a fogueo y después, Santibáñez detonó la escopeta con munición antidisturbios. La víctima señaló que recibió disparos provenientes de todas partes de la caravana, por delante, por el costado y por detrás del cuerpo, sin embargo, no hubo evidencias de ello, tanto por el tipo de lesión que presentó como por la ausencia de peritajes en el lugar de los hechos que permitieran concluirlo. No obstante, ello, tal afirmación hace plausible que los otros disparos que dijo que hubo correspondieran a armamento a fogueo.

Al efecto, era sustancial contar con los testigos civiles que presenciaron el hecho, con ello nos referimos al equipo de Megavisión, pues si bien, los acusadores incorporaron **un video, obtenido del acusado Puchi y singularizado en el auto de apertura con el N.U.E 256766**, lo cierto, es que, al reproducirse el material, si bien, las imágenes dieron cuenta de una nota de prensa del canal de Megavisión, las mismas aparecen editadas, observándose los trayectos que el día de los hechos indicaron los patrulleros que habían realizado, luego se observó al acusado acercándose corriendo por el costado izquierdo de la imagen, siendo apuntado por Puchi y luego, apareció una entrevista concedida por el acusado Puchi en un lugar distinto al de ocurrencia de los hechos. Al no concurrir a estrados los testigos presenciales y advirtiendo que la filmación está editada y no figuran en ella los momentos previos en que la víctima corría hacia el sur, su paso frente al vehículo de punta de lanza, que no fue controvertido, ni luego, el momento en que cambió de rumbo, no podemos descartar, que se hayan efectuado las advertencias por parte del personal militar, Ibarra, máxime que durante la reproducción se escucharon los sonidos de disparos de alerta y se observó que el afectado pese a ello continuó huyendo. En consecuencia, no se acreditó que, la primera medida ante la huida de la víctima fue el disparo de armamento no letal a que aludieron los persecutores, evadiendo un deber de advertencia y de gradualidad en el uso de la fuerza.

Huelga consignar, que como coincidieron la víctima y los acusados, los hechos ocurrieron en cuestión de segundos, en que la víctima modificó su rumbo y se dispuso, corriendo en dirección a la patrulla.

Un tercer orden de ideas esbozadas al comunicar el veredicto, guarda relación con que tampoco fue posible concluir con el nivel de convicción a que se hizo referencia, que el disparo con el arma no letal, antidisturbios propinado por Santibáñez, se haya efectuado directo al cuerpo del afectado, tanto porque no existe una prueba de trayectoria como porque en el caso, el afectado se encontraba en movimiento, lo que aumenta la posibilidad de que el proyectil haya efectivamente rebotado en su persona, tesis que fue sostenida por la defensa, toda vez, que no fue discutido que corría huyendo del lugar.

Sobre este acápite la Teniente **Kamila Alejandra Navarrete Robles** señaló que, el 21 de octubre de 2019, se encontraba a cargo de uno de los 2 camiones del

Ejército. El primer camión de la columna estaba a cargo del Teniente Ibarra y el segundo a cargo de ella. Antes de los 2 camiones iba una camioneta. En su camión se encontraba el Sargento 2° Santibáñez y alumnos de la Escuela de Telecomunicaciones entre ellos, Gormaz, Molina y Burgos. Además, estaba el Sargento Sepúlveda. Luego de patrullar en Irarrázaval, se les unió Megavisión y se dirigieron a Av. Grecia, donde desembarcaron y continuaron marcha a pie porque recibieron ataques y tiros de las calles aledañas. Luego embarcaron y continuaron el patrullaje por Las Parcelas. Se vieron barricadas y se sintieron tiros. La columna aceleró y su camión se detuvo en diagonal entre Las Parcelas y una calle. Se sintieron tiros y vio que desembarcaron de sus vehículos el Mayor Puchi y el Teniente Ibarra. Se escucharon gritos de “alto”. Ella desembarcó y ordenó a los tripulantes de su camión desembarcar. Cuando estaba debajo de su camión vio que una persona que hizo caso omiso a los gritos de alto iba corriendo en dirección a ella. Entre el momento de los tiros que escuchó y aquel en que la persona corrió hacia ella pasaron segundos, fue en menos de un minuto. Estaba vigente el horario de toque de queda y cuando la persona corrió hacia ella, ahí observó un rebote de perdigón por un tiro de Santibáñez realizado desde arriba del camión. Dijo que vio que Santibáñez apuntó hacia el suelo, además, eso les recalcaban antes de cada patrullaje.

Detalló que ella sintió tiros que eran ajenos a la columna; el camión aceleró, se situó en diagonal entre Las Parcelas y una calle. Desembarcó y en segundos vio a la persona corriendo hacia ella a gran velocidad, pensó que la persona estaba cometiendo un delito, pues estaban en toque de queda, lo vio como una amenaza al correr hacia ella y sin detenerse ante los llamados y advertencias de alto. Fue en ese momento, en que Santibáñez disparó al piso, zona segura y el perdigón rebotó. Santibáñez disparó con un arma no letal, es decir, con un elemento disuasivo, pues su objetivo no era causar daño, sino que la persona se detuviera, porque corría hacia ella y pudo haber dañado su integridad, lo que se buscaba era disuadir, lograr el efecto de que la persona se detuviera sin violencia y que no se acercara a ella, pero la persona siguió corriendo no importándole las advertencias, acercándose a ella como a 3 metros, Santibáñez estaba a más de 2 metros de distancia del sujeto por lo que efectuó un tiro reglamentario.

Acorde el testimonio analizado, el acusado **José Luis Santibáñez**, dijo que escuchó que alguien dijo “alto” a una persona que corrió de sur a norte, en contra del sentido en que ellos habían avanzado. La voz que dijo “alto” era del Teniente Ibarra. La persona que corría no se detuvo, se usaron tiros de fogeo para disuadir a la persona y cuando ésta estaba a unos 20 o 25 metros del segundo camión donde estaba él, situado al costado izquierdo de la parte posterior y, como estaba también la Teniente Navarrete, como la persona no hizo caso de la orden, ni se detuvo con el armamento a fogeo, él hizo uso de la escopeta antidisturbios disparando al piso.

Es decir, tanto Santibáñez como Navarrete, coincidieron en que Santibáñez efectuó un disparo al piso, por lo demás se condice con las lesiones por perdigones que registró la víctima constatadas únicamente en las extremidades inferiores, por lo que no puede descartarse que se haya tratado de rebotes de perdigones que dieron primeramente al piso, no podemos olvidar que la víctima se encontraba en movimiento, corriendo, por lo que con mayor razón pudo haber sido víctima de los rebotes de perdigón más que de un ataque directo.

Al efecto resulta imperioso reiterar que no contamos con pericias o testimonios que dieran cuenta de hallazgos en el lugar de los hechos que nos orientarían a la hora de determinar la locación del afectado en el instante en que fue lesionado.

Si bien, sabemos que Santibáñez se encontraba sobre el camión, militar, en la parte trasera, no hubo un peritaje de trayectoria e inclinación que determinare en qué dirección disparó, lo que es de toda relevancia si se acusa a Santibáñez de haber atacado al ofendido directamente al cuerpo.

Por otro lado, aunque la oficial Navarrete señaló que Santibáñez se encontraba a unos 3 metros de González al momento de disparar al piso, lo cierto, es que ello no quedó tan claro, pues al escuchar al Oficial de caso, el **detective Christian Villalobos Jiménez**, quien se constituyó en el lugar de los hechos y participó de la denominada reconstrucción de escena, que por lo demás, no se realizó, sino que únicamente hubo un levantamiento de imágenes dio a entender y así se observó **en las fotografías 12 a 15 del set N° 4 de otros medios de prueba**, que el camión en que se encontraba Santibáñez, se ubicaba prácticamente en la intersección de las Parcelas con Del Jardín, estacionado, pero en posición de ingresar a Del Jardín lo que no se condice con el **plano de planta ofrecido con el número 9 de los otros medios de prueba ofrecidos por la querellante**, que a modo de ilustración se incorporó durante su testimonio y en el que el propio testigo refirió que pudo haber estado errado, pues en ese documento, el camión en que se encontraba Santibáñez figura situado de cuerpo entero en Las Parcelas, situándose en el dibujo a la víctima delante del camión en este caso y en diagonal en el caso anterior, lo que aumentó la brecha de la duda a la hora de determinar desde y hacia dónde se dirigió el disparo. Si bien, señaló Villalobos no contaron con mayor ayuda policial el día de la reconstitución, finalmente terminaron ubicando el camión con las condiciones de tránsito existentes en el momento de la reconstrucción de escena por lo que, en definitiva, no sabemos con meridiana certeza, cual fue la posición del camión lo que redundo en nula posibilidad de determinar desde, hacia y cómo se efectuó el disparo.

Tampoco concurrió a estrados la perito Calderón Pizarro, quien pudo haber explicado el motivo de la discordancia entre su croquis y los dichos de los testigos.

Que como corolario de todo lo señalado, y ante la insuficiencia de la prueba de cargo cobró plausibilidad la teoría de la defensa que por lo demás coincidió con las

conclusiones arribadas por el perito criminalístico **Raúl Eduardo Muñoz Calizto**, quien dando sobrada explicación de su expertiz, por los años en que se desempeñó en institución policial (PDI) dedicada a funciones de orden público, finalmente concluyó que se dieron cumplimiento a las reglas de uso de la fuerza no solo en cuanto a la gradualidad, precisamente porque hubo instancias previas al disparo, sino en cuanto a la habilitación para el uso de armamento no letal respecto de lo que él consideró como un intento hostil.

**Imputación al acusado Patricio Fernando Gormaz Torres:**

En lo que atañe a Gormaz Torres, la acusación estableció que ... “Acto seguido, la víctima ya herida, siguió corriendo por calle Quebrada de Umallani, momento en el que a la orden de la Teniente Kamila Alejandra Navarrete Robles, tres cabos dragoneantes, entre ellos el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres, iniciaron la persecución de la víctima, quien dadas sus lesiones perdió el equilibrio, cayendo al piso en la intersección de la calle Umallani con Pasaje Zapiga, para luego levantarse y seguir corriendo con dificultad por el Pasaje Zapiga. Al llegar frente a la numeración de Pasaje Zapiga N° 9125, la víctima volvió a caer, logrando el imputado Patricio Fernando Gormaz Torres darle alcance, y aún antes de que la víctima lograra ponerse totalmente de pie, el imputado y cabo dragoneante del Ejército Patricio Fernando Gormaz Torres, lo embistió golpeándolo violentamente en sus costillas, derribándolo”.

Como dijimos antes, no fue discutido que tras el encuentro con los militares y haber resultado herido por perdigones en las piernas, la víctima continuó su huida corriendo. De esta forma cruzó Las Parcelas y se introdujo por Quebrada de Umallani al norte y luego, ingresó a un pasaje que se encuentra en bajada, esto es, pasaje Zapiga, cayéndose y luego incorporándose nuevamente en la intersección de pasaje Zapiga con Quebrada de Umallani. La víctima continuó corriendo y cayó nuevamente a la altura del N° 9165 de pasaje Zapiga. En ese lugar, fue detenido por los funcionarios militares, entre ellos Gormaz, quienes lo seguían por orden de la teniente Navarrete.

Sobre tales asertos depuso el hermano del afectado, quien también huía de los militares junto a otros amigos del ofendido. **Daniel González Ocampo** refirió que Sergio González corría detrás de él y que perdió el equilibrio y cayó en la intersección de Quebrada de Umallani con pasaje Zapiga, luego, lo perdió de vista. El afectado **Sergio González Ocampo**, en el mismo sentido, declaró que al arrancar de los militares se introdujo por la continuación de calle Del jardín que, hacia el norte, toma el nombre de Quebrada de Umallani, en dirección a su casa. Que dobló por pasaje Zapiga, que se cayó, se paró y continuó corriendo hasta que cayó nuevamente. Lo anterior se grafica a merced de **las fotografías del set N° 4 de otros medios de prueba** que exhibidas cronológicamente fueron dando cuenta de los lugares de los hechos desde que González se encontraba en Del Jardín hasta su detención en pasaje Zapiga.

Por su parte, **la Teniente Navarrete** ordenó a los cabos que detuvieran al acusado, entre ellos Gormaz y, asimismo, avanzó detrás de los dragoneantes hasta la intersección de Umallani con pasaje Zapiga donde se detuvo.

Tampoco fue controvertido que el afectado resultó lesionado en sus costillas diagnosticándosele contusión de tórax fractura del segmento lateral del noveno arco costal izquierdo con desplazamiento y del décimo arco costal izquierdo sin desplazamiento. Neumotórax epsilateral de escasa cuantía y enfisema en la pared de hemitórax izquierdo, lo que por lo demás consta de la prueba documental que consistió en del **dato de atención de urgencia de 22 de octubre de 2019. La epicrisis de 23 de octubre de 2019, y el TC de Tórax de 22 de octubre de 2019** que consignó contusión de tórax fractura del segmento lateral del noveno arco costal izquierdo con desplazamiento y del décimo arco costal izquierdo sin desplazamiento. Neumotórax epsilateral de escasa cuantía y enfisema en la pared de hemitórax izquierdo. También, **el dato de atención de urgencia de 25 de noviembre de 2019.** Lo anterior se refrendó en los dichos de la **víctima** y de la descripción que de las lesiones sufridas por González efectuó la perito Negretti Castro.

Ahora en cuanto a lo disputado, si bien la acusación imputó a Gormaz el hecho de embestir a González, aun cuando la acepción “embestir” puede estimarse como comprensiva de cualquier golpe de alta intensidad, lo cierto es que en el caso de marras, se atribuye a Gormaz el haber dado un golpe de patada a González en la zona de sus costillas, lo que no resultó probado pues de los dichos del afectado, esto es, en resumen, que luego de caer por segunda vez, y mientras se encontraba sentado o hincado, diciendo que se rendía, un hombre le pegó una patada en las costillas y lo quebró y que lo tomaron entre 4 o 5 sujetos para llevárselo. Que llegó un militar que lo seguía desde el principio y le pegó una patada, ello se contrapone a lo que dijo la perito Negretti, haber recibido como relato, esto es, la víctima indicó que luego de habersele comprimido el hombro por un primer militar, fue pateado por un segundo. Esta contradicción nos colocó en la disyuntiva de no poder determinar finalmente cuál de los militares que participaron de la detención de González fue quien le propinó una patada.

Nada aportó al respecto la declaración de **Joshua Omar René Martínez Santibáñez**, quien se encontraba en su domicilio de pasaje Zapiga N° 9125, cuando oyó un disparo, se asomó por la ventana con medio cuerpo hacia afuera, mientras su pareja Camila grababa con su celular al exterior, fue ahí que vio como a Sergio le pegaron una patada, sintió un quejido, luego un ruido de metal y posteriormente, escuchó como que a Sergio lo azotaban contra una reja o algo así. Después observó como se llevaban a Sergio y como uno de los militares en el intertanto le pegó en la cabeza “un pape” o “una cachetada”

Sin perjuicio que el testigo, no proporcionó la identidad ni reconoció en juicio al militar que pudo haberle propinado la patada a la víctima, ni aquel que le dio un golpe a mano abierta en la cabeza, su testimonio entra en abierta contradicción con lo que al efecto sostuvo el Oficial de caso **Villalobos Jiménez**, pues, al efectuar la diligencia de reconstitución de escena con profesionales con contextura similar al testigo y aun, cuando se expusiera hacia afuera del umbral la mitad del cuerpo, como se describió en el testimonio de Martínez, concluyó, que según la posición que la víctima refirió haber tenido, Joshua Martínez no estaba en perspectiva de ver al afectado. No obstante, el Sr. Fiscal consultó que si no hubiera estado el vehículo que figura en las fotografías de la diligencia de reconstitución y **aquellas que ilustran la vista que habría tenido Martínez Santibáñez, correspondientes a las ofrecidas en el numeral 3 del auto de apertura**, pudo haberse ubicado la víctima al alcance de la vista de la ventana, el oficial fue enfático en cuanto a que el afectado se posicionó en la reconstitución de escena en el mismo lugar en que se produjo la detención, no siendo posible que se viera desde la ventana.

Tampoco, pudo contribuir a determinar la intervención de Gormaz, la testigo **Camila Ramírez Pino**, en lo medular expuso que estaban en la pieza de Joshua y empezaron a sentir disparos cerca de la casa, escucharon gritos. Joshua le dijo que empezara a grabar porque algo estaba pasando. Se puso encima de Joshua con el celular hacia la ventana grabando empezaron a sentir pasos corriendo y por detrás pasos más fuertes como de bototos. Sergio se cayó y detrás los militares corrieron y los empezaron a golpear en múltiples ocasiones, le dijeron garabatos e insultos. Sostuvo que vio cuando los militares le pegaban a Sergio González, no obstante, en virtud del ejercicio a que alude el artículo 332 del Código Procesal Penal se confirmó que esa información no la había dado con anterioridad.

Así conforme este testimonio mas de un efectivo habría golpeado a Sergio González, no pudiendo determinarse entonces, con mayor razón la intervención de Gormaz.

Con todo, el registro audiovisual cuyo origen no fue cuestionado por las defensas y que fue reconocido por la testigo como aquel que ella grabó desde su celular **ofrecido en el número 6 de otros medios de prueba**, no fue esclarecedor, en tanto, en aquel, si bien, se observó la persecución, esta se ejecutó por dos militares, uno delante de otro y una vez, que estos salen del plano de observación, se escuchó un quejido consistente con la agresión que dijo sufrir el afectado y que resultó constatada a nivel médico. Si bien se observó en el video que un sujeto golpeó a mano abierta en la cabeza al afectado, no se pudo determinar de quién se trató.

Por último, **Gormaz Torres**, dijo que cayó conjuntamente con la víctima luego de haberse lanzado hacia ella en una especie de tackle no siendo esta dinámica



concordante con las lesiones que experimentó la víctima, pues según explicó la perito **Negretti**, este golpe de alto impacto que recibió González se condice con patada.

Valga precisar que, si bien Gormaz Torres adujo haber alcanzado al afectado mediante un tackle, y este se quejó de sus costillas, en el escenario descrito, en donde la versión de la víctima evidencia inconsistencias insalvables, no se pudo determinar, más allá de toda duda razonable, la intervención del acusado Patricio Fernando Gormaz Torres.

**Imputación al acusado Miguel Alejandro Puchi García:**

Previamente, dejaremos en claro, que, no obstante, los dichos del acusador en sus alegaciones, como referimos al comunicar el veredicto, conforme el marco acusatorio, este tribunal fue llamado a conocer, en relación, al entonces Capitán Puchi, respecto de su participación en la vertiente omisiva del delito de apremios ilegítimos – su responsabilidad por el mando- por lo que, el análisis deberá efectuarse con estricto apego al Principio de Congruencia. Si bien, los hechos describen que Puchi apuntó con su arma a González, no se indicó que fuera esta acción, un apremio, ni el detonante de los supuestos apremios ilegítimos cometidos por los acusados Santibáñez y Gormaz, y como veremos de dicha acción tampoco podrá extraerse el dolo directo que requiere esta figura.

Siguiendo el orden de la acusación, el tercer párrafo, luego de describir la conducta que se atribuyó Santibáñez Lucero y antes de señalar los hechos imputados a Gormaz, indica que: “Todo esto ocurrió en presencia del Capitán de Ejército Miguel Puchi García, funcionario de rango más alto y que se encontraba a cargo del contingente militar, quien teniendo la facultad, autoridad y posición para impedir o al menos hacer cesar esta situación, nada hizo, sin arbitrar las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de la víctima”.

Acorde a la acusación, entonces, el disparo de Santibáñez constitutivo de apremios ilegítimos, ocurrió en presencia de Puchi y éste no lo impidió o no lo hizo cesar.

Según sostiene el Profesor Durán: “Gramaticalmente, impedir es estorbar, frenar, paralizar, imposibilitar la ejecución de algo, suspender, embargar su ejecución, disuadir. Por ello, textualmente debe entenderse que el deber del empleado público para con el bien jurídico protegido es no omitir su obligación de frenar, suspender, evitar o imposibilitar la ejecución, más o menos cercana o pronta en el tiempo, de los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre la víctima. En el mismo sentido, hacer cesar significa producir, ejecutar, obrar, realizar, causar u ocasionar actos o acciones con el fin de acabar, finalizar, concluir, terminar o hacer caer algo. Esto es, el empleado público debe realizar actos, ejecutar acciones concretas y directamente destinadas a terminar, finalizar, acabar o para que se dejen de realizar tales apremios o malos tratos de los que conoce su ocurrencia, teniendo la facultad o

autoridad necesaria para ello o estando en posición para ello”. (Nociones para la interpretación y delimitación del nuevo delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en Rev. derecho (Coquimbo, En línea) 2020, 27: e4567, página 8)

Definido en qué consiste impedir y hacer cesar, la acusación se reduciría a que, en definitiva, Puchi no impidió el disparo de Santibáñez, no se planteó durante la secuela del juicio que Santibáñez haya percutido más de un tiro, sino que lo que se le imputó fue “un disparo directo al cuerpo”, por lo que la conducta de Puchi estaría dada por “no impedir” el apremio.

En primer lugar, habiéndose desestimado que Santibáñez incurriera en el delito de apremios ilegítimos, es decir, al no haber acción ilícita que impedir respecto de Santibáñez decayó necesariamente la imputación que por la calidad de responsable por el mando recaía sobre Puchi en relación a la acción de Santibáñez.

En segundo lugar, si estimáramos que la conducta de Santibáñez es constitutiva de apremios ilegítimos no hubo prueba, con el estándar de convicción requerido, que permitiera concluir que Puchi pudiera impedir el disparo. Como dijimos impedir implica frenar, suspender, evitar o imposibilitar la ejecución, más o menos cercana o pronta en el tiempo, de los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre la víctima, en suma, una conducta previa a que estos se realicen.

Como hemos constatado, los hechos que motivaron el disparo se suscitaron en cuestión de segundos. Se escucharon voces de alto, se disparó armamento de fogeo y la víctima pasó ante los ojos de Puchi corriendo intrépida por el costado de la patrulla y en dirección al segundo camión cuando se detonó el disparo, es decir, hubo una acción que no fue más o menos cercana, sino que, por poco, no fue instantánea, fue casi sincronizada por lo fugaz que ocurrió el evento, por lo que en términos físicos no se pudo demostrar que Puchi tuviera la posibilidad de actuar impidiendo el disparo. Al efecto la modificación introducida por la ley 21.560 respecto de la modalidad omisiva del tipo penal, es sumamente relevante, pues no solo se requiere que el encargado del mando cuente con la facultad o autoridad para impedir o hacer cesar la conducta, sino que al eliminar la conjunción “o”, se exige copulativamente que quien posea la facultad o autoridad esté en posición para hacerlo (impedir o hacer cesar el apremio). Esta exigencia típica de “encontrarse en posición de hacerlo” implica que el empleado público tenga la posibilidad fáctica de impedir o hacer cesar los apremios, como estar física o situacionalmente en condiciones de hacerlo. Conforme a esto, tampoco se demostró que Puchi estuviera en posición de impedir el disparo porque no se determinó que Santibáñez se encontrara corporalmente posicionado a la vista de Puchi y viceversa, ello principalmente porque hubo dudas sustanciales en relación a la posición del camión en cuya parte trasera se encontraba Santibáñez y desde donde

efectuó los disparos, pues hubo inconsistencias evidentes en la prueba de cargo a las cuales ya nos referimos al valorar la imputación sobre Santibáñez.

Por la misma razón, no obstante, ya nos referimos a esto, tampoco pudo acreditarse que Santibáñez vio a Puchi apuntar a la víctima, como para sostener que haya actuado estimulado por Puchi a través de la exhibición de su arma apuntando a Sergio González Ocampo.

Que en lo que atañe al segundo evento, esto es, la responsabilidad que cabría a Puchi por la imputación efectuada en la persona de Patricio Gormaz, sin perjuicio que ésta fue desestimada, aún en el caso de considerarse que se configurarían los apremios ilegítimos, la detención se produjo casi a 3 cuadras de calle Del Jardín en que se encontraba Puchi, cuadras que no se ubicaban en línea recta. Pasaje Zapiga es una calle paralela a la Avenida Las Parcelas. La víctima corrió por Del Jardín en dirección al norte ahí la vio Puchi, luego, cruzó subiendo por Las Parcelas, se introdujo por Quebrada de Umallani y dobló al poniente por el pasaje Zapiga. Como dijimos, aún en el caso, que este episodio sea constitutivo del delito de apremios ilegítimos y considerando que la exigencia legal implica que el empleado público tenga la facultad y autoridad “y” se encuentre en posición de impedir o hacer cesar el apremio, físicamente Puchi no estuvo en el lugar en que se produjo la detención, por lo que no pudo ver ni conocer en el preciso momento la forma en que se llevaba a cabo la detención, por golpes de patada, a mano abierta en la cabeza de la víctima y proferidos insultos a su persona.

En segundo lugar, huelga señalar que independiente de las alusiones al mando misión o mando detallado, las acusaciones, no le imputaron a Puchi el no impedir que se ordenara y se llevara a cabo la detención, ni tampoco impedir o hacer cesar la persecución de la víctima. La descripción fáctica de las acusaciones, se circunscribe a que Puchi omitió actos posteriores, es decir, actos que el sujeto activo habría omitido cuando ya estaba agotada la conducta y consumado el delito lo que se aviene con una suerte de encubrimiento, que, en este caso, al no haber autor decae por sí sola.

En tercer lugar y siguiendo con la idea que se imputaron al encartado actos posteriores a la consumación del delito, el tipo penal de apremios ilegítimos exige la concurrencia de dolo directo. En la faz activa ello ha sido discutido, pero es inconcusa la exigencia de dolo directo en la faz omisiva, ello implica que es necesario que el empleado público conozca y quiera la realización del delito, esto deriva del texto expreso “conociendo de estas conductas...” se requiere que, se conozca la ocurrencia de las conductas y estando en conocimiento, no impida o no haga cesar los apremios, dicho conocimiento no se demostró.

En cuarto lugar, dicha exigencia de dolo implica un dolo “actual”, que tampoco se puede sostener en el caso sublite, porque el persecutor lo atribuye a actos posteriores a la extinción de la conducta. Como sostiene el Profesor Izquierdo Sánchez

“el dolo directo del autor en comisión por omisión de este tipo penal tiene que incidir en circunstancias en que el apremio se esté actualmente realizando o empezando a ocurrir, y que, ante estas situaciones, el empleado público decida no impedir los apremios que están por comenzar ni hacer cesar aquellos que se están realizando. En definitiva, para que se verifique una omisión en relación con este delito, se exige que el sujeto activo con conocimiento actual y cierto de conductas de apremios ilegítimos quiera no impedirlos ni hacerlos cesar. En consecuencia, no bastará para afirmar el dolo del autor, el hecho que éste tome conocimiento de apremios que ya ocurrieron, toda vez, toda vez, que precisamente por haber éstos ya sucedido, el autor no habrá podido siquiera representarse la posibilidad de actuar para impedir o hacer cesar dichos apremios. Aquí se hace alusión al elemento de la actualidad del dolo que debe encontrarse presente para que se configure este tipo penal, ya que no tiene sentido que se le impute responsabilidad penal al empleado público que tomó conocimiento de conductas propias de apremios ilegítimos con una posterioridad a su ocurrencia, sin poder ya, hacer nada para evitarlos o detenerlos. Por lo anterior, para imputar la comisión por omisión del delito de apremios ilegítimos, deberá en primer lugar, revisarse si es que hubo o no una extemporaneidad del conocimiento que se haya tenido de las conductas constitutivas de apremios ilegítimos u otros tratos crueles. Si en el momento en que se toma conocimiento de dichas conductas, éstas ya habían ocurrido a una distancia temporal de tal longitud que no fue posible su impedimento o cesación, deberá entonces rechazarse dicha imputación. Es aquí la importancia de la actualidad del dolo, puesto que se requiere que el supuesto omitente haya tenido al menos la posibilidad de realizar una conducta con el fin de detener los acontecimientos con un conocimiento que no sea extemporáneo.” (Cristóbal Izquierdo Sánchez, Informe en Derecho, El delito de apremios ilegítimos en Chile y su realización omisiva, pag. 25).

En quinto lugar, sin perjuicio, si le concediéramos a los persecutores que la conducta omisiva post del empleado público o reconociendo que si bien, el dolo ha de ser actual, este elemento psicológico puede inferirse de conductas anteriores, simultáneas o posteriores al hecho luctuoso, tales conductas omisivas no fueron acreditadas.

Al efecto reza la acusación que: Posteriormente, ya en la intersección recién citada, la Teniente Kamila Navarrete, hizo entrega de la víctima al acusado y Capitán del Ejército Miguel Puchi García, haciéndole presente la forma en que había ocurrido la detención y la fuerza que se empleó en esta. Sin embargo, el Capitán de Ejército Miguel Puchi García, habiendo tomado conocimiento de esto y estando al mando de dicho contingente militar, obvió las evidentes lesiones de la víctima, tampoco ordenó que fuera revisado y en lugar de trasladarlo a un centro de salud para que recibiera la debida atención médica, decidió, a pesar de que la víctima tenía su ropa

ensangrentada, se quejaba de dolor y presentaba evidentes lesiones en su rostro, subirlo a la parte posterior de la segunda patrulla militar, con sus manos amarradas atrás de su cuerpo y boca abajo, iniciando el contingente militar desplazamientos por alrededor de algunos minutos, por diversas calles de la comuna de Peñalolén, para finalmente trasladarlo hasta la 43° Comisaría de Peñalolén, ubicada en Avenida Consistorial 2060 de esta comuna, entregándolo en calidad de detenido y sin dar cuenta del grave estado de salud en que se encontraba, lugar donde el personal policial, al advertir tal situación, lo trasladó hacia un centro de salud para recibir atención médica.

Respecto de todo este procedimiento, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García, no dio cuenta a su mando en el Ejército de Chile, no dejó constancia del mismo ni informó del uso de armas de fuego por personal a su cargo.

De esta manera, el acusado y Capitán de Ejército Miguel Puchi García no deja constancia, ni registro alguno, de los hechos ocurridos bajo su responsabilidad”.

Para configurar el comportamiento omisivo constitutivo de delito, debemos determinar cuál sería la o las conductas esperadas.

Se afirmó que luego de poner al detenido a disposición de Puchi, éste obvió las notorias lesiones que presentaba. Los testigos de cargo militares y el acusado concordaron en que se le efectuó un registro visual a la víctima y no registraba lesiones, así, **Manuel Jeremías Biernary Meza**, declaró que vio llegar al detenido al camión a cargo del Teniente Inostroza, que a él se le instruyó ayudar a González a subir el camión y que no vio que éste tuviera lesiones en ese momento; al ser interrogado el testigo presentado por los acusadores **Felipe Eduardo Millar Figueroa**, refirió que no recordaba que el detenido a quien subieron al camión en que él se encontraba para ser trasladado a la comisaría mantuviera lesiones. Por su parte, **Rodrigo Esteban Espinoza Reyes** quien transitaba a bordo del camión en el cual se condujo a González a la comisaría no dio cuenta que el detenido mantuviera lesiones antes de subir al camión, empero al bajar en la comisaría González tendría el rostro ensangrentado porque se habría autolesionado (recordemos que la acusación no se extendió a conductas que pudieran haber ocurrido durante el traslado de González a la comisaría); En el mismo sentido el cabo dragoneante **Sebastián Ignacio Muñoz Aravena**, que iba a bordo del camión en que se dispuso al detenido en dirección a la comisaría, vio cuando lo subieron, pero no le vio lesiones, ni observó que fuera agredido por personal militar en el traslado, tampoco le vio lesiones cuando se bajó del dispositivo en la comisaría; Por último, si bien el Sargento 2° **Francisco Santander Najari**, ocupante del camión en que se subió al detenido, dijo haberlo observado con un raspón en la cara, suponía que se había caído y estaba todo sucio, ayudó al detenido a subir al camión porque iba con amarras plásticas y la pisadera del vehículo era muy alta y si bien, el detenido se quejaba, pero no se le veía una lesión ni

nada que diera cuenta que tenía dolor; Con todo, **Víctor Hugo Olguín Navarrete**, refirió luego que detuvieron al detenido otros militares lo subieron al otro camión y venía sin lesiones, pero después en el traslado a la comisaría se provocó autolesiones –se pegaba cabezazos contra el piso–, lo que supo por lo que contaron los del otro camión. Por último, el acusado **Puchi** dijo que González venía muy sucio, pero no se veía herido. En lo que atañe a las lesiones de la costilla, la propia **víctima** dijo que no observaban en la piel. Ahora, respecto de las huellas por perdigones, si bien se incorporaron las vestimentas de la víctima a través **de las fotografías del set N° 1** y figuran pequeños orificios compatibles con la introducción de perdigones considerando que todos los testigos militares cuyos testimonios analizamos no observaron lesiones en la persona de González Ocampo, que era de noche, que se dijo que pasaje Zapiga contaba con 2 lomos de toro y en bajada, lo que motivó que la víctima se cayera 2 veces, aunado a que no contamos con peritajes que dieran cuenta de la luminosidad del lugar, es posible que esas heridas no se hayan observado, esto, considerando que al tenor de la acusación las lesiones que debió constatar Puchi in situ, antes de subir al detenido al camión, son en las piernas producto de los perdigones y en las costillas producto de una patada, pues si bien, como expresamos hubo testigos, que dijeron que con posterioridad en el trayecto a la comisaría la víctima se lesionó e incluso el afectado dijo que lo golpearon, no puede descartarse que las manchas de sangre en las vestimentas del acusado provinieran de este evento posterior que no fue precisado en la acusación y que en todo caso no fue probado. Brevemente, sobre este punto, si bien la víctima dijo que luego de ser detenida y subida sobre el camión militar, durante el traslado a la comisaría recibió golpes por parte de los funcionarios militares que estaban en el vehículo, que le pisaban la cabeza y que incluso terminó con el tabique desviado, lo cierto es que, la lesión de tabique nasal con desviación levoconvexa y espolón óseo, descrita en la acusación, fue anterior al hecho por meses o incluso años según dio cuenta **la perito Negretti**, por lo que no se le puede atribuir a algún evento abusivo.

En cuanto, al hecho de subir al afectado boca abajo y de manos atadas en el camión, por sí solo, no se puede considerar una conducta de abuso, pues los camiones militares no cuentan con cabinas especiales para detenidos y se estimó razonable la explicación que ofrecieron los militares en cuanto a que de mantener sentada a la víctima podría atentar contra su seguridad lanzándose del camión pues no es techado y mantenía los toldos abiertos, no podemos obviar como criterio interpretativo lo que señala el inciso tercero del artículo 150 letra D, sobre el cual razonamos antes de entrar al análisis de los hechos.

Con todo, aparece atendible que in situ por el escenario poco pacífico que había no se le pudiera efectuar un análisis exhaustivo al afectado constatando lesiones pues había que salir rápido del lugar como señaló Puchi.



Al no constatar lesiones al detenido mal podría haberse incumplido u omitido algún deber de prestar primeros auxilios o trasladar a la víctima a un centro asistencial.

No obsta, a lo razonado que el Cabo de Carabineros de Chile **Diego Andrés Zamorano Valenzuela**, encargado de confeccionar el parte detenido, quien, por lo demás, no tuvo acceso a la víctima, haya descrito en el documento que otro carabinero (que no declaró en juicio), **haya observado en la comisaría al detenido quejumbroso y como refiere la documental N° 9 y 10** y que presentara lesiones visibles, pues estando ya en la comisaría de todas maneras procedía, “la correspondiente” constatación de lesiones.

Por último, se imputó a Puchi el no haber informado sobre el procedimiento ni el uso de armas de fuego por personal a su cargo. Al efecto, se incorporó la prueba testimonial que consistió en los dichos del **Coronel Cristian Concha Vidal**, quien al efecto sostuvo, en resumen, que de los archivos y antecedentes que obran bajo su custodia no se encontró registro de procedimiento o evento específico, participación de militares o municiones utilizadas el 21 de octubre de 2019 en Las Parcelas con Quebrada de Umallani. El funcionario dio cuenta de los documentos que remitió para confirmar sus dichos y los mismos, se incorporaron y ofrecieron **bajo el N° 8 a, b y c**, si bien, no se explicó a que se refieren las siglas y abreviaturas que contienen los instrumentos y el análisis se hizo engorroso, lo cierto es que, constan algunos procedimientos, por ejemplo, en metro Macul y listas de funcionarios, tiros disparados y municiones, empero no consta el procedimiento en las Parcelas con Quebrada de Umallani, ni hay constancia de munición devuelta y utilizada por los consultados en ese lugar el 21 de octubre de 2019. Se incorporó también por los persecutores un **acta de entrega de detenidos ofrecida en la letra d, del numeral 8 de la prueba documental**, en cuya virtud Santibáñez habría hecho entrega de la víctima a la comisaría de Peñalolén, empero dicha acta no tiene data ni registra la firma del funcionario de Carabineros que supuestamente recibió al detenido Sergio González Ocampo.

En resumen, no cuenta de la prueba documental y conforme el testimonio de Concha que Puchi hay informado sobre el procedimiento, empero ello no es concluyente, pues al no indicarse cuales serían los protocolos o formalidades a través de las cuales debía elevarse la información, siquiera un protocolo que diera cuenta del deber de informar y considerando que conforme la prueba de la defensa hubo **comunicaciones escritas y mediante audios a través de WhatsApp** en los cuales Puchi narra a su superior Sr. Orellana Burrows incluso que hubo un detenido no puede estimarse que este supuesto deber de informar se haya omitido.

En sexto lugar y haciendo énfasis en que las omisiones en que habría incurrido Puchi, tienen que ver con la infracción de las denominadas reglas de la fuerza, sea

como elemento del tipo objetivo o como argumento para extraer de las referidas omisiones el elemento subjetivo, sin perjuicio de ser aplicables los argumentos que al respecto se pronunciaron a propósito del análisis y absolución de Santibáñez, nos parece necesario reiterar que las referidas reglas sobre uso de la fuerza, vigentes al día de los hechos, no fueron incorporadas, por lo que no contamos con prueba suficiente que diera cuenta de los protocolos y reglas vigentes cuando aconteció el hecho a que debieron ajustarse los militares, ni los procedimientos y directrices para dar cumplimiento a esas reglas, especificando requisitos, condiciones y circunstancias del uso de la fuerza. Si bien, durante la secuela del juicio únicamente fueron mencionadas en una sigla en el documento c número 8 de la prueba documental, sin indicar a quien fue dirigido el documento, ni señalar de qué se trataba y si bien, constarían en un anexo de un documento denominado Plan de gestión del riesgo de desastres del Ministerio de Defensa nacional 2019, que no se incorporó en el juicio, no se estableció que dicho instrumento contara con los requisitos de publicidad pues se trata de un acto administrativo dictado por el Jefe de Servicio a sus subalternos entregando instrucciones en virtud de la potestad de mando o jerárquica de la que están investidos, cuyos efectos son relativos, lo que se encuentra suficientemente explicitado en el Rol 36650-2017 de la Corte Suprema de 05 marzo 2018 sentencia comentada sobre la naturaleza de las circulares y los reglamentos administrativos.

En resumen, no se acreditó que Puchi se haya abstenido dolosamente de cumplir los deberes, protocolos o reglas a que según los persecutores estaba obligado, cobrando nuevamente plausibilidad lo que señaló el acusado en cuanto a que las instrucciones respecto de retenidos era trasladarlo a la unidad policial, lo que se condice con los dichos del Sub Oficial **Diego Andrés Zamorano Valenzuela**, en cuanto a que era común en contexto de estallido social ver a militares entregando detenidos en las unidades policiales.

A mayor abundamiento, no toda infracción a las reglas de uso de la fuerza constituye delito, sino que se requiere que derivado de esa infracción se vulnere el bien jurídico.

A propósito del bien jurídico protegido que incluye no solo una afectación física sino también psicológica derivada del hecho luctuoso, no obstante, pudiéramos colegir una afectación en esa faz en la víctima, inherente a los malos tratos físicos que hubiere recibido, ello debe probarse y lo cierto es que, el protocolo de Estambul fue elaborado por una doctora de reconocida trayectoria como lo es doña Patricia Negretti Castro, empero experta médico cirujano especialista en trauma, no sicóloga ni siquiatra, por lo que el protocolo de Estambul, no obstante, aludió al daño psicológica carece de la opinión de un experto en salud mental y por lo tanto, de una opinión científico contundente sobre el tema, que permitiera al tribunal formarse convicción suficiente

sobre el daño psicológico dejado por el evento vivenciado, en los términos que alegó el querellante en su capítulo de cargos.

Por último, a propósito que Puchi apuntó su arma contra la víctima, no obstante, se dijo con anterioridad, la víctima pasó ante sus ojos fugaz, haberla apuntado, no implica un conocimiento (dolo) ni el punto de partida para que luego se suscitara las conductas que se imputaron como apremios ilegítimos, ni un intento de cosificar a la persona de Sergio González Ocampo, pues para apreciar los hechos este tribunal ha tenido en consideración en todo momento el bien jurídico afectado y los criterios de interpretación a que se aludió en el considerando noveno.

Que de la forma en que se ha razonado este tribunal se ha hecho cargo de las acusaciones y alegaciones de los persecutores. En cuanto a las alegaciones de las defensas no se hará pronunciamiento sobre cada una de ellas por innecesario pues se han acogido razonadamente sus pretensiones.

**UNDECIMO:** Que no se impondrá sanción en costas a los acusadores, al estimarse que tuvieron motivo plausible para deducir la acción penal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 14, 15, 150D del Código Penal, artículos 45, 46, 47, 48, 96, 122, 297, 325, 328, 338, 339, 340, 342, 344, 346, 347, 355 del Código Procesal Penal, **SE RESUELVE:**

**I.-** Se **ABSUELVE**, por mayoría, a **Miguel Alejandro Puchi García, José Luis Santibáñez Lucero y Patricio Fernando Gormaz Torres** ya individualizados, de las acusaciones deducidas en su contra por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en las que se les imputó la calidad de autores del delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 letra D del Código Penal, supuestamente perpetrado el 21 de octubre de 2019 en la comuna de Peñalolén.

**II.-** Se exime a los acusadores del pago de las costas, atendido lo indicado en considerando respectivo.

Se previene que la magistrado Guerrero estuvo por condenar a los acusados Pucci, Santibáñez y Gormaz por los delitos que el persecutor les imputa en razón de los siguientes argumentos de hecho y derecho.

**A.- RESPECTO AL DERECHO:**

En cuanto a la aplicación retroactiva de las disposiciones legales incorporadas por la ley 20968, se debe dilucidar si es que efectivamente tales disposiciones establecen un régimen penológico menos riguroso para los acusados en términos tales que deba darse aplicación retroactiva a su articulado. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que en nuestro sistema esta cuestión se encuentra consagrada en el artículo 19 n° 3 inciso séptimo de la Constitución Política de la República y artículo 18 del Código Penal.

Señala la primera disposición que “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que

una nueva ley favorezca al afectado”, norma que es recogida por el artículo 18 de nuestro Código Penal en tanto cuanto precisa lo dispuesto por la norma superior y prescribe dos hipótesis y momentos en que se debe hacer aplicación de aquello, a saber: 1) **si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o; 2) le aplique una menos rigurosa.**

Por otra parte, al determinarse el sentido de dichas disposiciones la doctrina ha concluido que una nueva ley es más favorable para el acusado no sólo cuando suprime o disminuye directamente la punibilidad del hecho por el que se le juzga, sino que también cuando consagra eximentes de responsabilidad penal o atenuantes que lo benefician; cuando suprime agravantes que lo perjudicaban; cuando reduce los plazos de prescripción o modifica la forma de computarla de manera que resulta alcanzado por ella, o cuando altera la descripción del delito (el tipo delictivo), agregándole exigencias que no concurrían en la conducta por la cual se le procesa. En todos estos casos, la pena del afectado, en efecto, se excluiría o reduciría indirectamente. (Derecho Penal, Parte General, profesor Enrique Cury Urzúa, pagina 228 y 229).

En este orden de ideas debe entenderse que, el artículo 150 D del Código Penal no ha eximido de toda pena el hecho que el persecutor les ha imputado a los acusados y tampoco le aplica una pena menos rigurosa; lo que ha venido a hacer es incorporar al tipo elementos normativos, mas sin alterar el núcleo esencial de la prohibición.

Para ilustrar este punto es esclarecedor la argumentación del Tribunal Constitucional, en sentencia rol 14.328-23, de fecha 28 de septiembre de 2023, en su página 16, numeral 19 señala: Que, dicho lo anterior, corresponde determinar si la ley establece con claridad y certeza el núcleo esencial de la conducta prohibida. Al respecto, se tiene presente que la Constitución “prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo” y los tratados internacionales sobre derechos humanos, a los que hemos hecho referencia, prohíben el sometimiento a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguno de estos textos hace referencia al “abuso de funciones” o a la “infracción de Reglamentos”. Con esto se quiere dejar en evidencia que el núcleo esencial de la prohibición constitucional, convencional y legal es, precisamente, la aplicación de apremios ilegítimos, u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conducta en sí misma merecedora de reproche penal. Por ello, esta Magistratura sostuvo que, de la lectura del artículo 150 D del Código Penal “es posible apreciar que no deriva la descripción de la conducta prohibida a otra norma similar o de inferior rango, sino que la contiene en su propio texto, de modo que no se divisa que el legislador haya acudido a la técnica del reenvío” (STC12769c.6°). Lo prohibido, es aplicar, ordenar o consentir en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las expresiones “abuso de funciones” o “en

incumplimiento de los reglamentos respectivos” no forman parte del núcleo esencial de la conducta prohibida, y cumplen otras funciones en la formulación del tipo penal. En efecto, la anterior norma señalaba: “El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiera en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

En su actual redacción señala:” El empleado público que, en **incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que, en el ejercicio de sus funciones**, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de las ocurrencias de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo.

Se puede entender, en consecuencia, que las disposiciones en análisis no importan una antinomia que deba ser resuelta conforme a la regla del artículo 18 del Código Penal, toda vez que, la nueva regulación del delito de apremios ilegítimos no estableció una exigencia típica adicional a la conducta endilgada a los acusados, sino que vino a agregar una modalidad comisiva – el incumplimiento de los reglamentos respectivo actuando con abuso de su cargo- manteniendo otra hipótesis que no hace referencia al incumplimiento de reglamentos – quien ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Este planteamiento queda medidamente claro con el uso de la voz “o”, conjunción disyuntiva que supone un significado de alternancia, es decir, ofrece la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas, o entre dos variantes de una misma realidad. Por lo tanto la incorporación de la referencia de los reglamentos se prevé para una conducta diversa a la que nos convoca en este juicio, y, por lo mismo, la premisa fáctica que contiene la acusación puede ser adscrita tanto a la tipicidad de la antigua regulación de este delito, como a su nueva regulación.

Sin perjuicio de lo anterior, y aun considerando que la exigencia de un incumplimiento de reglamentos es un requisito normativo típico que se agrega al delito propuesto en la acusación como premisa normativa, de igual forma esta sentenciadora no puede si no tener por satisfecha ese elemento de tipicidad, toda vez que a este respecto se

encuentra vigente la **Circular PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2019**.

Sobre el particular, y sin perjuicio de los fundamentos que anteceden, esta sentenciadora comparte las alegaciones hechas por el persecutor y querellante (INDH) tanto en cuanto dicha circular es fuente del derecho y como tal no requiere ser probado. En efecto, conforme a nuestra doctrina las fuentes del derecho son formales y materiales, para este caso solo nos centraremos en las fuentes formales que están conformadas por: A) La ley; Tratados Internacionales; Decretos con jerarquía de Ley; Decretos con Fuerza de Ley. B) Potestad reglamentaria: Facultad ésta que la Constitución y las leyes otorgan al presidente de la república así como a otras autoridades administrativas, para producir normas jurídicas, tanto de carácter general como particular, destinadas a regular materias de interés público que no sean de dominio legal, a facilitar una adecuada aplicación de las leyes y al mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones de gobierno y administración que correspondan a tales autoridades y, estos son: Simple decretos; Reglamentos; Instrucciones – las que importan para este caso particular-, son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a sus subordinados indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición legal, o las medidas que deben tomar para el mejor funcionamiento de un servicio público.

Cuando las INSTRUCCIONES van dirigidas a un gran número de funcionarios se envían mediante **CIRCULARES**, cuando se imparten sólo a un funcionario o a un número reducido de ellos, se expiden por medio de oficios. Luego tenemos C) La costumbre; D) La jurisprudencia, E) Los principios generales del derecho y la equidad natural y, por último, en el último peldaño de esta jerarquización de las fuentes formales del derecho encontramos los actos jurídicos y los actos corporativos.

Por lo demás y si bien es cierto no se requería acreditar la Circular, no es menos que es la propia defensa quien mediante la prueba pericial, constituida por el perito señor Raúl Muñoz Calixto, incorpora la Circular en que se entregan instrucciones respecto al Uso de La Fuerza. Reglas que luego se reiteran conforme al documento ESCTEL PUESTO DE MANDO III (R) N° 3550 /4479, el que en su punto 4, singularizado INSTRUCCIONES DE COORDINACION, en su punto tercero dispone: “se dará cumplimiento a las RUF dispuestas” y que incorpora la parte querellante en el sentido de que aquellas reglas deben ser respetadas por las patrullas que salgan a controlar el orden público y resguardar ciertas infraestructuras que les parecía relevante y necesario, como villas de militares, supermercados y estaciones de metro.

Que, esto último, además, encuentra sustento en los dichos por el funcionario del ejército Felipe Millar Figueroa en tanto cuanto afirma en estrados que “siempre antes de salir a patrullar recibían instrucciones especialmente respecto al uso de las armas, pero no recuerda haber recibido otro tipo de instrucciones respecto a control del



orden público y detenciones; como también en el testimonio del Coronel Cristian Concha Vidal quien afirma que las reglas de la fuerza utilizadas a esa fecha eran las que se utilizan para los estados de catástrofe.

## **B.- RESPECTO A LOS HECHOS:**

### **DELITO POR ACCIÓN.**

**PRIMERO:** Que, como ya se dijo para esta juzgadora resulta aplicable el artículo 150 D que se encontraba vigente a la fecha de estos hechos, 21 de octubre de 2019, y así las cosas la conducta desplegada por José Luis Santibáñez Lucero y Patricio Gormaz Torres debe subsumirse jurídicamente a dicha norma, esto es, que con su actuar causaron apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcanzaron a constituir tortura.

**SEGUNDO:** Que, se analizará en primer lugar la conducta desplegada por el acusado Santibáñez Lucero.

Que, quedó suficientemente acreditado, y que no fue materia de controversia, que Santibáñez Lucero a esa fecha era Sargento de Ejército y uno de los funcionarios de mayor grado que conformaba la patrulla de la teniente Navarrete.

**TERCERO:** Que, Santibáñez Lucero afirma que al momento de disparar contra el afectado lo hace desde arriba del camión, al suelo, momentos en que éste corría directamente hacia la teniente Navarrete por entremedio de los camiones estacionados; pero, aquella afirmación no encuentra sustento en la prueba de cargo. En efecto, del video aportado por el capitán Puchi a la fiscalía da cuenta de que efectivamente una camioneta del ejército y dos camiones militares, más la camioneta de un medio de televisión (MEGA), se encuentran ubicadas en calle El Jardín; a los lejos se escuchan gritos, pero muy a lo lejos, mientras se ve correr a una persona, solo, entre disparos y los camiones militares, apegada a una muralla y luego a una reja, ambas perimetral, corre agachado, mientras lo único que se escucha decir “ahí va ese huevón”, “ese huevón”(esta juzgadora nunca escucha que se dijera alto, deténgase), y se escuchan disparos.

Que, frente a lo que el video da cuenta - y haciéndose cargo que pudo estar editado por el canal de televisión-, no se condice con lo que los militares afirman en estrado y Santibáñez Lucero, además, éste último ante Carabineros cuando hace entrega del detenido como tampoco coincide con la reconstitución de escena hecha por el persecutor y a la que sólo asiste Ibarra Pulgar, comandante de uno de los camiones que conformaban la patrulla militar.

A saber, en la reconstitución de escena se ve el camión en que iba el sargento Santibáñez Lucero, en la intersección del pasaje El Jardín con avenida Las Parcelas, el motor del camión en dirección al pasaje y su carrocería a avenida Las Parcelas, se ubican inmediatamente después del camión, por Avenida Las Parcelas, tres cabos alumnos y delante de ellos, corre el afectado.

Que la prueba referida no reúne un estándar probatorio que permita a esta sentenciadora tenerla como una prueba suficiente, sí permite arribar a la convicción que los funcionarios militares, salvo Ibarra Pulgar, no tuvieron mayor interés en colaborar con el esclarecimiento de estos hechos, por lo que sólo se considerará la prueba testimonial al respecto y documental.

Que, según el señor Santibáñez Lucero disparó al suelo, no al cuerpo y las lesiones que tiene el afectado necesariamente debieron ser por rebote pero aquello no se condice con el número de lesiones que tiene la víctima en sus extremidades, especialmente en la pierna izquierda, más se corresponde con la lesión que da cuenta que sufrió el teniente Ibarra Pulgar en su mano mientras corría tras la víctima por pasaje El Jardín, la que necesariamente correspondería a un rebote y, menos con lo declarado por la teniente Navarrete quien señaló que Santibáñez disparó sobre dos metros de distancia del afectado y que ella habría visto el rebote de un perdigón ¿?, teniendo siempre presente que el camión militar se encontraba ubicado en el pasaje, separándolo solo del afectado por la vereda, como da cuenta el video de Megavisión.

Que, además, lo declarado por Santibáñez Lucero en estrado no encuentra sustento en sus propios dichos en la 43ª Comisaria de Carabineros, donde y por requerimiento de Carabineros debió volver, por orden del capitán Pucci, a entregar, nuevamente, al detenido, ya que una vez que Carabineros se percató que estaba lesionado lo llevan a un centro asistencial, exigiendo a los militares concurrir nuevamente a la comisaria y allí Santibáñez Lucero da cuenta de hechos y lugar que distan absolutamente de lo declarado en juicio, a saber, Parte denuncia N° 3587 de 22 de octubre de 2019. Se informa a esa Fiscalía Local de Peñalolén Macul, siendo las 00:50 horas, el cabo segundo Diego Zamorano Valenzuela, de dotación de la 43ª comisaria de Peñalolén, y de servicio segunda guardia, se entrevista con el funcionario del ejército, Sargento segundo José Luis Santibáñez Lucero, cédula de identidad número 15.419.107-0, de dotación de la Escuela de Telecomunicaciones, que se encontraba de servicio toque de queda, quien manifestó que en circunstancias que realizaban un patrullaje preventivo en el vehículo militar, momentos que transitaban por avenida Las Parcelas, en dirección al oriente, al llegar la intersección **con calle Quebrada de Camarones**, de la comuna de Peñalolén, visualizan a un grupo de individuos indeterminados los cuales habría efectuado disparos en el lugar, motivo por el cual el funcionario militar, antes señalado **DESCIENDE DEL VEHICULO, TOMANDO SU ARMA DE SERVICIO, ESCOPETA ANTIDISTURBIO, EFECTUANDO UN DISPARO HACIA LOS ANTISOCIALES, POR LO QUE ESTOS SE DAN A LA FUGA DEL LUGAR, uno de ellos cayéndose a pocos metros del lugar por lo que personal militar procede a su fiscalización**, éste no portaba su cédula de identidad, ni el salvo conducto correspondiente al toque de queda decretado en la fecha de hoy, por lo cual lo trasladan hasta la 43ª Comisaria de Peñalolén, entregándolo a personal policial. Parte

policial que fue corroborado por el funcionario Zamora Valenzuela, cabo segundo de Carabineros, quien recibió la declaración de Santibáñez Lucero y declaró en estrado.

Que, los funcionarios del ejército que conformaban la patrulla están contestes en indicar que la víctima no llevaba nada en sus manos e incluso Navarrete, no obstante que luego señala que como fue al único civil al que vio correr le atribuye que debió ser él quien disparó los tiros que escucharon.

Que, la conducta desplegada por Santibáñez, conforme a la prueba rendida y a su análisis debe subsumirse en la hipótesis del “empleado público que abusando de sus funciones infringió apremios ilegítimos” a la víctima, Sergio González Ocampo.

En efecto, la teniente Navarrete afirma en estrados que lo que pretendía Santibáñez Lucero al disparar era que la persona se detuviera. La víctima estaba sola en el lugar, no habían más personas, no había fogata alguna en el lugar que se le dispara, no portaba nada en sus manos, y los gritos de personas que se escuchan en el video son muy a lo lejos de donde estaban ocurriendo estos hechos, no se muestran fogatas, muchedumbre, fogonazo, solo se ve a un hombre corriendo, agachado, sin nada en sus manos, enfrentando a dos camiones militares más una camioneta, con al menos 14 personas, y para detenerlo deben hacer uso de una escopeta antidisturbios, la que solo por su sentido natural y obvio debe necesariamente ser utilizada frente a un disturbio, es decir a más de una persona, lo que no es el caso. Y, como bien lo señala el perito Muñoz Calixto, se estaba frente a una persona que huía desesperada, eufórica, sin perjuicio que para él aquello denotara un intento de acto hostil hacia los militares.

Que, para esta sentenciadora, conforme a los dichos de Santibáñez Lucero en la unidad policial y a lo señalado por Navarrete, actuó con dolo directo, toda vez que, a Carabineros les señala que disparó para disolver a personas que estaban haciendo disturbios, que huyen y que uno de ellos cayó; en ningún momento dice que disparó al suelo y en función a los dichos de la teniente, comandante de la patrulla en la que él iba, la intención de Santibáñez era detenerlo, detenerlo por correr, detenerlo sin portar nada en sus manos, disparándole una escopeta anti disturbios.

Desechando, también, esta juzgadora la teoría de la defensa de que no se podía acreditar la relación causal entre las lesiones y el disparo de Santibáñez Lucero, en primer lugar, por la posición que se encontraba el camión militar y la multiplicidad de lesiones de la víctima en su extremidad inferior izquierda - muslo (parte que queda entre la cadera y rodilla), en la cara antero medial de pierna (corresponde a la parte que queda entre la rodilla y tobillo) y en la cara antero medial del tercio superior de la pierna izquierda presentaba un cuerpo extraño subcutáneo y un segundo cuerpo extraño en la cara lateral de la pierna izquierda, en el tercio inferior, en la masa muscular, conforme fotocopia de informe de ecografía de partes blandas de la extremidad inferior izquierda, de fecha 11 de noviembre de 2019, que el peritado le hizo entrega a la perito Patricia Negretti.

**Respecto a la conducta desplegada por Patricio Gormaz Torres:**

Que, la calidad de alumno de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército de Chile de Patricio Gormaz Torres y que ese día 21 de octubre integraba una de las patrullas que comandaba el capitán Puchi y que estaba a cargo de la teniente Navarrete, no fue motivo de controversia.

Que, para esta juzgadora la prueba de cargo reunió el estándar necesario para arribar a la convicción de la existencia de las lesiones - fractura del noveno y décimo arco costal izquierdo-, y que aquellas son consecuencia de la conducta desplegada por Gormaz Torres.

En efecto, la grabación hecha por la testigo Camila Ramírez Pino, desde la ventana de un dormitorio del segundo piso, de la casa ubicada en pasaje Zapiga, da cuenta de cómo ese día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 23:00 horas, dos personas pasan corriendo, atrás pasa un tercero, luego se escucha un disparo y se ve a un militar, un segundo militar y más atrás un tercer militar. Antes de que llegue el segundo militar se escucha decir algo seguido de un “concha de tu madre” y un quejido de la víctima, luego se ve de regreso a la víctima, los tres primeros militares uniéndose ahora otros dos militares más, correspondiendo uno de ellos a la teniente Navarrete, mientras lo trasladan, uno de ellos le da un golpe con la mano abierta en la cabeza.

Declarando en estrados la testigo Camila Ramírez Pino, autora del video, y Joshua Martínez Santibáñez, señala la primera, que se encontraban en el dormitorio del segundo piso, cuando escucharon un disparo y carreras, se acercaron a la ventana pudiendo ver a dos personas que corrían por el pasaje, tras de ello un tercero que pierde el equilibrio en el lomo de toro que hay en el lugar y cae al suelo, y en eso llegaron los militares y comenzaron a darle de golpes. A su turno, Martínez Santibáñez, agrega que escuchó cuando la víctima se quejó y luego les dijo me voy, me voy, dando a entender que lo llevaran detenido.

Que, las defensas intentaron desacreditar los dichos de la víctima en función a que éste no habría sido consistente en su relato dado en la anamnesis a la perito doctora Negretti y en la declaración prestada en el tribunal más, para esta juzgadora aquello no merma su credibilidad, desde que sus dichos se condicen en su núcleo con lo señalado por Gormaz Torres, como también respecto al desvío de su tabique nasal y el espolón óseo que le fue hallado en los exámenes posteriores que se le hicieron, porque si bien es cierto dichas lesiones son antiguas, años dijo la doctora Negretti, no es menos que resulta posible que la víctima solo hubiese tomado conocimiento de aquellas producto de estos hechos lo que tampoco le resta credibilidad a sus dichos y al respecto, solo le cabe a esta juzgadora no oírlo en esa parte.

A saber, prestando declaración el funcionario Gormaz Torres señala que la oficial Navarrete le dio la orden de seguirlo, él corría entre los camiones, lo siguió, llevaba su fusil en una de sus manos; la persona ingresó a un pasaje, y cayó, cuando llegó estaba

poniéndose de pie y le hizo un tacle porque él hizo un ademán de correr, tenía la intención de correr, pensó que iba a correr, se corrige señalando que lo que en realidad hizo fue abalanzarse sobre él, lo hizo desde un metro y medio más o menos porque él estaba con la disposición de correr. Cuando cayó sobre la persona - la víctima -, se quejó de sus costillas. Dijo que le dolían las costillas. Le preguntó, pero nada contestó. Caminaba bien, no tenía sangre. Le dijo a la teniente Navarrete que se había quejado de sus costillas.

Que, si bien Gormaz Torres solo da cuenta de haberse abalanzado sobre González Ocampo sí da cuenta de que cuando cae sobre la víctima éste de inmediato se queja de sus costillas, quejido que se escucha claramente en el video, y es él quien primero llega donde cayó el afectado, es él que lo ve poniéndose de pie - no resulta muy lógico abalanzarse sobre una persona que se está poniendo de pie, que está en el suelo, que ésta en una posición desmejorada frente a su aprehensor -, bastándole a Gormaz Torres levantarlo del suelo para detenerlo, y ya a lo menos había llegado un segundo funcionario al lugar de la detención.

Lo cierto es que González Ocampo resultó con dos costillas fracturadas y si bien es cierto le señaló a la perito Negretti que primero sintió una presión en uno de sus hombros contra el piso por un militar y luego sintió la patada de otro militar, no es menos que Gormaz Torres no da cuenta de que en ese momento en que se abalanza sobre la víctima y éste se queja de dolor ya hubiese llegado hasta el lugar uno de los otros cabos alumnos que salieron junto con él en persecución de González Ocampo y aquello encuentra sustento en el citado video en que se ve a la víctima corre, cae, tras él Gormaz Torres le grita, lo alcanza y se escucha el quejido, momento en que llega el segundo y luego el tercer militar.

Que, en los delitos de daños a la salud, es necesaria, para su consumación, la producción de un resultado lesivo, que afecte precisamente la salud del sujeto pasivo, dejando en este huellas o rastros perceptibles de dichos daños, que pueden resumirse en la idea de un efectivo “menoscabo de la integridad corporal o la salud física o mental” (Lecciones de derecho Penal chileno, Parte Especial, pág. 115. Sergio Politoff L., Jean Pierre Matus A., María Cecilia Ramírez G.).

Que, la prueba de cargo resultó suficiente para dar por acreditado que la víctima González Ocampo resultó con lesiones, en una primera instancia por pedigones en su extremidad inferior izquierda y, luego, en un segundo momento, cuando es detenido por la patrulla a cargo de la teniente Kamila Navarrete, resultó con dos fracturas en sus costillas.

En función de la declaración de la perito doctora Patricia Negretti, que afirmó que el golpe que la víctima recibió en sus costillas fue de alto impacto, por un pie calzado, se instaló en los jueces de mayoría aquella duda más allá de la duda razonable que no permite condenar respecto a la determinación del autor de tal golpe, lo que para esta

juez no resulta tal desde que es el mismo acusado Gormaz Torres quien reconoce haberse abalanzado sobre la víctima, circunstancia que no explica teniendo presente que en una de sus manos llevaba el fusil, y tampoco señala si junto a él había otro u otros funcionarios del ejército mientras realizaba tal acción, estas inconsistencias unido a su propia declaración y el momento en que es detenida la víctima, herida en una pierna con seis perdigones – no hay que olvidar lo que dijo Ibarra Pulgar al respecto, que había quedado tirado en el suelo cuando le pegó por rebote un perdigón en la mano -, permiten arribar a la convicción que las lesiones sufridas por González Ocampo fueron resultado de la conducta desplegada por Gormaz Torres, acción que fue realizada con dolo directo desde que lo golpea encontrándose en el suelo y cuando la víctima se estaba poniendo de pie.

#### **DELITO DE OMISIÓN.**

**PRIMERO:** Que, el persecutor imputa al acusado Miguel Puchi García un delito de omisión, previsto en el inciso primero del artículo 150 D, vigente a la fecha de estos hechos y que dispone: “Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo#.

**SEGUNDO:** Que, previo al análisis de la conducta omisiva del capitán Puchi al momento de los apremios ilegítimos, resulta necesario hacer un análisis ex antes de la responsabilidad de mando que le cabía a aquél como comandante a cargo de las dos patrullas, una a cargo del teniente Ibarra y la otra a cargo de la teniente Navarrete. A él aquel día le correspondía ir en una camioneta de la escuela de suboficiales, como punta de lanza, por ser el comandante de la patrulla, al mando de la columna; ya había autorizado que acompañara a la columna militar una camioneta de Megavisión a quienes en un principio los hizo ir tras los camiones pero, por razones de seguridad de los civiles los ubica entre los dos camiones militares, algo que está fuera de todo Reglamento; para luego y con una pobre excusa, como que no conocía el sector, se cambia con el teniente Ibarra y él toma el mando de la columna y Puchi toma el camión que comandaba Ibarra Pulgar; es decir, el teniente queda a cargo de dirigir las patrullas y, teniendo esa autoridad Ibarra Pulgar hace que los camiones militares ingresen al pasaje El jardín en búsqueda de un sujeto que momentos antes se encontraba en una barricada. Afirma que ellos iban por Las Parcelas al Oriente y a lo lejos distinguió una barricada con siluetas de personas, se acercaron, las personas huyeron, uno de ellos quedó rezagado, tomando la decisión de virar a la derecha en persecución de esa persona, corría, y con la camioneta lo sobrepasaron, él cambió de rumbo y corrió hacia donde estaban los camiones. Esa persona estaba en la fogata tirando piedras. Cuando le cerraron el paso con la camioneta él se bajó e inició la percusión, pero no pudo continuar porque le llegó un perdigón en su mano y quedó



“tirado”, Agregó que en ese momento no tenían reglas del uso de la Fuerza, pero, en todo caso debe solo hacerse uso de ella si se está en peligro y no sabe por qué a esa persona le dispararon.

Que, de acuerdo con lo señalado precedentemente el capitán Puchi, comandante a cargo de las patrullas traspasó su mando a un teniente quien fue quien tomó la decisión de seguir a una persona de quien supuso que estaba en una barricada que divisó a lo lejos y que solo pudo ver siluetas; no obstante aquello pudo ver las características de sus ropas.

El capitán Puchi se excusa diciendo que la forma de operar es en mando misión, pero ¿qué es el mando tipo misión? “El mando tipo misión es la conducción de operaciones militares a través de una ejecución descentralizada, basada en las órdenes tipo misión para lograr un cumplimiento efectivo de esta.” ( RDPL – 20001) La definición antes mencionada nos permite estudiar y analizar que el mando tipo misión busca un elemento primordial en nuestro entorno militar y, principalmente, en los comandantes de todos los niveles, lo cual se llama conducción. La conducción militar es el método que tiene cada comandante para llegar a los objetivos y misiones impuestas, no tan sólo en la ejecución de una operación militar, sino que en todas las etapas que se debe analizar y proyectar antes de cumplir mi objetivo. Para tal conducción es necesario una serie de elementos que harán posible lograr desarrollar el plan de una mejor forma, para tener el éxito esperado en cada operación. Por tal razón es que la doctrina institucional menciona y orienta a cumplir nuestras misiones con el mando tipo misión. Para ser aplicable a nuestra realidad, el mando tipo misión debe tener arraigado en su interior conceptos claves que nos permitirán desarrollar este tipo de mando de mejor manera, otorgando a nuestros subordinados ciertas libertades que podrán resolver para darle solución a las situaciones enfrentadas. **Para el resultado exitoso de este tipo de mando se requiere que todos los escalones desarrollen iniciativa, la que debe ser disciplinada, teniendo siempre presente la intención del comandante.** Se requiere, a su vez, un ambiente que sea de confianza y en donde todos se logren entender mutuamente. Para ser aplicable a nuestra realidad, el mando tipo misión debe tener arraigado en su interior conceptos claves que nos permitirán desarrollar este tipo de mando de mejor manera, otorgando a nuestros subordinados ciertas libertades que podrán resolver para darle solución a las situaciones enfrentadas. (Publicación EL MANDO TIPO MISIÓN Y SU INCIDENCIA EN LAS OPERACIONES MILITARES, Capitán Mauricio Norambuena Stockebra) mas, en el caso que nos ocupa solo se le dio como misión a Ibarra Pulgar conducir la columna porque tenía más conocimiento del lugar, pero no llevarla a la búsqueda y detención de una persona que se encontraba absolutamente desarmada y huyendo en forma despavorida, no en las condiciones que pretende Ibarra Pulgar convencer al Tribunal de que estaba en una fogata tirando piedras, circunstancia que se contrapone a lo

dicho por el conductor de la camioneta el funcionario Reinaldo Toro en cuanto dice que a lo lejos se vio una fogata, se ven personas, se escucharon disparos hubo un último fogonazo y una persona corre y en eso el teniente ve a una persona escondida tras un poste, él lo alcanzó con la camioneta, le cerró el paso, el teniente le decía que se detuviera, la persona se devolvió y el teniente se bajó. En la intersección del pasaje El jardín con avenida Las Parcelas no había fogatas y tampoco personas reunidas y menos disparando. Pero además, cabe preguntarse, sabía Ibarra Pulgar la intención de su comandante como recomienda el artículo del señor Mauricio Norambuena Stockebra, nada dijo al respecto.

Ante la situación provocada por el teniente Ibarra también se baja del camión el capitán Puchi, quedando entre ambos camiones, con su arma desenfundada, como se ve en el video, apuntando al parecer a la persona que huía, arma que desenfunda sin razón aparente, no había disparo de parte de la víctima, no estaba en peligro la vida de ningún funcionario, y los que se escuchaban daban la impresión de ser armas de fogeo de ellos mismos para lograr la detención.

La persona que huye pasa al lado de él y no se le escucha dar una voz de alto, tampoco se le ordena a los otros miembros de la patrulla descender y detener a la víctima (era un contingente militar contra una sola persona, que no estaba armado) y para detenerlo tuvieron que dispararle una escopeta anti disturbio. El comandante de la patrulla nada dice de lo que está sucediendo en ese momento, no da ninguna instrucción de que no se dispare la escopeta ante disturbios porque no estaban en aquella situación y no corría peligro la seguridad del personal militar y con su conducta omisiva permitió que una persona que solo estaba cometiendo una falta resultara lesionada con lesiones graves por parte de los funcionarios a su cargo.

Luego, le es entregado al detenido, esposado con esposas de plástico, sus manos atrás, le hace un inspección rápida a sus vestimentas y lesiones y solo constata que está muy enterrado, sucio – y cuál es la explicación de aquello?-, ninguna, el cayó en una calle pavimentada, sobre un lomo de toro, por lo que para que lo recibiera tan enterrado debió averiguar con los aprehensores la razón de aquello, lo que no hizo, y lo suben al camión que comandaba el teniente Ibarra y que hasta ese momento el mando lo tenía Puchi, ya que no se acreditó se decidieron tomar nuevamente los mandos originales, e Ibarra tomará el camión y él la camioneta de la escuela de Sub oficiales, lo dejan en el piso del camión, donde, según la víctima es agredido, por los otros funcionarios que se encontraban en el camión, y a este respecto algunos de ellos señalan que se autoagredía, lo cierto es que nada hizo el capitán Puchi para que esa agresión o autoagresión cesara, se detuviera, al bajar del camión llevaba otras lesiones en su rostro, fuera del rasmillón en la mejilla que da cuenta Ibarra Pulgar y Santander Nanjari y que Puchi no vio como tampoco vio los jeans que vestía rotos y con sangre por los perdigones, todos los otros testigos de este juicio y testigos presenciales de

estos hechos aseguran en su declaraciones que el acusado no tenía lesiones visibles y no explican por qué tenía otras lesiones en su rostro, como dio cuenta la perito Negretti, lesión junto a otras que necesariamente se hicieron en el camión y no porque él se auto agrediera.

El capitán Puchi, comandante de la patrulla Alfa, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidió y luego no hizo cesar la aplicación de los apremios a González Ocampo, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo.

El detenido pasó por su lado, corriendo, él tenía su arma desenfundada y lo dejó pasar, sin siquiera darle una voz de alto, sigue corriendo acercándose al segundo camión de la teniente Kamila Navarrete y tampoco hace nada, permite que casi encima de la víctima se dispare una escopeta anti disturbios por Santibáñez Lucero, sin que impida dicha acción del funcionario, lo que estaba en posesión de hacer con una sola voz de no disparar y, luego frente al detenido nada hizo, se le habían infringido apremios pero él no los ve, no los constata, se conforma con decir que le hizo una inspección rápida y es colocado boca abajo en un camión militar, con las manos amarradas hacia atrás; ya esa sola acción para una persona que tiene dos costillas quebradas, que se quejaba, y que el cabo Gormaz Torres se lo dijo a la teniente Navarrete, es un apremio ilegítimo más si en esas condiciones es agredido por los militares que se encontraban sentados y él a los pies de aquellos, y quien tenía a cargo el detenido, el capitán Puchi, y que por ese solo hecho resultaba ser garante de su seguridad física y psicológica, no hace nada para hacer cesar aquellos apremios ilegítimos.

**TERCERO:** Que, no deja de llamar la atención a esta juzgadora que el capitán Puchi no haya dado cuenta del procedimiento efectuado en pasaje El jardín con avenida Las Parcelas, para continuar en Quebrada Umallani y concluir en pasaje Zapiga, donde fue detenido González Ocampo, concurriendo a estrado el coronel Cristian Concha Vidal señaló que respecto a las planillas de consumo de municiones no se encontró información específica. No había antecedentes de incidentes. No había antecedentes de participación de personal del Ejército. No había antecedentes de consumo de municiones. Esta información le fue entregada por la Unidad.

El capitán Puchi intenta exonerarse de la obligación de informar al mando señalando que si lo hizo a su mando directo, por vía WhatsApp, forma absolutamente informal, en que le da cuenta de los detenidos de aquella noche que resultaron ser cinco personas, tres en un supermercado, otro que le encontraron piedras y marihuana y un quinto que les habría disparado, esa es toda la comunicación que entrega al mando respecto a un procedimiento en que había resultado lesionado un ciudadano.

La no información entregada por el señor Puchi comandante de la patrulla Alfa impresiona a esta juzgadora como querer ocultar o minimizar un procedimiento que

ellos realizaron y que no estaba ajustado a las reglas, debiendo dejar en claro que sí conocía las Reglas del Uso de la Fuerza, a lo menos las contenidas en el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2019, toda vez que la mayoría de los testigos daban algunos principios de aquellas.

Que, así las cosas el delito de lesiones por omisión se encuentra acreditado, toda vez que se cumplieron los dos requisitos que la ley exige, esto es, asunción efectiva de la posición de garante y equivalencia de la comisión de la omisión, en efecto, el señor Puchi el momento en que le entregan al detenido es garante de aquél y nada hace para evitar que se le sigan aplicando apremios ilegítimos y solo se limita a dejarlo en la 43 Comisaria de Carabineros, quienes después de constatar que el detenido está lesionado y a requerimiento de la 43 Comisaria de Carabineros hacen volver a la patrulla para hacer entrega formal del detenido, delegando dicha responsabilidad en el sargento Santibáñez por haber sido quien disparó. Nada hizo para saber si efectivamente la víctima estaba lesionada –tenía los jeans rotos por lo perdigones-, y se le había informado, además, que la detención había sido violenta y no lo lleva antes de entregarlo en la comisaria a un centro asistencial para revisar su estado de salud y precaver un agravamiento, ya que la víctima se quejaba del dolor de sus costillas.

#### **RESPECTO AL PROTOCOLO DE ESTAMBUL:**

**PRIMERO:** Que, por otra parte, y respecto al **Protocolo de Estambul** es necesario precisar lo siguiente, y respecto al esfuerzo que las defensas hacen para desacreditar el testimonio de la víctima, lo siguiente: Que dicho protocolo se coloca en la situación de que la víctima de relatos que contengan ciertas inconsistencias y así, en su apartado Evaluación de los antecedentes: señala que los supervivientes de la tortura pueden tropezar con dificultades para dar detalles concretos sobre lo sucedido y ello por diversas razones importantes, como: a) Factores circunstanciales de la tortura, por ejemplo los ojos vendados, las drogas, las pérdidas de conocimiento, etc.; b) El miedo a ponerse en peligro a sí mismos o a otros; c) La falta de confianza en el médico examinador o el intérprete; d) El impacto psicológico de la tortura y el trauma, por ejemplo la hiperexcitación emocional y las pérdidas de memoria que van asociadas a trastornos mentales relacionados con el trauma, como la depresión y el trastorno de estrés postraumático; e) La pérdida neuropsiquiátrica de memoria consecutiva a golpes en la cabeza, asfixia, casi ahogamiento o privación de alimentos; f) Mecanismos compensatorios protectores, como la denegación y la evitación; y g) Sanciones culturalmente prescritas según las cuales la experiencia traumática sólo puede revelarse en un ambiente estrictamente confidencial

Cualquiera de estos factores o todos ellos pueden explicar las incoherencias que se observen en la narración del caso de la persona. Siempre que sea posible el investigador pedirá que se le aclaren las cosas. Pero cuando no sea posible, buscará cualquier otro indicio que apoye o deniegue la historia.

Que, lo señalado precedentemente explica porque en el testimonio entregado a la perito Negretti contiene inconsistencia respecto a su declaración dada en el juicio.

Además, la perito señaló que en este caso existe concordancia entre las lesiones y las alegaciones de abuso, conforme lo prescribe el Protocolo de Estambul, afirmando que desconoce si en este caso se realizó un informe psicológico, que es la otra parte del Protocolo.

**CONVICCION ARRIBADA:**

Que, por estas consideraciones esta sentenciadora fue del parecer de condenar a los acusados por los delitos por el cual el ministerio público y querellante levantaron cargos; toda vez que la prueba fue suficiente para tenerlos por acreditados en términos similares a los señalados en el libelo acusatorio, como también se acreditó la responsabilidad criminal en estos hechos de los acusados Puchi García, Gormaz Torres y Santibáñez Lucero, en calidad de autores, conforme lo dispone el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Devuélvase a los intervinientes los medios de prueba que se hayan incorporado al juicio una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Sentencia redactada por la Jueza María José Araya Álvarez y el voto en contra por su autor.

Una vez ejecutoriado el presente fallo remítase al Juzgado de Garantía.

Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.

**R. I. T. N° 35-2024**

**R. U. C. N° 1901163870-0**

*Pronunciada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en sala compuesta por la jueza suplente doña Ingrid Droguett Torres, quien presidió la audiencia, la jueza titular doña Colomba Guerrero Rosen como tercera integrante y la jueza suplente María José Araya Álvarez en calidad de redactora.*